

TRANSGENICOS

(La fase oculta)

TRANSGENICOS

(La fase oculta)

INTER PRESS SERVICE

Colección
Entre dos siglos
ABYA-YALA
2000

TRANSGENICOS

(La fase oculta)

Inter Press Service

Primera edición en español

1a. Edición Ediciones ABYA-YALA
12 de Octubre 14-30 y Wilson
Casilla: 17-12-719
Teléfono: 562-633 / 506-247
Fax: (593-2) 506-255
E-mail: abyayala@abyayala.org.ec
editorial@abyayala.org.
Quito-Ecuador

Compilador: Kintto Lucas

Autoedición Pilar Arias V.
Abya-Yala Editing
Quito - Ecuador

Impresión Digital Docutech / UPS
Quito - Ecuador

Ilustración de Portada:

ISBN: 9978-04-647-X

Impreso en Quito-Ecuador, 2000

CONTENIDO

Presentación	5
Las plagas alientan cultivos transgénicos	7
Plebiscito genético	11
Siembran semillas de la dependencia	15
¿Una disputa ambiental o comercial?	19
Consumidores exigen una regulación	23
El comercio por encima de la salud	27
Norte y Sur enfrentados por manipulación genética	31
¿Sueño o pesadilla?	35
A los pies de Estados Unidos	39
No hay acuerdo sobre bioseguridad	41
Empresas se declaran libres de transgénicos	45
El sur de Brasil cierra el paso a la soja transgénica	47
¿Plaguicidas por transgénicos?	49
Una cuestión de mercados	53
Una discusión ética	57
Llevar la bioseguridad a la escuela	61
Entre la prohibición y la producción masiva	65
Amenaza para especies y ecosistemas	69
Un continente ignorado	73
Los científicos se dividen	77
Mayor marginación para los países pobres	81
Riesgo de contaminación biológica	85
Un monopolio de cinco transnacionales	89

Juicio mundial contra los transgénicos	93
Dólares contra la sensibilidad	97
Japón se etiqueta	101
No todo lo posible es deseable	105
El Banco Mundial defiende los transgénicos	109
Los peligros de la técnica exterminadora	113
Escalofríos	117
Las dos caras de Japón	121
Contradicciones de la propiedad intelectual	125
Un país transgénico	131
Receta para el desastre	135
El símbolo de McDonald's	139
Monsanto en el banquillo	143
¿Una vía para erradicar el hambre?	147
En defensa de la soberanía genética	151
Los transgénicos en la balanza	155
¿Un Caballo de Troya comercial?	159
La soja transgénica viaja en barco	163
Peligra la seguridad alimentaria	165
El polen contra los insectos	169
Paradojas del debate	173
Los gobiernos ignoran a la sociedad civil	179
La dependencia científica	183
Un hongo amaenaza la amazonía	187
El maíz, cercado por los transgénicos	191
Inter Press Service (IPS)	195

Presentación

En los últimos meses se ha desatado una dura polémica sobre la utilización de los productos transgénicos, que implica consideraciones éticas, económicas y políticas. Organizaciones ambientalistas de todo el mundo han denunciado los peligros que estos productos pueden acarrear para la salud al ser utilizados en la alimentación. También se ha puesto al descubierto la creación de plantas como el hongo *Fusarium oxysporum*, que utilizado como herbicida para matar las plantaciones de coca podría destruir el ecosistema amazónico. Los representantes de las empresas que manejan la producción y el comercio de semillas de soja, maíz y otras plantas modificadas genéticamente aseguran que sirven para aumentar la producción de alimentos en un planeta cuya población crece aceleradamente. Los agricultores afirman que la monopolización e imposición de este tipo de semillas condicionará sus cultivos. Los gobiernos se debaten entre la ignorancia y el deslumbramiento por lo nuevo. Los consumidores exigen transparencia por parte de autoridades y compañías transnacionales, y la identificación de los productos transgénicos con etiquetas que ayuden a distinguirlos para poder decidir libremente si consumirlos o no. Estados Unidos defiende sus empresas e invoca las leyes del libre comercio para exigir que no se identifiquen los alimentos porque podría provocar un rechazo masivo de los consumidores y la consecuente caída de ventas. América Latina, que poco a poco empieza a ser invadida por los transgénicos, no tiene leyes claras para su regulación y todavía no se abrió un gran debate en el que participe la sociedad civil con el fin de enfrentar los desafíos que nos presentan. Esta compilación de artículos, escritos por corresponsales de la Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) en diversos países, nos abre los ojos sobre una realidad que ya está entre nosotros sin conocerla lo suficiente, e inicia el debate sobre un tema que en los próximos años puede marcar, para bien o para mal, a toda la humanidad.

Las plagas alientan cultivos transgénicos

Mario Osava

San Pablo, Marzo de 1998

La agricultura se convirtió en campo de una guerra bacteriológica y química infinita, que justifica emboscadas comerciales y golpes de ingeniería genética.

El gran enemigo ahora en Brasil es la mosca blanca, que resiste a los plaguicidas en uso y está provocando fuertes pérdidas en los cultivos de soja, algodón, frutas y productos hortícolas del centro, sudeste y noreste del país. El insecto es conocido en Brasil desde hace 70 años, pero sólo se tornó un enemigo temible hace una década, por alguna mutación que lo hizo muy resistente a los insecticidas, logrando así condiciones para multiplicarse.

Lo peor es que parece capaz de atacar cualquier cultivo, según la investigadora María Regina Vilarinho, de la Empresa Brasileña de Investigaciones Agropecuarias (Embrapa), y se teme que extienda su destrucción a los naranjales del estado de Sao Paulo, que hacen de Brasil el mayor exportador mundial de jugo cítrico.

Además, podrá afectar a uno de los programas prioritarios del gobierno, la fruticultura en el noreste, una región pobre y semiárida que descubrió recientemente esa vocación agrícola, convirtiéndose en exportadora de frutas tropicales.

La mosca blanca ataca masivamente y en algunas siembras provoca “pérdida total”, comprobaron expertos de Embrapa. Chupan la savia y sus excrementos atraen hongos que agravan los daños causados a las plantas. La mayor agresividad y expansión en la última cosecha son atribuidas al calor provocado por el fenómeno de El Niño, que calien-

ta las aguas del océano Pacífico. Este es un caso aparentemente de desarrollo interno, en que el exceso o mal uso de agrotóxicos puede haber contribuido a la diseminación, resistencia y capacidad destructiva de la mosca.

Pero el peligro viene principalmente del exterior. Hasta 1994, cuando las importaciones brasileñas eran muy limitadas, entraba anualmente al país un promedio de 20 nuevas especies de insectos, virus y hongos dañinos a la agricultura. Ahora son centenares, estima Enio Marques, secretario de Defensa Agropecuaria.

El aumento resulta de la apertura del mercado brasileño y su consecuente ampliación de las importaciones, en un proceso acelerado no acompañado por el sistema de control sanitario. Los agricultores se quejan de la vulnerabilidad nacional ante esa invasión que reduce cosechas y aumenta los costos de producción. Brasil ya es uno de los mayores consumidores mundiales de agrotóxicos. La industria de productos de defensa de los cultivos facturó 1.860 millones de dólares el año pasado en Brasil, registrando un crecimiento de 21,23 por ciento, según la Asociación Nacional de las empresas del sector.

El Ministerio de Agricultura está más preocupado de las fronteras brasileñas que los militares. Uno de sus estudios identificó 38 plagas aún inexistentes en el país, pero que lo acechan desde tierras vecinas, justificando la necesidad de intensificar el control.

Es el caso de la “hierba de bruja”, maleza que en Ecuador y en Estados Unidos está destruyendo cultivos de maíz, trigo y sorgo, o de la cochinilla rosada, encontrada en Guyana y considerada capaz de atacar hasta 200 especies vegetales.

Los agricultores presionan por una defensa sanitaria más eficaz, para evitar pérdidas y costos adicionales. Los productores de manzanas, por ejemplo, acusan a Argentina de “exportar” sus plagas, como la mosca “*cydia pomonella*”, a los manzanares del sur de Brasil.

El problema es que tales reclamos se confunden con proteccionismo comercial. Los mismos agricultores brasileños condenan las restricciones que impiden el acceso de sus productos, especialmente frutas, a mercados ricos, como Japón, Estados Unidos y Europa. Las exigencias fitosanitarias ocultan la protección indebida a la producción nacional.

Japón exige para importar el mango brasileño tratamientos contra bacterias y hongos que no son exigidos al fruto procedente de países asiáticos, se quejan los exportadores. Las plagas agrícolas, emigrantes indeseables, siembran así la discordia comercial. Además, sirven de fuerte argumento en favor de las plantas transgénicas, contra las advertencias de ambientalistas sobre sus riesgos.

La soja transgénica, sometida a estudios experimentales en el Centro de Embrapa especializado en ese grano, permitirá una reducción de al menos 20 por ciento en los gastos de productos de defensa de los cultivos, sostuvo Rogerio Rizzardi, dirigente de la Asociación Brasileña de Productores de Semillas.

Plebiscito genético

Natalia Ucero

Madrid, Junio de 1998

Los productos alimenticios europeos que contengan maíz o soja genéticamente modificados deben llevar etiquetado, aunque esa disposición de los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) no acalla las protestas de los ambientalistas.

Los organismos transgénicos son aquellos cuyo código genético se ha alterado en laboratorio para introducirles genes de otros seres vivos o modificar los suyos y crear así vegetales, animales o microorganismos con nuevas propiedades.

El Parlamento Europeo dio luz verde en enero de 1997 a los alimentos genéticamente modificados, con la oposición de organizaciones ecologistas como Greenpeace, Grain y la Fundación Vida Silvestre.

Científicos y otras organizaciones no gubernamentales de todo el mundo también alertaron sobre los efectos en las personas de los cultivos transgénicos. "Es una lástima que la biotecnología se use para algo que no da ningún beneficio para la salud pública o el medio ambiente", dijo en ese momento Pere Arús, jefe del Departamento de Genética Vegetal del Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias de la región catalana, en España.

La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental, que agrupa a 170 asociaciones ecologistas de toda España, organizó asimismo una recogida de firmas para oponerse a la comercialización de los alimentos transgénicos. Entre tanto, las asociaciones de consumidores, aunque no se pronunciaron a favor o en contra, exigieron que los productos transformados genéticamente llegaran a los consumidores debidamente etiquetados. La Unión Europea (UE) hizo efectiva esa exigen-

cia de etiquetación. Pero las organizaciones ambientalistas continúan manifestándose en contra de la alteración genética de alimentos.

La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat), de España, indicó esta semana que, por primera vez en la historia, en esta campaña de siembra de maíz los agricultores pueden encontrarse en el mercado con las semillas etiquetadas, pero igual desconocerán la totalidad de sus efectos.

Se trata, dicen los ambientalistas, de variedades de maíz desarrolladas mediante manipulación genética por la trasnacional Novartis, uno de los gigantes de la industria biotecnológica y primera industria mundial del sector agroquímico, la segunda en semillas y la tercera del sector farmacéutico.

La característica principal de las nuevas variedades puestas en el mercado es la producción de toxinas insecticidas para crear defensas en las plantas, señaló Aedenat.

Novartis incorporó al maíz información genética de bacterias del suelo (*Bacillus thuringiensis*, Bt), que producen una sustancia tóxica letal para muchas orugas y larvas de insectos.

Aedenat advirtió que no hay garantía del comportamiento de las plantas manipuladas, dado que pueden ser afectadas por cambios en las condiciones del entorno (olas de calor, sequía), respondiendo de forma completamente imprevisible.

Las nuevas variedades de maíz también pueden tener repercusiones ecológicas muy graves para el cultivo de grandes superficies, aseguró la organización. En efecto, la acumulación en el medio de grandes cantidades de toxinas puede eliminar también insectos beneficiosos y microorganismos del suelo, con impacto imprevisible a medio y largo plazo para los ecosistemas y para los propios agricultores, destacó Aedenat.

La Organización Mundial de la Salud celebró en 1993 un seminario de expertos para estudiar el problema de los genes marcadores de resistencia en los alimentos transgénicos. Una de las conclusiones de ese encuentro fue que la presencia de marcadores en alimentos no constituye un problema de salud. También se observó que los últimos

desarrollos de alimentos transgénicos tienden a eliminar los marcadores de resistencia en el organismo.

Aedenat insiste en que los cultivos transgénicos pueden provocar reacciones alérgicas, tanto en el consumidor como en el trabajador agrícola.

La organización se opone a la importación y al cultivo de estas variedades de maíz transgénico en España, y ha iniciado una campaña para alertar de los riesgos a los agricultores. Al respecto, se someterá a plebiscito en Suiza una propuesta para prohibir la producción, utilización y las patentes de cualquier organismo animal o vegetal sometido a manipulación genética. Los impulsores de la propuesta, apoyados por el movimiento Verde y el Partido Socialista, también sostienen que las plantas modificadas genéticamente producen alergias.

Siembran semillas de la dependencia

Abid Aslam

Bangladesh, Julio de 1998

Un acuerdo entre la Monsanto Company de Estados Unidos y el banco Grameen de Bangladesh para ofrecer micropréstamos a los agricultores del país de Asia meridional amenaza la supervivencia de sus destinatarios, según una organización especializada.

El plan pretende aumentar las cosechas y lograr la autosuficiencia alimentaria, pero podría “convertir a los agricultores pobres, aunque independientes, en campesinos más pobres y dependientes”, advirtió la no gubernamental Fundación Internacional para el Progreso Rural (RAFI).

La fundación RAFI investigó las consecuencias sociales y económicas de nuevas tecnologías en sociedades rurales durante más de 20 años. Los préstamos se otorgarán para adquirir tecnologías agrícolas “apropiadas y sensibles al ambiente”, entre ellas herbicidas y tipos de arroz y algodón híbridos patentados por Monsanto. El arroz y el algodón son importantes cultivos en Bangladesh.

El banco y la trasnacional compartirán la propiedad del Centro Grameen Monsanto de Tecnologías Compatibles con el Ambiente, ubicado en la sede de la institución financiera en Dacca. Entre los primeros proyectos planeados se incluyen “granjas modelo” para probar cultivos de algodón, arroz y maíz de tipo híbridos, y técnicas de conservación, informó la portavoz de Monsanto, Diane Herndon.

En un principio, Monsanto invertirá 150.000 dólares en el Centro y aumentará su financiación a medida que apruebe nuevos proyectos, señaló. La compañía espera obtener “ganancias a largo plazo”. “En la

próxima década nacerán en el mundo más de mil millones de personas, la mayoría de ellas en el Sur en desarrollo, y podrán o no ser nuestros socios comerciales”, explicó Herndon.

Las semillas híbridas y manipuladas genéticamente (transgénicas) son diseñadas para tornarse estériles luego de la primera cosecha o para desarrollar deformidades genéticas indeseables. Monsanto asegura que no proporcionará semillas transgénicas a los campesinos de Bangladesh porque el país carece de las normas necesarias para su autorización. Pero el acuerdo podría presionar al gobierno para adoptar disposiciones favorables a la transnacional, opinan analistas del mercado agrícola.

No todas las semillas híbridas son transgénicas, pero las autoridades aduaneras y agrícolas no suelen notar la diferencia.

Algunos científicos apoyan los cultivos transgénicos porque aumentan las cosechas, pero un número creciente de sus colegas consideran que esta ventaja obliga a los agricultores a comprar nuevas semillas todos los años. Monsanto produce Round-up, un herbicida de "amplio espectro", y variedades de cultivos diseñadas para tolerar el producto químico. Grameen, cuyo modelo de microcréditos se convirtió en una de las exportaciones más conocidas de Bangladesh, también podría utilizar su influencia sobre el gobierno a favor de Monsanto, según algunas fuentes. El banco podría emplear su dominio en el medio rural para obligar a abrir los mercados.

“Grameen funciona en 36.000 aldeas y suele ser la única vía de los agricultores al crédito. Los labradores pobres podrían sufrir intensas presiones para comprar las semillas y herbicidas de Monsanto”, indicó el director ejecutivo de RAFI, Pat Mooney.

Monsanto es la mayor compañía agroquímica y la tercera empresa de semillas del mundo. En los últimos dos años gastó más de 8.000 millones de dólares para adquirir empresas de biotecnología y convertirse en líder mundial de ventas de semillas de algodón.

La transnacional se está fusionando con la compañía estadounidense American Home Products para crear una firma de “ciencias de la vida” por valor de 96.000 millones de dólares, que produzca cosas tan variadas como semillas, herbicidas, pastillas para el dolor de cabeza y

purificadores de agua. “Muchas de las transacciones se realizaron con el fin específico de ayudar a la compañía a penetrar con mayor rapidez en los mercados emergentes”, sostuvo el brazo privado del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC), que publicó un perfil sobre el presidente de Monsanto, Robert Shapiro.

Monsanto es inversor en Southeast Asia Venture Investments Co., un fondo de capitales de riesgo con sede en Singapur respaldado por la IFC. Shapiro es un destacado impulsor de la Cumbre del Microcrédito, una campaña para proporcionar microcréditos a 100 millones de las familias más pobres del mundo para el año 2005, al igual que el fundador de Grameen, Muhammad Yunus.

Por el acuerdo con Monsanto, Yunus podría ser “recordado en la historia como el hombre que se unió a una transnacional contra los ciudadanos del mundo y que introdujo tecnologías destructivas y monopolios corporativos en Bangladesh”, sostuvo la destacada ambientalista india Vandana Shiva.

Grameen comenzó un movimiento mundial que empleó “microcréditos para que las mujeres utilicen sus habilidades, sus conocimientos y sus recursos para erigir mercados para sus productos”, reconoció Shiva.

Pero la asociación con Monsanto podría revertir los logros al beneficiar las tecnologías importadas a costa del conocimiento técnico local, aseguró. “Las tecnologías de Monsanto endeudarán a los campesinos de Bangladesh porque deberán gastar más dinero en herbicidas, semillas, derechos de patente y honorarios de tecnología”, predijo Shiva. La activista agregó que “miles de agricultores se suicidaron en India” debido a las deudas ocasionadas por el fracaso de los cultivos híbridos.

El Consejo Indio de Investigación Agrícola pretende prohibir la importación de semillas que contengan el gen “terminator”, que se autodestruye y esteriliza las semillas para que los agricultores no puedan almacenarlas en el futuro.

Monsanto está en proceso de adquirir la firma Delta y Pine Land Inc., creadora del terminator, conocido formalmente como un “sistema de protección de tecnologías”.

¿Una disputa ambiental o comercial?

Mario Osava

San Pablo, Noviembre de 1998

Europa promueve campañas contra alimentos transgénicos porque van en contra de los intereses de su agricultura nada competitiva, basada en subsidios y agrotóxicos, y de su industria química, según el responsable brasileño de bioseguridad.

Europa, con fuertes excedentes agrícolas y como gran exportadora de insumos químicos, no está interesada en el desarrollo de la ingeniería genética en favor de una agricultura más productiva, afirmó Luis Antonio Barreto de Castro, presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio).

La alegada preocupación ambiental, en la resistencia a la soja y otros granos transgénicos, puede estar encubriendo una disputa por mercados, advirtió el biotecnólogo brasileño. Se trata también de razones comerciales, más que ambientales, que amenazan trabar en Brasil la siembra de la soja genéticamente modificada por la trasnacional estadounidense Monsanto, ya autorizada por la CTNBio.

Japón, que absorbe un tercio de las exportaciones brasileñas de soja, quiere importar el grano convencional, no el transgénico, comprobó el ministro de Agricultura, Francisco Turra, en visita al país asiático a principios de este mes.

Ante las resistencias que también hay en Europa, otra gran importadora de soja, el ministro regresó de Japón con dudas sobre autorizar la siembra en escala comercial de la soja resistente al herbicida Round-up, un producto también de Monsanto. La pérdida de mercados puede anular el avance en productividad y la reducción de costos.

El no gubernamental Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC) se opone por “no estar convencido de que haya habido una evaluación adecuada de los riesgos ambientales y de salud”, dijo Sezifredo Paz, asesor técnico del organismo.

Falta un estudio de impacto ambiental tanto de la soja modificada como del mayor uso del herbicida, “en las condiciones locales y no del exterior”, arguyó Paz.

El IDEC defiende también que los productos derivados de vegetales transgénicos, importados o nacionales, tengan rótulos con todas las informaciones a que tiene derecho el consumidor, sobre origen, insumos y efectos que pueden provocar.

Por considerar que el CTNBio presta poca atención a esos derechos del consumidor, el IDEC renunció al asiento que tenía en la Comisión vinculada al Ministerio de Ciencia y Tecnología, encargada de cuidar la seguridad biológica.

Otra organización de defensa del consumidor, el Procon de Pará, un estado del norte del país, se mantuvo en la Comisión y fue el único que votó contra la autorización de la siembra de la soja de Monsanto. Es el rechazo “no de gobiernos sino de los consumidores”, un movimiento fuerte en Europa y creciente en otras partes, incluso en Brasil, que puede impedir la expansión de los cultivos transgénicos, según Paz.

El IDEC logró, en un fallo preliminar de la justicia en Sao Paulo, impedir temporalmente la siembra de la soja transgénica, mientras no se realice el estudio de impacto ambiental.

Barreto de Castro aseguró que “no hay ningún riesgo ni ambiental ni para la salud humana”, la ingeniería genética aplicada no modificó características nutricionales de la soja, y se comprobó ausencia de efectos alérgicos adicionales. El experto lamentó que el debate se haya iniciado por la soja de Monsanto, que resiste a un herbicida, es decir facilita el uso de un veneno agrícola, “un aspecto antipático” que se emplea para atacar a toda la biotecnología. Pero previó una futura convergencia de la agricultura “que utiliza recursos biológicos, en lugar de los químicos”, y el movimiento ambientalista.

Dentro de poco tiempo habrá plantas modificadas genéticamente para resistir a insectos, lo que reducirá drásticamente el uso de insect-

ticidas, beneficiando el ambiente, indicó. Los venenos para controlar plagas de insectos representan un mercado mundial de 10.000 millones de dólares, destacó.

En cuanto a los consumidores, dijo que en el futuro habrá un sector que demande alimentos orgánicos, sin agrotóxicos ni transgénicos, y otro, “probablemente más amplio”, que aceptará la innovación. “La ingeniería genética no tiene vuelta”, se impone como un avance positivo, sentenció Barreto de Castro, recordando que ya está presente en más de 30 millones de hectáreas sembradas. Estados Unidos y Argentina cultivan soja transgénica en gran escala y Brasil, si no lo hace, perderá competitividad, concluyó.

Consumidores exigen una regulación

Gustavo González

Santiago de Chile, Febrero de 1999

La próxima reunión del Codex Alimentario será una nueva posibilidad de establecer regulaciones para los alimentos transgénicos, dijo un experto de la mayor organización mundial de consumidores.

Eduardo Carrasco, encargado del Programa de Alimentación de la oficina para América Latina de Consumers International (CI), señaló que las organizaciones de consumidores de la región deben concurrir con una posición común a ese encuentro, programado para abril en Ottawa.

El Codex Alimentario, un organismo vinculado a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), analizará en la capital canadiense el establecimiento de normas universales para el etiquetado de los productos alimenticios. “La información a los consumidores a través del etiquetado de los productos es lo fundamental para CI en el debate sobre los alimentos transgénicos”, dijo Carrasco.

CI es la mayor federación mundial de organizaciones de consumidores, con unas 200 agrupaciones de 130 países. Su sede central está en Londres y sus oficinas regionales para América Latina en Santiago de Chile.

Los alimentos transgénicos son aquellos de origen animal o vegetal cuya composición genética ha sido manipulada para aumentar su poder nutricional o rendimiento, haciéndolos más resistentes a plagas o a almacenamientos prolongados.

En el puerto colombiano de Cartagena de Indias finalizó la Conferencia Extraordinaria de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, cuyo objetivo central era aprobar un Protocolo Internacional de Bioseguridad. Mediante ese protocolo se buscaba establecer las bases para fiscalizar el comercio de los organismos transgénicos, cuestionados en algunos casos por causar problemas ecológicos y de salud, y en otros por contravenir ideas religiosas. La aprobación del protocolo quedó sin embargo aplazada por lo menos hasta mayo del año 2000, a raíz del bloqueo a la iniciativa de seis países que forman el llamado Grupo de Miami: Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos y Uruguay.

Estados Unidos, que aún no adhiere como parte al Convenio de Diversidad Biológica, hizo que los otros cinco países se alinearan tras su planteamiento de que las regulaciones a los alimentos transgénicos constituían barreras comerciales técnicas.

En Santiago, fuentes de la cancillería declinaron informar sobre las razones oficiales de Chile para rechazar el protocolo hasta el regreso del embajador Rolando Stein, quien encabezó la delegación del país a la conferencia en Cartagena.

Carrasco señaló que la posición de Chile refleja el “lobby” que hicieron durante la conferencia Monsanto y otras grandes trasnacionales que controlan el comercio internacional de alimentos transgénicos. Chile, al igual que los otros integrantes del grupo de Miami, es además un país interesado en desarrollar cultivos transgénicos para aumentar su potencial de exportador agrícola.

Carlos Muñoz, gerente general del Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, indicó que Chile importa productos transgénicos para desarrollar semillas que luego son reexportadas al hemisferio norte.

Estas operaciones se realizan aprovechando las diferencias estacionales con América del Norte y Europa, destacó Muñoz, quien agregó que las autoridades chilenas no han autorizado la comercialización interna de organismos manipulados genéticamente.

Según Carrasco, las posiciones de los países del grupo de Miami no son irrevocables y por tanto hay todavía un campo amplio para se-

guir debatiendo el tema, con la reunión del Codex Alimentario como la próxima instancia de diálogo. “No buscamos sistemáticamente la prohibición de los alimentos transgénicos, sino que reclamamos transparencia en la información al consumidor sobre sus características y composiciones”, dijo el experto al resumir la posición de CI. En este sentido, la organización está promoviendo el debate en las agrupaciones de consumidores de América Latina.

El comercio por encima de la salud

Angela Sánchez

Cartagena, Febrero de 1999

La conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica comenzó en medio de una fuerte polarización entre países industriales y en desarrollo, enfrentados por el texto del Protocolo de Bioseguridad que se debate en esta ciudad del Caribe colombiano.

El programa original preveía que los ministros de Ambiente de los 174 países que suscribieron el Convenio en 1992, en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, se dedicarían, siete años después, a aprobar el texto final del Protocolo.

Pero los 600 expertos enfrascados en un agitado debate no lograron aún ponerse de acuerdo. El Protocolo debe ser acordado por consenso, como un instrumento jurídicamente vinculante, para regular el uso, movilización y comercio de los organismos genéticamente modificados o transgénico.

Aunque el Protocolo debía estar listo antes de su inicio, la conferencia de las partes fue inaugurada oficialmente por el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien exhortó a la comunidad internacional a evitar la consolidación de un monopolio mundial de semillas y del mercado de alimentos. Pastrana advirtió que los productos transgénicos pueden beneficiar la alimentación y la salud, pero también convertirse en una pesadilla si no se manejan de forma responsable. El mandatario llamó a “enfrentar con responsabilidad temas implicados en la biodiversidad, como la seguridad alimentaria mundial, la salud, la diversidad cultural, los sistemas tradicionales de producción y el futuro equitativo, en el mundo industrializado y las naciones en desarrollo”.

El discurso disipó así dudas surgidas el fin de semana sobre la posición colombiana por su papel de anfitrión conciliador y ratificó la intención del país de continuar en la férrea defensa de los países con gran riqueza biológica.

El clima tenso que enmarca las dos reuniones simultáneas empeoró a partir de las denuncias hechas por las delegaciones de Brasil, India, Suiza y Venezuela sobre la falta de transparencia en los procedimientos seguidos por los presidentes de comisiones. “Llevamos ocho días de trabajo en grupos y subgrupos, según un procedimiento fragmentado, que desde el principio no ha sido transparente”, dijo Fernando Gervasi, jefe de la delegación de Venezuela. “Las delegaciones han trabajado hasta la madrugada los últimos cuatro días, a partir de tres textos propuestos que no reflejan el consenso, y ha soportado el aplazamiento de tres días de la reunión plenaria”, dijo Elizabeth Bravo, de la delegación ecuatoriana.

Argentina, Chile y Uruguay rompieron la unidad del mundo en desarrollo al adherir a las posturas del denominado Grupo de Miami, encabezado por Australia, Canadá y Estados Unidos, país que, sin embargo, no participa formalmente en la reunión porque no ha ratificado aún el Convenio de Diversidad Biológica.

Unos 100 países del Sur en desarrollo de Africa, América Latina, Asia y el Caribe, entre ellos India y China, los dos más poblados del mundo, se unieron contra el Grupo de Miami. “La historia se repite. Como hace siete años en la Cumbre de Río, Estados Unidos, a pesar de ser el único que no suscribe los acuerdos y por lo tanto no es parte oficial de la negociación, logra imponer sus intereses”, recordó Liza Covantes, de la organización ambientalista Greenpeace Internacional.

“Una de las estrategias es la fragmentación de las deliberaciones en muchos grupos y subgrupos. El uso exclusivo del inglés en los textos negociados, redactado por sus abogados, es otra vía. Incluso en el propio idioma es difícil entender a los abogados”, agregó Covantes.

La ingeniería genética, último capítulo en el desarrollo de la biotecnología, permite manipular procesos vitales de reproducción y multiplicación de la vida, al recortar genes de algunos organismos y pegarlos a otros para crear nuevos seres, cruzando las barreras entre plantas,

animales y humanos. La mayoría de los productos transgénicos son alimentos, semillas e insumos agrícolas y fármacos desarrollados por un pequeño pero poderoso grupo de empresas multinacionales, encabezadas por la estadounidense Monsanto y la suiza Novartis.

Sus principales productos son soja, tomate, tabaco, algodón y maíz resistentes a herbicidas unos, y a plagas, los otros. “La seguridad alimentaria, la salud, el ambiente y las economías del mundo en desarrollo están en juego. Estos intereses se enfrentan con los de los bilionarios exportadores de alimentos, lo que constituye el telón de fondo del desacuerdo”, explicó el científico colombiano Rodrigo Artunduaga.

“A pesar de ser economías en desarrollo, Argentina, Chile y Uruguay defienden el potencial de exportación de transgénicos del Mercosur”, dijo Artunduaga, integrante de la delegación colombiana.

De 28 millones de hectáreas sembradas con transgénicos del mundo, Estados Unidos representa 74 por ciento. Argentina ocupa el segundo lugar, con 15 por ciento, y Canadá el tercero, con 10 por ciento”, según el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología.

El valor de la comercialización de transgénicos de uso agrícola supera los 2.000 millones de dólares y alcanzará los 20.000 millones de dólares en el 2005, según previsiones de expertos. “El Grupo de Miami no ha querido ceder un ápice en sus pretensiones comerciales” pues “no quiere ponderar los riesgos para la salud ni para las economías nacionales, ni tampoco poner etiquetado a sus productos” transgénicos, se lamentó Gurdial Singh Nijar, abogado de la Red del Tercer Mundo.

Este grupo “quiere excluir del Protocolo 90 por ciento de los productos transgénicos y sus derivados, así como los productos farmacéuticos, e insiste en que la responsabilidad por eventuales catástrofes deben ser asumidas por los países importadores y no por las empresas ni los países exportadores”, agregó.

Norte y Sur enfrentados

Angela Sánchez

Cartagena, Febrero de 1999

La disyuntiva entre el libre comercio o la imposición de barreras al tránsito de productos transgénicos es la piedra angular de la negociación del protocolo de bioseguridad en curso en esta ciudad del Caribe colombiano.

Un grupo de países del Norte industrializado que exportan biotecnología, liderado por Estados Unidos (cuyo Congreso no ratificó la Convención sobre Biodiversidad de 1992) y aliado con empresas multinacionales del sector, abogan por el libre comercio de estos productos. “A pesar de que Estados Unidos no participa en la negociación oficial ni tampoco las empresas biotecnológicas, su presión dio resultado. Cuentan con el apoyo de países industrializados como Canadá y Nueva Zelanda y otros del Sur, como Argentina y Uruguay”, alertó Marijane Lisboa, de Greenpeace.

En el otro extremo, un bloque de países del Sur en desarrollo, liderados por Etiopía e integrado por casi toda Africa, así como por Ecuador, Colombia y otros con gran biodiversidad, reclama un Protocolo que sea un instrumento fuerte y que anteponga los principios éticos, ambientales y socioeconómicos al comercio. Este grupo cuenta con el apoyo de las principales organizaciones no gubernamentales de América Latina, Europa y Estados Unidos, entre ellas Greenpeace, Rafi, Grain, Red del Tercer Mundo y el Fondo Mundial para la Naturaleza, entre otras.

Un tercer bloque, integrado por países de la Unión Europea donde existe fuerte presión de consumidores, ambientalistas y agricultores, postula un Protocolo que permita el rechazo de importaciones de

transgénicos cuando se los considere peligrosos para la salud, el ambiente o la economía.

Pero, al mismo tiempo, esos países aspiran a legitimar su potencial exportador de productos manipulados. “Algunos países del Sur, entre ellos, India, México y Chile, empezaron a ceder ante esta tendencia ambigua”, advierte la bióloga ecuatoriana Elizabeth Bravo.

La ingeniera genética alemana Ricarda Steinbrecher opinó que la tendencia a privilegiar los intereses comerciales resulta para los potenciales consumidores de transgénicos peligrosa en lo ambiental, social, económico y sanitario. “Me preocupa que el principio de bioseguridad se sacrifique en aras del juego comercial. La ingeniería genética es una ciencia muy reciente, fascinante, pero está aún muy lejos de contar con certeza total sobre sus efectos en la salud y el ambiente”, explicó.

Investigaciones con ratones en la Universidad de la Sorbona de París revelan que algunos “genes marcadores” empleados en la producción de transgénicos provocan resistencia a los antibióticos, en particular la ampicilina, advirtió el científico colombiano Rodrigo Artunduaga.

Miembro de la delegación oficial de Colombia, Artunduaga se mostró preocupado “por la falta de conocimiento científico de muchas de las delegaciones oficiales que negocian el Protocolo”.

En la primera jornada de trabajo en el Centro de Convenciones de Cartagena, las delegaciones de casi 170 países se dividieron en grupos y subgrupos para estudiar el Protocolo punto por punto. Los países del Sur y las organizaciones no gubernamentales afirman que el Protocolo debe regirse por el principio de precaución, pero los exportadores afirman que no existen riesgos “considerables” que obliguen a frenar la comercialización, liberación y uso de organismos genéticamente modificados.

Los países del Sur quieren que el Protocolo incluya una estricta evaluación sobre los posibles impactos en la salud, el ambiente y la situación socioeconómica.

El Norte argumenta que existen otras regulaciones internacionales al respecto, y que el Protocolo debe restringirse a la regulación del

movimiento transfronterizo de los organismos manipulados genéticamente.

El punto más discutido es la responsabilidad en caso de que se descubran efectos negativos (como contaminación genética, daños a cultivos normales o a la biodiversidad y problemas de salud) a la producción, tránsito y consumo de productos transgénicos.

El Sur en desarrollo afirma que, en estos casos, las empresas y los países exportadores deben ser responsabilizados y penalizados. El Norte industrial, en cambio, afirma que los responsables deben ser los países importadores.

Se espera que los grupos logren llegar a acuerdos al respecto en los tres primeros días de la negociación. Pero la polarización de posiciones impide un pronóstico positivo.

“El fondo de la polarización radica en dos concepciones diferentes sobre la responsabilidad social y la visión ética frente a las relaciones entre la sociedad y la naturaleza”, explicó Lisboa.

El Norte argumenta que su desarrollo biotecnológico “permitirá aliviar el hambre en el mundo y contribuir a la cura de enfermedades como el sida y el cáncer”.

No ocultan, sin embargo, que su objetivo es “fortalecer el valor de las semillas norteamericanas y abrir nuevos mercados” en el mundo en desarrollo y en el desaparecido campo socialista, según portavoces del Departamento (ministerio) de Agricultura de Estados Unidos. “Sin embargo, la mayoría de los productos transgénicos han sido desarrollados con fines netamente comerciales”, advirtió Lisboa.

El caso más ilustrativo de ello es la estrategia desplegada por la multinacional Monsanto, principal productora mundial de agroquímicos y semillas transgénicas, para prolongar la patente de su producto más exitoso, el herbicida glifosato, que vence en el 2000, según el colombiano Germán Vélez, del Programa Semillas.

Para evitar la competencia, Monsanto diseñó semillas transgénicas de trigo, maíz y soja resistentes al herbicida, con el fin de que los cultivos sobrevivan a la aplicación del agroquímico y maten solamente las malezas, lo cual resulta atractivo para los agricultores que abusan de agroquímicos.

Pero al vender las semillas transgénicas, de las cuales las empresas tienen derechos exclusivos, la empresa obliga al agricultor a comprar glifosato, ya que los cultivos sólo son resistentes a esta marca de herbicida y a ninguno más. Además, los comprometen a comprar todo su paquete de insumos, con lo cual multiplican la dependencia de los agricultores, sin considerar el eventual impacto ambiental y los riesgos para la salud de los consumidores. El consumo de estos productos no sólo tiene posibles impactos por la alteración genética con que son producidos, sino también por su alta concentración de tóxicos. Portavoces de Monsanto aseguran que estas nuevas tecnologías ayudarán “a la implementación de modos de producción más limpios porque reduce el número de herbicidas utilizados y facilitará la producción mundial de alimentos”.

Las partes en contienda presentan, cada cual a su modo, diferentes versiones científicas para sustentar sus posiciones, lo cual polariza aún más las discusiones.

¿Sueño o pesadilla?

Angela Sánchez

Cartagena, Febrero de 1999

Representantes de las organizaciones ambientalistas más importantes del mundo pidieron en esta ciudad de Colombia la moratoria del comercio y liberación de organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos.

Unos 36 delegados de organizaciones no gubernamentales (ONG) de América Latina, Africa, Asia, Estados Unidos y Europa rechazaron la pretensión del Norte industrializado de monopolizar el control de la seguridad alimentaria, la producción de fármacos y los procesos agroindustriales en el mundo.

La postura de los países industrializados, apoyada por las empresas transnacionales de biotecnología, que fue considerada en la negociación del Protocolo de Bioseguridad, afecta especialmente a los países del Sur en desarrollo. “La moratoria deberá seguir hasta que se evalúen los riesgos que conlleva el consumo y liberación de OGM para la salud humana y la integridad de la diversidad biológica y cultural, y hasta saber cómo afecta a las economías de los países en desarrollo”, advirtieron las ONG.

Los ambientalistas apelaron al sentido de responsabilidad de las delegaciones gubernamentales de más de 150 países que asisten a la reunión en la norteña ciudad colombiana de Cartagena. La declaración de las ONG se produjo en el tercer día de negociaciones del Protocolo de Bioseguridad, en las cuales más de 500 delegados no han logrado conciliar los intereses contrapuestos del Norte y del Sur.

La reunión se propone dictar una serie de regulaciones internacionales sobre la transferencia, manejo y uso de OGM, que en su ma-

yor parte son cultivos diseñados y manipulados mediante la ingeniería genética.

Las organizaciones no gubernamentales exigieron que las decisiones sobre los transgénicos deben ser debidamente informadas y debatidas con la sociedad civil, “principal víctima potencial de estos productos y la gran ausente en las reuniones”, dijo el colombiano Germán Vélez, delegado del Programa Semillas.

Vélez informó que más de 100 organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas de América Latina, reunidas en Quito días antes de que comenzara el encuentro de Cartagena, pidieron la moratoria del comercio y liberación de OGM.

La declaración dada a conocer en esa oportunidad también rechazó la tendencia creciente a la manipulación y privatización de la vida, dijo Vélez, quien habló en representación de las organizaciones no gubernamentales latinoamericanas.

Por su parte, Marijane Lisboa, de Greenpeace Internacional, en representación de las ONG europeas, norteamericanas, asiáticas y africana, advirtió que “los ciudadanos, consumidores, agricultores y médicos deben ser informados y consultados, además de participar activamente en estas decisiones”. Sin embargo, “hasta el momento su participación ha sido restringida al mínimo”, aseguró Lisboa.

La científica Mae Wan Ho, genetista de la Universidad Abierta de Gran Bretaña, dijo, a su vez, que un grupo de colegas de varias partes del mundo ya lanzó una petición de “moratoria inmediata del comercio y liberación de OGM”.

Entre esas personalidades de la ciencia se encuentra Vandana Shiva, del Instituto de Investigación para la Ciencia y la Ecología de la India.

Wan Ho, célebre por su libro “Ingeniería genética: sueño o pesadilla” y pionera en las investigaciones sobre los riesgos en la manipulación de la vida, informó que la declaración incluye “un enérgico rechazo a las patentes y los sistemas de protección de derechos de propiedad sobre los seres 'vivos’”. Los investigadores se muestran muy preocupados por “las crecientes evidencias científicas sobre los nocivos efectos para la salud que causa el consumo y los ensayos con OGM”, agregó.

Wan Ho explicó que el estudio en ratas a las cuales se les hizo consumir papas transgénicas, en la Universidad de Virginia, demostraron importantes efectos negativos en sus sistemas inmunológicos y desarrollaron infecciones virales.

También se ha confirmado la utilización de “genes marcadores”, que aumentan la resistencia contra los antibióticos. Por otro lado, las semillas transgénicas diseñadas para resistir herbicidas, pueden “contaminar genéticamente” a otras especies y producir “supermalezas”, que también adquieren una fuerte resistencia a los venenos.

Esta tecnología intensifica el uso y el consumo de grandes dosis de agroquímicos como el glifosato o round up, cuyos efectos tóxicos para la salud han sido documentados de manera abundante, inclusive por investigadores del gobierno de Estados Unidos.

La ingeniera genetista Ricarda Steinbrecher informó que se lanzó en la sede del parlamento de Gran Bretaña una campaña nacional para solicitar una moratoria de por lo menos cinco años, al comercio y liberación de organismos transgénicos. “Contamos con el apoyo de un grupo de parlamentarios de todos los partidos ingleses, que han recogido las crecientes protestas ciudadanas por la introducción de transgénicos al territorio”, señaló Steinbrecher.

Las ONGs anunciaron que se reunirán con el ministro de Medio Ambiente de Colombia, Juan Mayr. Los ambientalistas esperan que Mayr, en su calidad de anfitrión y de representante de países ricos en biodiversidad, escuchará sus opiniones.

Las ONGs pretenden que sus posturas sean divulgadas y tenidas en cuenta por las delegaciones gubernamentales a la hora de redactar el nuevo texto del Protocolo de Bioseguridad.

A los pies de Estados Unidos

Angela Sánchez

Cartagena, Febrero de 1999

Grupos ambientalistas de Argentina, Chile y Uruguay denunciaron a sus gobiernos por haber roto el frente latinoamericano en la reunión de los países firmantes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica de Naciones Unidas que se desarrolló en Cartagena, Colombia.

Según esas organizaciones, Argentina y Uruguay (miembros plenos del Mercado Común del Sur) y Chile (asociado a ese bloque) se sumaron a Estados Unidos, Canadá y Australia en la defensa de las posiciones de los países más ricos en la reunión que se celebró hasta este fin de semana.

Las tres naciones sudamericanas sostuvieron puntos de vista “que no sólo están claramente en contra de los intereses de sus poblaciones en general, sus productores agropecuarios y particularmente sus consumidores, sino incluso de sus intereses económicos como países”, señalan los grupos ambientalistas.

La actitud cuestionada tiene que ver con los productos manipulados genéticamente, asunto en el cual Buenos Aires, Montevideo y Santiago “descartaron voluntariamente ser compensados en caso de daños económicos”, afirman.

En ese plano, los tres gobiernos asumieron la misma posición que la Coalición Global de la Industria, grupo de presión de las transnacionales de biotecnología, destacan las organizaciones “verdes”, entre las cuales figuran las filiales de Amigos de la Tierra en esos países. Argentina, Chile y Uruguay aceptaron no aplicar el “principio de precaución” previsto en el Convenio sobre Biodiversidad Biológica ante la duda de riesgo que pueda presentar el uso de productos manipulados genéticamente.

Tampoco estuvieron de acuerdo en incluir los riesgos para la salud humana representados por esos productos en los mecanismos operativos del protocolo de bioseguridad de la Convención.

Fueron partidarios igualmente de excluir del texto la llamada “responsabilidad socioeconómica” que las empresas y países exportadores de productos manipulados genéticamente deberían asumir en caso de daños, intencionales o accidentales, de fuerte impacto económico o social sobre determinado país.

Por otra parte, los tres gobiernos rechazaron que el protocolo de bioseguridad abarcara a otros productos de consumo que no sean las semillas destinadas a ser sembradas y reproducidas. Dejaron así fuera de las disposiciones del texto productos de consumo directo como semillas para la alimentación, vacunas, microorganismos, agentes de control biológico y, sobre todo, alimentos procesados y harinas.

Al asumir esta postura, Argentina, Chile y Uruguay causaron “el estupor de muchas delegaciones de otros países del Tercer Mundo y la dura crítica de todas las organizaciones no gubernamentales ambientalistas, indígenas y campesinas” presentes en Cartagena o que “siguen el tema”, afirmaron.

Esas organizaciones opinan de manera general que la producción y el consumo de productos transgénicos conlleva “riesgos muy altos para el medio ambiente y la salud humana que el público y la sociedad en su conjunto ni siquiera han tenido la oportunidad de debatir”.

Los tres países “hicieron caso omiso” de las posiciones que les elevaron “varias decenas de organizaciones ambientalistas y del sector rural e indígena” de América Latina, y “agravaron” su postura al “unirse al Grupo de Miami”, integrado por Estados Unidos, Canadá y Australia.

En el caso de Uruguay, la actitud del Poder Ejecutivo es “consecuente con la mentalidad de demostrar 'buena conducta' frente a la Organización Mundial del Comercio, adelantándose a lo que esa entidad pueda considerar 'trabas' al comercio, aun en perjuicio de los propios intereses nacionales uruguayos”. De acuerdo a las organizaciones no gubernamentales uruguayas Red de Ecología Social, Línea Verde, CEUTA, CIEDUR y la Red de Acción contra los plaguicidas, el gobierno de Julio Sanguinetti trajo a Cartagena una posición “inconsulta tanto con el Parlamento como con la sociedad civil”.

No hay acuerdo sobre bioseguridad

Angela Sánchez

Cartagena, Febrero de 1999

La confrontación de intereses comerciales entre seis países encabezados por Estados Unidos y el resto de las naciones obligó esta semana a aplazar un año y medio la firma del Protocolo de Bioseguridad, del que depende la seguridad alimentaria, el ambiente y la salud humana.

Tras nueve días y diez noches de deliberaciones en Cartagena, Colombia, los esfuerzos del gobierno anfitrión para acercar las posiciones en la Conferencia Extraordinaria de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica concluyeron con un acuerdo para prolongar la negociación. “En el último momento se logró consenso para continuar el debate sobre la base de los acuerdos adelantados aquí, que permitirán concertar y adoptar más adelante el Protocolo de Cartagena”, dijo Juan Mayr, ministro colombiano de Medio Ambiente y presidente de la conferencia.

El protocolo “será el primer instrumento multilateral emanado del Convenio de Diversidad Biológica para regular el uso, movilización y comercio de los organismos genéticamente modificados, especialmente alimentos transgénicos”, explicó.

Si se adopta, el Protocolo de Cartagena deberá ser sometido a la ratificación de cada gobierno signatario y su entrada en vigor podría tardar tres o cuatro años, explicó el representante de la delegación colombiana Manuel Rodríguez.

Mientras, cada país deberá aprobar leyes para regular el ingreso de productos transgénicos, o podrá establecer acuerdos regionales o bi-

laterales en la materia, e incluso prohibiciones o solicitudes de moratoria, tal como lo han hecho varios gobiernos.

Ecuador, por ejemplo, ante la creciente presión de la multinacional estadounidense Monsanto para introducir algodón transgénico a ese país, no aprobará ninguna solicitud al respecto hasta tanto se firme el Protocolo y se elabore una ley nacional, según Elizabeth Bravo, delegada de ese país.

Tewolde Berhan Gebre Egziabher, de Etiopía, encargado de representar a la mayoría de los países de Africa, América Latina, Asia y el Caribe en la defensa de la diversidad biológica y cultural y su supremacía sobre los intereses comerciales, logró acordar un texto con Europa y Japón.

La Unión Europea propuso eliminar la subordinación del Protocolo a las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), punto que fue rechazado con energía por la delegación informal de Washington.

Estados Unidos participó en la conferencia como observador, pues no es firmante del Convenio sobre Diversidad Biológica, pero lidera el denominado Grupo de Miami, integrado también por Argentina, Australia, Canadá, Chile y Uruguay.

La principal argumentación de Estados Unidos se basó en la necesidad de que el Protocolo no fuera incompatible con el mandato de la OMC, se subordinara a esta organización y no impusiera barreras comerciales a los transgénicos. “La insistencia del Grupo de Miami al respecto obedece a su interés de monopolizar el mercado mundial de alimentos”, según Dan Leskien, de la organización no gubernamental Amigos de la Tierra.

“La propuesta europea, más que expresar solidaridad con los países en desarrollo, busca abrir nuevos espacios a las disputas comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos en escenarios diferentes a la OMC”, agregó Leskien.

El Grupo de Miami se negó a aceptar la idea central del protocolo proyectado, el denominado “principio de precaución”, según el cual no se necesita certeza científica para rechazar la importación de productos transgénicos.

El derecho de los países importadores a informarse antes de aceptar o rechazar la introducción de productos transgénicos en sus territorios, también fue rechazado por el Grupo de Miami.

Este bloque se negó a que el Protocolo cubriera todos los productos transgénicos, pues pretenden la exclusión de fármacos, productos básicos para alimentación humana y animal, productos derivados (como harina y aceite), organismos en tránsito, en experimentación y materias primas, en especial granos. “Semejante exclusión dejaría por fuera más de 90 por ciento de los transgénicos y haría inútiles las demás disposiciones”, explicó Rodrigo Artunduaga, de la delegación colombiana.

Tampoco se avanzó en el debate sobre los riesgos socioeconómicos, ni sobre la definición de responsabilidades y compensaciones en caso de que el ingreso de transgénicos a un país tenga impacto en la salud o el ambiente. “Desde el principio, la industria biotecnológica, amparada por Estados Unidos y otros países industrializados, demostró lo que confirmó aquí: el Grupo de Miami nunca quiso un Protocolo de Bioseguridad sino un tratado de libre comercio”, dijo Chee Yoke Lang, abogada de la Red del Tercer Mundo.

Por su parte, Mario Rodríguez, portavoz de unas 2.200 empresas de 130 países, dijo que el nuevo plazo “permitirá al público y a los gobiernos adquirir mayor información sobre los beneficios de la biotecnología para aliviar el hambre, encontrar cura a muchas enfermedades y remediar la contaminación.”

“Siempre se acusa al Tío Sam de ser el malo de la película. Pero no se mencionan las adhesiones de Argentina, Chile, Uruguay, Canadá y Australia. El costo político habría sido mucho peor si se hubiese llegado a un mal acuerdo”, afirmó el jefe de la delegación estadounidense, Rafe Pomerance.

Cuba, único país latinoamericano que posee una industria biotecnológica avanzada, se manifestó “triste” y lamentó que “solo un pequeño grupo de países haya logrado detener el documento medianamente satisfactorio al que habíamos llegado”, dijo su vocero, Héctor Conde Almeida. “La historia no va a perdonar este momento”, agregó Conde. El Partido Verde de Alemania declaró que “dado que sus gobier-

nos no lograron un acuerdo, ahora queda en manos de los ciudadanos y consumidores presionar por la adopción de regulaciones nacionales”.

Liza Convantes, de Greenpeace Internacional, recordó que la presión de los consumidores logró que varios países europeos, como Gran Bretaña, Grecia, Francia, Luxemburgo y Noruega, hayan prohibido la siembra de algunos cultivos transgénicos y el uso de los que contienen genes marcadores resistentes a antibióticos.

Gran Bretaña considera la posibilidad de declarar una moratoria sobre la soja transgénica y Brasil la prohibición de esos cultivos.

Europa y Canadá prohibieron la importación de leche y carne procedente de ganado manipulado con una hormona de crecimiento, producida y exportada por Estados Unidos, luego de conocerse un informe científico sobre las alteraciones hormonales que provoca en adolescentes.

Libres de alimentos transgénicos

Alicia Fraerman

Madrid, Marzo de 1999

Un grupo de grandes empresas alimenticias europeas se unieron para declararse libres de alimentos transgénicos, informó en esta capital la organización ecologista Greenpeace.

Marks & Spencer, Sainsbury e Iceland, las tres de Gran Bretaña, Carrefour, de Francia, Superquinn de Irlanda, Migros de Suiza, Delhaiz de Bélgica, Effelunga, de Italia, Unilever de Alemania y el 90 por ciento de los supermercados austríacos anunciaron que se mantendrán “libres de alimentos transgénicos”.

En oposición a estas empresas se encuentran otras, como la suiza Nestlé y las transnacionales agroquímicas, que insisten en manipular genéticamente los alimentos y ponerlos a la venta. Los alimentos transgénicos son aquellos originados en animales o vegetales alterados genéticamente con el propósito de aumentar la productividad o de mejorar su calidad. La alteración o modificación genética es un procedimiento por el cual se transfieren de manera artificial determinadas informaciones exclusivas de un organismo a otro. Esos datos determinan una evolución más rápida, resistencia a las plagas, sabor distinto e incluso mezclas de especies.

El galardonado científico español Enrique Sánchez Monge, descubridor una década atrás de dos variedades nuevas de avena y una de trigo, además del triticale, una mezcla de trigo y centeno, señala que el desarrollo de la biotecnología es imparable y necesario. “Las alteraciones de laboratorio son el último capítulo de los cruces genéticos tradicionales, que se remontan a la prehistoria humana”, señaló.

Al respecto, Monge cita el ejemplo de la papa, que no resistiría a la enfermedad del mildiú si no hubiese sido cruzada con el *solanum demissum*, una variedad silvestre no comestible de ese tubérculo. Los opositores a la manipulación genética, en cambio, advierten sobre sus peligros.

En primer lugar, dicen que la modificación genética para resistir ciertos plaguicidas puede afectar a otras especies útiles.

En segundo, que las resistencias creadas en algunos vegetales comestibles podrían transferirse a sus consumidores y provocar que el organismo de éstos, rechace determinados antibióticos.

La campaña de las ONGs contra la manipulación de alimentos ha comenzado a dar resultados. Amigos de la Tierra informó que en el Reino Unido los alimentos transgénicos han comenzado a desaparecer de cadenas de comidas rápidas como Wimpy y Pizza Express.

El portavoz de Greenpeace, Ricardo Aguilar, señaló que la decisión del grupo de empresas libres de transgénicos "deja claro a los consumidores que si las empresas realmente quieren diferenciar entre alimentos transgénicos y convencionales pueden hacerlo". Al mismo tiempo, manifestó su esperanza de que muchas más empresas se unan a la iniciativa y celebró que en Brasil el oficial Instituto para el Medio Ambiente se haya sumado al pleito presentado por Greenpeace contra el cultivo de la soja transgénica, que pretendía realizar en ese país la trasnacional estadounidense Monsanto.

Pero otros dos científicos de la Sociedad Española de Biotecnología, José Miguel Martínez Zapater y Pere Puigdoménech, no concuerdan con Aguilar.

En una nota publicada por el matutino madrileño El País, afirman que es una manipulación informativa decir que los alimentos transgénicos son dañinos para la salud. No obstante, proponen un debate transparente sobre el tema.

En la Unión Europea, desde septiembre de 1998 los alimentos o ingredientes alimentarios destinados al consumo que hayan sido manipulados genéticamente deben hacer constar con claridad esa característica en sus etiquetas. Sánchez Monge comentó que algunos de los temores a los transgénicos le recuerdan informes que desaconsejaban el uso de máquinas eléctricas de afeitar por el peligro de que el polvo residual que dejan los cabellos cortados de ese modo produjese cáncer de pulmón.

Cierran el paso a la soja transgénica

Mario Osava

Porto Alegre Marzo de 1999

En Brasil la resistencia a la soja transgénica se concentró en Río Grande del Sur, cuya gobernación intenta convertir ese estado meridional en territorio libre de productos genéticamente modificados.

La Secretaría de Agricultura de Río Grande del Sur prohibió la semana pasada la siembra de semilla de soja transgénica en una superficie de cinco hectáreas, proyectada por la compañía multinacional estadounidense Monsanto.

La medida fue justificada por la falta de autorización estadual para que la empresa hiciera experiencias con la soja resistente al herbicida Round-up Ready.

La asamblea legislativa de Río Grande del Sur organizó un seminario con participación de ambientalistas para discutir un proyecto de ley que prohíbe la siembra y la venta de productos transgénicos en el estado. Río Grande del Sur es el territorio de mayor producción de soja en Brasil, y este país es, a su vez, el segundo productor mundial de ese grano, superado sólo por Estados Unidos.

El director ejecutivo de Greenpeace en Brasil, Roberto Kishimani, respaldó el proyecto de prohibición y propuso una mejor evaluación de las consecuencias de los organismos genéticamente modificados antes de permitir su uso en la agricultura.

No hay comprobación científica de que tales productos no causen daños al ambiente y a la salud humana, arguyó Greenpeace, que encabeza una campaña contra la soja de Monsanto en Brasil y otros países.

La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, un organismo gubernamental legalmente constituido para examinar ese tipo de asun-

tos, autorizó tanto la siembra experimental como la comercial de la soja Round-up Ready en Brasil.

La Empresa Brasileña de Investigaciones Agropecuarias también apoyó la introducción del producto en el país. El presidente de esa agencia gubernamental, Alberto Portugal, lo defendió como un importante aporte a la productividad nacional, que debe convivir con la soja tradicional, que obtiene mejores precios.

El nuevo ministro de Medio Ambiente, José Sarney Filho, se opuso. El Ministerio de Agricultura viene dilatando el registro del producto, pero el viceministro, Benedito Rosa, anunció que será aprobado tan pronto como Monsanto cumpla las exigencias formales de su pedido. Además de razones ambientales y sanitarias, las autoridades de Río Grande del Sur temen pérdidas comerciales, ante el rechazo que enfrentan los productos transgénicos en Europa, el principal mercado de la soja brasileña.

El mismo temor determina a otro importante estado agrícola del sur, Paraná, a mantener la prohibición de la siembra comercial de plantas genéticamente alteradas, y a fiscalizar las experiencias con la nueva tecnología.

El presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, Luiz Barreto de Castro, descalificó las objeciones de los ambientalistas, argumentando que éstos ignoran las medidas de seguridad dispuestas en el desarrollo de las plantas modificadas y sugiriendo que la campaña de resistencia puede responder a intereses comerciales. La gran industria química europea no tiene interés en la biotecnología aplicada en la agricultura, porque puede reducir en gran medida la necesidad de productos agrotóxicos. No hay riesgos ambientales ni para la salud humana en la soja Round-up, aseguró Roberto Lopes de Almeida, director de Asuntos Corporativos de Monsanto. Millones de personas ya consumen ese producto, sin sufrir ningún daño, dijo.

La resistencia en Río Grande del Sur alcanzó dimensión política, de oposición al gobierno central y sus autoridades científicas y agrícolas. El estado es gobernado, desde enero, por Olivio Dutra, del opositor e izquierdista Partido de los Trabajadores.

Al movimiento de rechazo de las semillas transgénicos se unió el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra.

¿Plaguicidas por transgénicos?

Gustavo González

Santiago de Chile, Mayo de 1999

Organizaciones campesinas, ecologistas y sociales de 12 países latinoamericanos demandaron el control ciudadano sobre el uso de plaguicidas, con renovadas denuncias sobre los daños que causan los agroquímicos en la salud y el ambiente. El tema fue abordado en un seminario convocado por la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL), una coalición de organizaciones no gubernamentales.

En el encuentro participan unas 300 personas, entre dirigentes, expertos, académicos y víctimas del uso masivo de plaguicidas y pesticidas, entre las cuales se incluyen madres campesinas que dieron a luz hijos con malformaciones.

La globalización, con la apertura de mercados y metas de mayor productividad agrícola, aumentó en los últimos años el comercio de estas sustancias hacia América Latina, que es la región de más rápido crecimiento en la importación de agroquímicos.

Según datos de organismos especializados, en 1996 las ventas globales de agroquímicos crecieron 5,5 por ciento, pero en América Latina el incremento fue de 16 por ciento, indicaron los organizadores del seminario.

Los procesos de armonización de reglamentos al interior de los bloques comerciales contribuyen a debilitar las leyes nacionales e incluso a bloquear las acciones que en el marco del ejercicio de la democracia apunten a regular los plaguicidas, añadieron.

El peruano Luis Gómero, coordinador de RAPAL, planteó la necesidad de contar con programas y acuerdos regionales para impedir

que se anulen los avances logrados con el dictado de leyes marco sobre ambiente y de control de plaguicidas.

RAPAL, como red regional de ONGs, busca crear mecanismos concretos para una participación efectiva de la ciudadanía y conseguir que la sociedad civil tenga los instrumentos necesarios para la fiscalización y control de los agroquímicos.

Rozas y Gomero subrayaron que el desarrollo de una agricultura sostenible es la respuesta adecuada de América Latina no sólo para disminuir el uso de plaguicidas y sus efectos sobre la salud de las personas, sino también para preservar el ambiente.

Alfonso Espinoza, dirigente nicaragüense de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), afirmó que una reforma agraria integral, la preservación ambiental y la conservación de la fauna y flora son parte de un mismo proceso.

Espinoza sostuvo que se culpa injustamente a la agricultura de subsistencia de los campesinos sin tierra de la degradación de los suelos, en circunstancias de que la mayor responsabilidad es de las trasnacionales que imponen políticas de monocultivos.

Las trasnacionales buscan compensar los bajos precios de las materias primas agrícolas con mayor productividad, para lo cual aplican agroquímicos en gran escala, lo que va provocando los daños a los ecosistemas, advirtió el dirigente.

En América Central, el embate sucesivo de los fenómenos de El Niño, la Niña y el huracán Mitch demostró que los daños fueron menores allí donde hubo anteriormente preocupación por preservar la flora y la fauna, indicó Espinoza.

Joao Roquett, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, señaló que el desarrollo de la agroecología entre los campesinos es “extremadamente revolucionario”, ya que es una respuesta al círculo vicioso en que se debate el medio rural en su país.

La falta de acceso a la propiedad de la tierra lleva a la exclusión del campesino y genera problemas ambientales y sociales, no sólo en el campo, sino también en las ciudades. Por ello “la reforma agraria es una lucha de todos”, dijo Roquett.

Sostuvo también que 40 a 60 por ciento de los créditos que se dan en Brasil para pequeños productores campesinos se invierten en semillas híbridas y agroquímicos, lo cual significa que se alimenta “la víbora debajo de la cama”.

Roquett, quien dirige un programa de producción de semillas ecológicas en el MST, advirtió además que en nombre de la eliminación de los plaguicidas se están introduciendo los cultivos transgénicos, que representan otro grave peligro. “No necesitamos transgénicos, queremos tierras”, expresó el dirigente, quien subrayó que estos tipos de cultivos, basados en la manipulación genética, constituyen una amenaza que se suma al empleo de semillas híbridas y de agroquímicos.

Una cuestión de mercados

Mario Osava

Brasilia, Junio de 1999

La autorización del Ministerio de Agricultura de Brasil para la siembra de soja transgénica en el país intensificó una polémica que involucra cuestiones ambientales, sanitarias y comerciales.

Brasil, único de los tres países mayores exportadores mundiales de soja que aún no produce variedades transgénicas, se convirtió en el campo de batalla de los que buscan trabar el avance de las empresas trasnacionales de las semillas modificadas de manera genética.

Con ese fin están en el país varios expertos extranjeros, como Lindsay Keenan, quien coordina desde Escocia la campaña Alerta a los Alimentos Transgénicos, y la hindú Vandana Shiva, directora del Centro de Investigación de Naciones Unidas de Ciencia y Ecología.

El gobierno brasileño está dividido, ante la oposición del Ministerio de Medio Ambiente a la soja denominada “Round-up Ready” (RR), de la empresa trasnacional de origen estadounidense Monsanto.

“No se hizo un estudio de impacto ambiental”, argumenta el ministro de Medio Ambiente, José Sarney Filho.

En el mismo Ministerio de Agricultura, e incluso entre agricultores, hay dudas sobre la conveniencia de incorporar esos granos a la producción nacional, por razones puramente comerciales.

El movimiento de resistencia a los transgénicos se desarrolló especialmente en Europa y Japón, los dos principales mercados de la soja brasileña.

Este país puede tener cautivo el mercado europeo, en su calidad de “mayor proveedor mundial de soja convencional”, añadiendo el ar-

gumento comercial para convencer a aquellos que poco se preocupan por los posibles daños ambientales y a la salud humana, señaló Keenan.

Argentina y Estados Unidos, los otros grandes productores y exportadores de soja, ya utilizan hace tiempo semillas con modificación genética y tendrían, por eso, mayores dificultades en vender sus granos en tales mercados.

El gobierno de Río Grande del Sur, uno de los estados brasileños de mayor producción de soja, encabeza la resistencia local y trata de mantenerse como territorio libre de los transgénicos, a través de medidas judiciales y decretos locales prohibiendo su siembra.

Pero es en ese estado donde se concentra gran parte de las siembras experimentales de soja y maíz, autorizadas por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), órgano del Ministerio de Ciencia y Tecnología encargado del asunto.

La CTNBio ya autorizó unas 650 áreas experimentales, pero técnicos del Ministerio de Agricultura reconocieron la total incapacidad del gobierno para inspeccionar y controlar la actividad.

Es “una contradicción” que en esas condiciones el gobierno apruebe la producción de la soja RR, criticó el secretario agrícola de Río Grande del Sur, José Hoffmann, quien pretende decretar una moratoria contra la siembra de transgénicos en su estado hasta que se compruebe su inocuidad.

El ministro de Agricultura, Francisco Turra, trató de aclarar que la concesión del registro de cinco variedades de la soja genéticamente modificada de la empresa trasnacional Monsanto no significa su comercialización inmediata.

Está autorizada la siembra para producción de semillas, pero podrá ser suspendida si hay daños identificados por cualquiera de las autoridades involucradas, los ministerios de Salud, Medio Ambiente o Ciencia y Tecnología, además de los órganos técnicos de su propia cartera, precisó.

El Congreso Nacional se incorporó al debate, promoviendo un seminario para discutir todos los aspectos de la cuestión, invitando a expertos internacionales, entre los que se cuenta Shiva.

La soja RR es resistente al herbicida Round-up de la misma Monsanto. Eso le permite una productividad 25 por ciento superior a la semilla convencional, argumenta la empresa.

Shiva cuestionó esa ventaja en un informe hecho para la Organización de las Naciones Unidas.

También Keenan divulgó estudios de la Universidad de Wisconsin, de Estados Unidos, que reveló aumento de hasta 14 por ciento en la productividad en Michigan, pero la reducción de dos a 14 por ciento en la mayoría de los estados del país.

El presidente de la CTNBio, Luis Antonio Barreto de Castro, defiende la decisión de su comisión científica, con el argumento de que la batalla es comercial.

Una discusión ética

Silvio Hernández

Ciudad de Panamá, Junio de 1999

Expertos en genética de América Latina defendieron en Panamá el uso de semillas transgénicas como vía para asegurar el aumento en la producción de alimentos, pese a las implicancias éticas y sanitarias que podría representar el mal uso de esa tecnología.

Los expertos Oscar Grau, de Argentina, Gustavo de la Riva, de Cuba y Julio Yau, de Panamá, fueron interrogados al respecto durante una mesa redonda realizada en el marco del VII Simposio Internacional sobre ciencias biológicas organizado por la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas.

Grau admitió que el peso económico y el importante mercado que han generado las semillas y plantas transgénicas, aunado “a los buenos negocios para las publicaciones escandalosas sobre esta tecnología”, han provocado inquietud en la población.

También reconoció que cuando se iniciaron las investigaciones en genética vegetal los expertos no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo.

“Era como tirarle una perdigonada al DNA de la planta, pegarle en 50 o tres lugares diferentes y escoger alguno que nos parecía bueno”, afirmó Grau. “Todo lo demás que podíamos hacer con esa planta, modificándoles genes que podían ser hasta dañinos, o no, no lo sabíamos”.

Sin embargo, afirmó que los investigadores actualmente saben lo que están haciendo con la ingeniería genética. “Sabemos que genes introducimos, cuántos de estos genes estamos metiendo en la planta, sabemos qué codifica ese gen, en qué ambiente está ubicada la planta y qué producto produce”, dijo el experto.

“Es cierto que esto puede producir problemas”, pero en el balance entre lo que se hizo antes y lo nuevo, “sabemos que estamos trabajando cuidadosamente y que no estamos haciendo cosas sin saber lo que pasa”, aseguró.

Grau advirtió, no obstante, que “el punto clave” no es el uso o no de la tecnología, sino “las cuestiones éticas que la sociedad va a tener que definir” sobre las mismas.

“Las modificaciones (genéticas) que se están haciendo pueden ser buenas o malas, pueden ser usadas con fines bélicos o con fines de control, y de allí importa que la toma de decisiones esté dada por una sociedad que no quiere que estas cosas se utilicen con fines dañinos”, precisó.

El científico argentino se mostró de acuerdo con que se haga una transferencia de genes para curar una enfermedad genética de una persona.

Pero si se trata de “crear una persona más rubia, más alta, con un color de ojos y con un nivel de inteligencia, va a tener que ser la sociedad la que tome decisiones sobre qué puede hacerse y qué no puede hacerse”, puntualizó.

Consumidores, ecologistas y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA) cuestionaron en octubre en una conferencia realizada en Montevideo la comercialización de plantas y semillas transgénicas por el peligro que las mismas pueden ocasionar a la salud humana y el ambiente.

El agrónomo brasileño Sebatiao Pinheiro, asesor de salud y ambiente de la UITA, advirtió en dicha conferencia que aún no se ha determinado la influencia que pueden tener las plantas genéticamente modificadas sobre la cadena evolutiva.

“Cuando una bacteria o un polen genéticamente manipulados escapan, nunca más se podrán recuperar, el ambiente nunca más volverá a ser el mismo. No es petróleo, que se ve. Esto no se ve y sus efectos son absolutamente incontrolables”, adujo Pinheiro.

De la Riva coincidió con Pinheiro en que hay que ejercer un control sobre las semillas genéticamente modificadas que pueden trans-

portar polen hacia las plantas nativas, así como asegurarse de que las mismas hayan sido aprobadas y certificadas en sus países de origen.

Sin embargo, el experto cubano precisó que todos los sectores involucrados deben “trabajar con seriedad y sin caer en las especulaciones que ha hecho la gente de los partidos ecológicos europeos”, que las pueden hacer porque “en Europa la gente no pasa hambre, pero a nosotros nos cuesta trabajo alimentarnos”.

“Nosotros tenemos problemas de abastecimiento, que son tan graves que no podemos darnos el lujo de hacerle caso a esos reclamos”, dijo De la Riva, tras indicar que una cosa son los intereses de las empresas trasnacionales y otra la necesidad de los países pobres de aumentar su producción de alimentos.

El científico panameño Yau también reconoció la preocupación sobre las consecuencias que puede acarrear el uso de esta nueva tecnología, pero recordó que “las mismas son muy importantes para desarrollar (...) variedades de semillas y plantas con excelente tolerancia a las enfermedades y plagas”.

La investigadora hondureña Carolina Turin, del no gubernamental Instituto Zamorano, afirmó que el problema de la comercialización y uso de semillas y plantas transgénicas es mucho más grave en aquellos países que, como el suyo, carecen de mecanismos de control sobre el ingreso de las mismas. “No tenemos como averiguar si están entrando transgénicos al país y mucho menos controlarlo”, advirtió Turin.

Llevar la bioseguridad a la escuela

Kintto Lucas

Quito, Junio de 1999

Los países de la Comunidad Andina deben acordar mecanismos de seguridad contra el riesgo que representan los productos transgénicos, exhortaron asistentes al I Encuentro Andino de Bioseguridad realizado en la capital de Ecuador.

Expertos en bioseguridad de varios países de América Latina, representantes de los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Cuba, Venezuela y de la UNESCO presentes en la reunión advirtieron que quienes toman decisiones sobre productos transgénicos no tiene la formación necesaria para tratar el tema.

Las autoridades de América Latina “que deciden sobre la introducción, uso y manejo de organismos vivos modificados por técnicas de biotecnología, requieren mayor capacitación”, señaló Arvelio García Rivas, de UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Los productos transgénicos son aquellos de origen animal o vegetal cuya composición genética fue manipulada para aumentar su poder nutricional, rendimiento y resistencia a plagas o almacenamientos prolongados.

La bióloga Elizabeth Bravo, de la organización ambientalista ecuatoriana Acción Ecológica, comentó que los productos transgénicos son nuevos en el planeta y que, por lo tanto, nadie, ni siquiera las empresas que los crean, pueden predecir su comportamiento.

“Las posibles alteraciones en la salud humana y ambiental son impredecibles”, aseguró Bravo.

La experta también advirtió las consecuencias socioeconómicas de estos productos. “Los campesinos se ven obligados a adquirir las semillas” manipuladas genéticamente “a una sola empresa, so pena de perder la carrera en la competencia comercial”, explicó.

“¿Quién asegura la bondad de las nuevas semillas?”, se preguntó.

La mayoría de los productos transgénicos comercializados son alimentos, semillas e insumos agrícolas y fármacos desarrollados por empresas multinacionales encabezadas por la estadounidense Monsanto y la suiza Novartis.

Sus principales productos son soja, tomate, papa, tabaco, algodón y maíz resistentes a herbicidas y a plagas.

Santiago Carrasco, de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Ecuador, aseguró que es necesario crear en la región andina una cultura sobre la bioseguridad.

“Es necesario que los países andinos desarrollen actividades conjuntas entre los sectores académicos públicos y privados con el sector productivo para fortalecer la biotecnología y la bioseguridad aplicadas al desarrollo”, dijo Carrasco.

Integrantes del Comité Ecuatoriano de Bioética, constituido a partir del Encuentro, señalaron que el desarrollo biotecnológico exige salvaguardar la integridad de las personas y los recursos naturales. “Hay que armonizar el desarrollo del conocimiento de la biotecnología, salvaguardando el patrimonio y la diversidad genética. La bioética debe ser entendida como una disciplina que procura humanizar la vida moderna y evitar la mala utilización de ese conocimiento”, aseguraron.

La experta cubana en bioseguridad Orfelina Rodríguez García señaló en el Encuentro que el principio de bioseguridad no se puede sacrificar en aras del libre comercio.

“Cuando un ser vivo genéticamente manipulado se escapa, el ambiente no volverá a ser el mismo. Las consecuencias son impredecibles”, señaló Rodríguez.

La experta cubana aseguró que es esencial controlar las semillas genéticamente modificadas y asegurarse de que hayan sido aprobadas y certificadas en sus países de origen.

“Los gobiernos deben informar a la población sobre los riesgos de la utilización de transgénicos y debe obligarse a que estos productos tengan etiqueta para que los consumidores sepan qué están consumiendo”, comentó Rodríguez

El Encuentro se realiza en momentos en que la revista Tribuna del Consumidor informa que podrían ingresar a Ecuador productos transgénicos sin que los ecuatorianos se enteren, ya que los alimentos procedentes de Estados Unidos no tienen etiqueta que los identifique como tales.

Bravo dijo que también existe posibilidad de que soja importada de Argentina sea transgénica. “Aunque Ecuador importa poca soja porque es autosuficiente, 80 por ciento de la que viene del exterior es Argentina y nadie puede asegurar hasta el momento que no sea transgénica como gran parte de la que se produce en ese país”, señaló Bravo.

Según Acción Ecológica, las papas estadounidenses importadas por restaurantes de comida rápida de origen norteamericano instalados en Ecuador podrían ser genéticamente modificadas, al igual que el aceite de canola y algunas materias primas para la alimentación de pollos.

La Constitución ecuatoriana aprobada en noviembre de 1997 establece que las leyes del país deben regular la entrada de productos transgénicos.

La norma constitucional solo puede ponerse en práctica mediante la aprobación de una ley complementaria en el Congreso o la emisión de un decreto ejecutivo.

“El problema es que Ecuador no tiene capacidad técnica para determinar cuáles son los alimentos transgénicos y cuáles no. Puede ocurrir que nos envíen gato por liebre” aseguró Bravo.

Para los presentes en el Encuentro organizado por UNESCO, la Fundación de Ciencia y Tecnología de Ecuador, el Grupo Nacional de Biotecnología y la Universidad Central del Ecuador, hay que difundir asuntos relativos a la bioseguridad en los centros de enseñanza.

El polen del maíz transgénico Bt mata las larvas de la mariposa “Monarca”, revelaron investigadores de la Universidad de Cornell en Nueva York.

Los estudios alertan sobre los efectos del polen difundido desde los campos de cultivo hacia las áreas naturales adyacentes, en Estados Unidos, Canadá, Argentina y España, donde se produce y vende comercialmente esa variedad de maíz.

Entre la prohibición y la producción masiva

Daniel Gatti

Montevideo, Julio de 1999

En los cuatro países del Mercado Común del Sur (Mercosur) comienza a instalarse un debate público sobre los organismos genéticamente modificados, pero las actitudes de los respectivos gobiernos varían de un extremo al otro.

Brasil ha avanzado hacia la limitación o la prohibición de los cultivos transgénicos, mientras en Argentina rige el criterio totalmente opuesto, al tiempo que Paraguay y Uruguay se mantienen en una posición expectante.

El juez federal brasileño Antonio Prudente prohibió en mayo la producción en todo el país de la soja transgénica, fallando a favor de una demanda presentada por el Instituto de Defensa del Consumidor (IDEC) y la filial brasileña de la organización ambientalista internacional Greenpeace.

Ambas instituciones habían solicitado la suspensión de la autorización gubernamental para la siembra comercial de soja transgénica.

Aducían que la empresa local Monsoy, filial de la compañía estadounidense Monsanto, no había presentado los obligatorios estudios e informes sobre el impacto ambiental que tendrían estos cultivos.

El juez advirtió, además, a los ministerios de Agricultura, de Medio Ambiente y de Salud que a partir de su decisión cualquier cultivo de esas semillas será considerado ilegal.

Esas dependencias gubernamentales habían dado su aprobación a la cinco variedades de soja transgénica de Monsoy, resistentes al agrotóxico Roundup.

Tras la resolución judicial, el ministro de Medio Ambiente, Sarney Filho, reclamó que se suspendieran los cultivos y la comercialización en Brasil de productos transgénicos hasta tanto no se efectúen estudios de impacto ambiental.

La abogada Flavia Lefevre Guimaraes, coordinadora del departamento jurídico del IDEC, señaló que “por fin se consiguió el reconocimiento de que liberar estas semillas en esas condiciones era un acto irresponsable”.

“Será muy difícil para Monsanto revertir la decisión del juez”, agregó

A su vez, el director de Reglamentación y Biotecnología de la empresa trasnacional, Luiz Abramides, afirmó que “el asunto está a estudio del departamento jurídico” e indicó que no deseaba “adelantar ninguna opinión hasta que esa dependencia no se pronuncie”.

El fallo de Prudente estuvo precedido por una decisión del estado de Paraná de prohibir el cultivo de productos transgénicos en todo su territorio, atendiendo la amenaza de los importadores europeos de suspender completamente sus compras de granos en el estado.

El gobernador de Río Grande del Sur, Olivio Dutra, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), ya se había pronunciado también a favor de declarar a ese estado “totalmente libre de transgénicos”.

Dutra emitió un decreto estableciendo severas restricciones para el desarrollo de sembrados experimentales con semillas transgénicas en todo el territorio estadual.

Una de las exigencias planteadas en el decreto es la presentación previa por parte de las empresas responsables de un estudio de impacto ambiental, así como evaluaciones técnicas que autoricen la experiencia y avalen que ellas respetan las normas establecidas por la Comisión Técnica Nacional de Biotecnología.

El diputado del PT Elvino Bohn Gass presentó en el Congreso de Río Grande del Sur un proyecto de ley que prohíbe “el cultivo comercial y la venta de productos genéticamente modificados destinados a la alimentación humana o animal”.

El legislador fundamentó su proyecto en “el desfase existente entre la complejidad de estos nuevos seres vivos y el escaso nivel de profundidad alcanzado por los científicos”.

Según Bohn Gass, “los inventores de estos productos han estudiado apenas el 0,2 por ciento de todo lo que hay para saber acerca de los genomas que aprendieron a trasladar a otras especies”.

Ello indica que con la manipulación genética “se puede estar modificando otras características del organismo original, con consecuencias irreversibles para la naturaleza”.

En ámbitos políticos de Brasil se estima que la ley tiene muchas posibilidades de ser aprobada, en especial por razones económicas.

Río Grande del Sur produce 22 por ciento de toda la soja brasileña, y en la actualidad obtiene en Europa y Japón, donde exporta casi la totalidad de su producción, un precio 50 por ciento superior a la transgénica, justamente, por su calidad “natural”.

Por otra parte, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, que reúne a centenares de miles de campesinos que luchan por una reforma agraria en Brasil, amenazó con destruir los cultivos clandestinos de transgénicos en Río Grande del Sur.

Grupos de agricultores armados con guadañas invadieron y destruyeron tres de esos cultivos experimentales en los municipios de Teotonia, Palmeira das Missoes y Cruzeiro do Sul.

La situación es completamente distinta en Argentina, el segundo mayor país del Mercosur.

Esa nación es la segunda productora del mundo de organismos transgénicos, detrás de Estados Unidos, con más de cuatro millones de hectáreas dedicadas a esos cultivos, en especial de soja, previéndose para este año el inicio de la producción de maíz, girasol, alfalfa y hortalizas genéticamente modificados.

En Argentina operan con total libertad las empresas biotecnológicas trasnacionales Novartis, Agrevo y Monsanto, y los empresarios nucleados en la Asociación de Semilleros Argentinos reclaman al gobierno mayor velocidad para la liberación de estos cultivos.

La Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria aprobó a su vez la solicitud de la empresa Agrevo para experimentar con dos tipos de arroz transgénicos, tolerantes al pesticida glufosinato de amonio, fabricado por la propia compañía trasnacional.

El diario argentino *Ambito Financiero* anunció que la cosecha de uva 1999-2000 en la provincia de San Juan, al noroeste del país, mediante la adopción de nuevas técnicas de riego y la implantación de cepas transgénicas, llegará a 100 millones de kilos.

Con ello, esa provincia se ubicará en el segundo lugar en el mundo entre los exportadores de uva, detrás de Chile.

En Argentina no se exige etiquetado de los productos transgénicos, y el gobierno se ha alineado detrás de las posiciones de Estados Unidos y las grandes empresas transnacionales de biotecnología.

En Uruguay, entre tanto, el gobierno mantiene una actitud ambigua.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca autorizó este año la realización de varias siembras experimentales, pero aún no liberó el cultivo de productos transgénicos.

El Comité de Análisis de Riesgo de Materiales Transgénicos, integrado por varias instituciones estatales uruguayas y encargado de recibir las solicitudes de las empresas, se rige hasta ahora por los criterios aplicados “en otros países”.

En realidad, se exige a estos productos los mismos requisitos que a cualquier otro, es decir dos años de siembra experimental.

El Comité autorizó un ensayo con eucaliptos transgénicos es que generan ciertas toxinas que repelen a las hormigas.

En Paraguay, empresas estadounidenses y argentinas han solicitado permiso para introducir semillas transgénicas de soja y maíz, pero el gobierno aún no se expidió al respecto y creó una Comisión de Bioseguridad que integran instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales.

Víctor Benítez, miembro de la Comisión de Bioseguridad en representación de una organización no gubernamental, manifestó que en su país “se está generando un amplio debate sobre los transgénicos”.

“Hay muchas personas en el gobierno que tienen dudas razonables sobre los riesgos ambientales y sociales de estos cultivos”, indicó.

AMENAZA PARA ESPECIES Y ECOSISTEMAS

Pilar Franco

Ciudad de Mexico, Julio de 1999

Entre las fuertes importaciones de maíz que realiza México se introduce al país grano modificado genéticamente, alertaron científicos y ecologistas, en tanto el gobierno procura prevenir los riesgos del uso de esos alimentos.

El gobierno prohibió el año pasado las pruebas con maíz transgénico en laboratorios e invernaderos, con el fin de evitar posibles amenazas para las especies silvestres de ese producto, base de la alimentación de la población del país.

Unas 50 especies y más de 10.000 colecciones del cereal que era ya producido por los indígenas mesoamericanos hace 6.000 años, se encuentran resguardadas por el prestigioso Centro Internacional del Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).

La Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIO), creada recientemente, afirma que la única manera eficaz de evitar los riesgos para la salud humana y el ambiente es mediante “un intenso esfuerzo de investigación y monitoreo de los posibles efectos” de los organismos transgénicos.

“La ausencia de evidencias sobre daños al ambiente no debe interpretarse como la inexistencia de riesgos”, señaló la comisión encargada de estudiar los efectos del uso de productos a los que se les introdujeron genes ajenos a su especie.

Un grupo de científicos de CONABIO y de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología advirtieron que, además de la suspensión de

pruebas con maíz modificado, es indispensable reforzar el control de las importaciones provenientes de Estados Unidos.

Un estudio conjunto de ambos organismos advierte sobre la amenaza que representa la introducción de maíz modificado al campo mexicano, que alberga variedades únicas en el mundo.

En 1998, México importó cinco millones de toneladas de maíz de Estados Unidos, que lo vende sin separar el material transgénico. Eso provocó la decidida protesta de grupos ecologistas nacionales e internacionales, como Greenpeace.

El 12 por ciento de los 190 millones de hectáreas de México se considera cultivable.

El año pasado se destinaron 8,4 millones de hectáreas al cultivo de maíz. En 15 por ciento de esa superficie se utilizaron semillas mejoradas, híbridos de la misma especie cuyo reforzamiento genético se logró por la vía convencional.

Con el empleo de semillas mejoradas, se espera que los rendimientos pasen de 2,3 toneladas por hectárea a 18 toneladas.

Tras 25 años de investigación, CIMMYT desarrolló el llamado maíz de alta calidad proteica, un nuevo híbrido con casi el doble de contenido nutricional del que aporta una variedad normal.

La siembra de semillas transgénicas alteraría la relación entre las variedades silvestres y comerciales del maíz, recurso genético del que existen en México cientos de variedades criollas y parientes silvestres como el Teocintle, señalan los científicos mexicanos.

Y advierten que el Teocintle, en caso de recibir genes de resistencia a herbicidas, “podría convertirse en una supermaleza difícil de controlar”.

México, con una considerable biodiversidad, alberga 40.000 de las 250.000 especies que conforman la riqueza mundial de plantas superiores.

“Si se experimenta con cuidado antes de introducir plantas modificadas en el campo, sería posible resolver los grandes retos que se plantean para el próximo siglo, como generar alimentos suficientes para una población creciente”, dijo Michel Chauvet, de la Universidad Autónoma Metropolitana.

La investigadora consideró indispensable que la comunidad científica y la sociedad mexicana “ponderen entre los riesgos y los beneficios de utilizar OGM, para determinar marcos normativos que regulen la utilización de éstos”.

En términos nutricionales, los alimentos transgénicos son más sanos al registrar un contenido mínimo de productos químicos. Sin embargo, “no hay certeza de las secuelas a la salud humana ante el consumo indiscriminado” de los mismos, afirmó.

El desconocimiento que aún se tiene sobre “la ingeniería genética y molecular y sus consecuencias en el ambiente, bajo efectos de variables infinitas, plantea la urgencia de que los laboratorios biotecnológicos recurran a técnicas más costosas pero más seguras”, añadió.

Actualmente se comercializan en México algodón y tomate transgénicos y la tercera parte de los tomates que consume la población es modificado genéticamente, según organizaciones campesinas.

Además, la empresa estadounidense Monsanto reveló que realiza pruebas con 12 OGM que podrían ser introducidos en México.

“La biotecnología puede aportar beneficios en términos de salud y forestales, pero al mismo tiempo representa una amenaza para las especies y los ecosistemas”, advirtió la CONABIO.

Un continente ignorado

Judith Achieng

Nairobi, 21 de Julio de 1999

Cada vez más científicos de Africa comienzan a aceptar la idea de solucionar la crónica escasez de alimentos en el continente con alimentos genéticamente modificados.

“Queremos crear un ambiente propicio para que los africanos puedan participar del desarrollo de la biotecnología y beneficiarse con él, mediante una agricultura responsable y sustentable”, declaró James Ochanda, de la Universidad de Nairobi.

Ochanda, quien dirige el Foro Nacional de Bioseguridad, con sede en Nairobi, sostuvo que la creciente preocupación en Europa acerca de la seguridad de las semillas modificadas genéticamente busca “que se propague el miedo, para impedir que nosotros tengamos acceso a los beneficios de la biotecnología”.

“Muchas inquietudes no tienen que ver con la seguridad de los alimentos. En Australia, Canadá, Estados Unidos, México y otros países se consumen productos transgénicos a diario, y no hay informes sobre efectos nocivos”, dijo Florence Wambugu, directora del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotécnicas de Nairobi.

Wambugu, quien desarrolló y patentó una nueva variedad de patatas dulces, afirmó en un artículo publicado por la revista Nature que Africa necesita la biotecnología para volverse autosuficiente en la producción de alimentos.

La biotecnología aplicada a la agricultura es la solución para las hambrunas, la degradación ambiental y la pobreza que asolan al continente, argumentó en ese artículo.

“Africa se perdió la revolución verde, que ayudó a Asia y América Latina a ser autosuficientes en la producción de alimentos”, y por lo tanto, no puede dejar pasar la “revolución tecnológica”, advirtió Wambugu.

El área mundial de tierras dedicadas a la producción de alimentos transgénicos aumentó de 1,7 millones de hectáreas en 1996 a 28 millones en 1998, indicó.

La cosecha de maíz promedio de Africa se mantiene en 1,7 toneladas por hectárea cultivada, mientras que en otras partes del mundo se obtienen cuatro toneladas en la misma superficie.

Los países del continente africano importan normalmente no menos de 25 por ciento de los cereales que consumen, y en los períodos de hambruna depende de la ayuda alimentaria que le brindan los países más ricos. Wambugu afirma que los mayores riesgos no residen en emplear la biotecnología sino en ignorarla.

Muchos grupos defensores de los derechos humanos de Europa y de Africa se oponen al uso de biotecnología en la producción agrícola, y afirman que el continente africano fue elegido como campo de experimentación por los fabricantes de semillas transgénicas que desean probar la seguridad de sus productos.

La biotecnología someterá a Africa a las manipulaciones de las compañías multinacionales más poderosas, mediante el implante del “gen exterminador”, que esteriliza las plantas, sostienen los activistas.

Los agricultores se verán obligados a comprar semillas a las multinacionales cada vez que necesiten sembrar, advierten.

“El temor a las semillas genéticamente modificadas que existe en los países industrializados se basa en evidencias científicas”, aseguró Jagjit Plahe, una investigadora de Econoticias de Africa, una organización no gubernamental de Nairobi.

Plahe señaló que una investigación patrocinada por el Estado en Gran Bretaña demostró que los vegetales genéticamente modificados fertilizan a los que no han sido modificados, y afirmó que “las inquietudes y la controversia son totalmente legítimas”.

La investigadora citó el caso de los agricultores del nordeste de Tailandia, que cultivaron durante años una variedad de arroz de alto

rendimiento en las cosechas llamada “Jazmín”, hasta que una firma estadounidense la patentó, y obligó a los cultivadores a comprarle semillas cada vez que quieren sembrar.

“Esa variedad de arroz fue desarrollado por los agricultores tailandeses, pero les robaron ese conocimiento”, subrayó.

El conocimiento tradicional no está reconocido en el acuerdo sobre Aspectos Relacionados con el Comercio de los Derechos de Propiedad Intelectual, de la Organización Mundial del Comercio, contra el cual Plahe realiza una campaña.

“Creo que las semillas transgénicas no pueden solucionar muchos de los problemas de Africa. Quienes recomiendan esa refinada tecnología para el continente africano deben saber que los volverá dependientes del mundo industrializado”, sostuvo Manfred Koehler, un ingeniero genético de Europa.

Pero Wambugu no está de acuerdo. “Los países africanos deben abandonar la 'mentalidad de víctimas' que se creó en Europa, para empezar a pensar y actuar como accionistas”, indicó en su artículo.

“La opinión pública parece dispuesta a aceptar la aplicación de técnicas de modificación genética en productos farmacéuticos pero no en los alimentos. No entiendo por qué deben usarse criterios distintos, sobre todo en Africa, donde existe una necesidad crucial de alimentos”, insistió.

“¿Por qué negarle a Africa o al mundo en desarrollo las tecnologías que ayudaron a incrementar los niveles de productividad del mundo industrializado?”, preguntó Simon Ehui, del Instituto Internacional de Investigación Ganadera de Etiopía.

“Uno se cansa de ser ignorado y utilizado por los demás. Los africanos deben expresar su propia opinión en este asunto”, manifestó Michael Wingfield, profesor de patología en la Universidad de Pretoria.

Los científicos se dividen

Porto Alegre, Julio de 1999

La comunidad científica de Brasil aparece dividida frente a la cuestión de los organismos genéticamente modificados en la agricultura.

Los granos transgénicos son un tema central y el más polémico de los debates dentro de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC).

La SBPC defendió ante el Congreso Nacional una moratoria de cinco años para la producción comercial de alimentos modificados genéticamente, con el fin de mejorar la evaluación de sus consecuencias ambientales y en la salud humana.

Ese plazo es necesario, porque el país no tiene condiciones aún para controlar y hacer seguro el consumo de tales productos, indicó la presidenta de la principal asociación científica de Brasil, Glaci Zancan.

Ese período se utilizaría para efectuar pruebas y análisis de riesgos, aprovechando los avances científicos, sostuvo Zancan, profesora de bioquímica de la Universidad Federal de Paraná.

La siembra comercial de la soja transgénica desarrollada por la empresa estadounidense Monsanto, fue autorizada por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) y por el Ministerio de Agricultura, y prohibida por la justicia.

La CTNBio, organismo multidisciplinario subordinado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, aprobó también más de 600 proyectos experimentales con plantas genéticamente modificadas, especialmente soja, maíz y arroz.

Técnicos del Ministerio de Agricultura admitieron no tener capacidad para hacer un seguimiento e inspecciones de tantos experimentos.

Medidas judiciales requeridas por organizaciones de defensa del consumidor y gobiernos estatales, con apoyo incluso del Ministerio de Medio Ambiente, están trabando la producción de soja de Monsanto.

Los gobiernos de Río Grande del Sur, Mato Grosso del Sur y Paraná los estados que concentran la producción de soja en Brasil, tratan de impedir la siembra, incluso la experimental, a través de sucesivas acciones legales y proyectos de ley en trámite en los parlamentos estatales.

El profesor de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Francisco Salzano, que fue objeto de un homenaje por parte de la SBPC por sus investigaciones en genética, atacó como “medieval” y “stalinista” la posición del gobernador de Río Grande del Sur, Olívio Dutra, enemigo declarado de la producción de transgénicos.

Dutra respondió que no aceptará la “dictadura de Monsanto”, en referencia a los métodos de la compañía transnacional, que impone condiciones y busca conquistar el monopolio en la venta de semillas.

La presidenta de la SBPC emitió un comunicado aclarando que es favorable a las técnicas de ingeniería genética, como factor de “mejores condiciones de vida para la población”, pero con riguroso examen de cada caso.

La CTNBio cometió un error al aceptar evaluaciones de las variedades de soja hechas por la misma empresa Monsanto, interesada en el caso, dijo Zancan.

La científica defiende una ampliación de la Comisión para incorporar análisis de toxicología, epidemiología y nutrición, actualmente ausentes.

Las divisiones entre los científicos y autoridades, incluso dentro del gobierno federal, son estimuladas por presiones de las empresas transnacionales de las semillas, como Monsanto y la alemana AgrEvo.

Por otra parte, sucesivas misiones comerciales europeas apoyaron las actitudes de rechazo a las transgénicas, indicando que solo granos

convencionales tendrán un mercado asegurado en Europa. Esa región es el principal mercado para la soja brasileña.

La falta de consenso respecto de las consecuencias sobre la salud humana, el medio ambiente y las exportaciones agrícolas hace hesitar al país sobre la conveniencia de liberar, postergar o proscribir los alimentos transgénicos.

Mayor marginación para los países pobres

Gumisai Mutume

Washington, Agosto de 1999

No es disparatado imaginar que un día México deba pagar regalías para cultivar maíz, vegetal originario de estas tierras que ahora se produce en todo el mundo.

México no produce suficiente maíz para alimentar a su población y es cada vez más dependiente de las importaciones de Estados Unidos, que en forma creciente proceden de grandes firmas que utilizan semillas genéticamente modificadas de alto rendimiento.

Según las nuevas normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los creadores de las semillas y alimentos modificados tienen derechos de propiedad intelectual sobre sus productos, lo cual significa que los campesinos de todo el mundo deberán pagar cada vez que planten esas semillas.

Los partidarios de esta tecnología dicen que ofrece alto rendimiento, resiste a las enfermedades y produce alimentos a bajo costo que benefician a todos, especialmente a las poblaciones desnutridas del mundo en desarrollo.

Sin embargo, muchos dudan de la seguridad de los alimentos genéticamente modificados, así como de la concentración de poder en un puñado de trasnacionales que los producen y reclaman derechos de propiedad por sus nuevas variedades transgénicas.

“Las grandes compañías de alimentos intentan patentar todo, pero no hay esfuerzos serios de nuestro gobierno para corregir esto en forma realista”, dijo Jorge Nieto, un profesor del Instituto de Biotecnología en la Universidad Autónoma de México.

“En el mundo en desarrollo, el único país que conozco y sé que está tratando seriamente de defender su biodiversidad es Brasil”, apuntó.

“Las multinacionales invirtieron miles de millones de dólares en investigación desde comienzos de los años 80, y yo no veo que ningún país en desarrollo gaste semejante cantidad de dinero en investigación”, agregó.

Nieto advirtió que dentro de pocos años las consecuencias pueden ser catastróficas.

Un tipo de arroz jazmín de alto rendimiento, cultivado durante años por campesinos de Tailandia, fue patentado por una corporación estadounidense y cada vez que los agricultores tailandeses quieren plantarlo se ven obligados a comprar las semillas a la multinacional.

La vincapervinca rosada, una planta encontrada en Madagascar que posee propiedades anticancerígenas, dá ganancias por 100 millones de dólares anuales a una multinacional estadounidense, pero el país de origen no obtiene un centavo.

Los orígenes del maíz se remontan a más de 5.000 años en la región que hoy abarca a México y América Central.

Su cultivo fue adoptado en otras partes del mundo y se convirtió en la dieta básica en muchos países en desarrollo, especialmente en Africa.

Sin embargo, Nieto cree que aún no es tarde para que el Sur en desarrollo comience a proteger aspectos claves de la agricultura doméstica de la dominación extranjera.

Los países pobres deben hacer un esfuerzo concertado para proteger sus intereses cuando la OMC negocie aspectos vinculados del convenio sobre derechos de propiedad intelectual (TRIPS) en materia de servicios y agricultura.

La agenda de estas negociaciones se fijará en la Tercera Conferencia Ministerial de la OMC en Seattle, Estados Unidos, del 30 de noviembre al 3 de diciembre.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) expresó que la reunión de Seattle es la indicada para que los países en desarrollo exijan un régimen más favorable.

“El obstáculo es la necesidad de una legislación que abarque los diferentes intereses de cada país”, señaló el PNUD durante el lanzamiento del Informe de Desarrollo Humano.

Los derechos de propiedad intelectual fueron planteados por primera vez en el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles (GATT), el predecesor de la OMC, para tratar de contrarrestar las falsificaciones. Ahora lo abarcan casi todo, incluso programas de computación y materiales de plantas transgénicas.

Unas 28 millones de hectáreas de tierra son cultivadas en el mundo con plantas genéticamente modificadas, y se prevé que esa cifra se triplique en los próximos cinco años. Estados Unidos es el mayor productor con 74 por ciento del total, seguido por Argentina.

No obstante, la Unión Europea es la que más se resiste a las modificaciones genéticas debido, sobre todo, a la oposición de los consumidores a este tipo de alimentos.

Si bien la alteración genética podría brindar una solución para alimentar a la creciente población mundial, muchas organizaciones no gubernamentales temen que el control de la propiedad intelectual, como en el caso de las semillas, pueda marginar a los países pobres.

En Kenia, por ejemplo, las ONGs se oponen a una ley que adaptará al país a las normas sobre propiedad intelectual de la OMC, pero a la cual la sociedad civil se resiste porque pondría en peligro el sector agrícola, que quedaría en manos de unas pocas trasnacionales.

Activistas de India elevaron en abril un recurso ante la Corte Suprema contra la ley de patentes que concede monopolios a corporaciones trasnacionales de fármacos y agroquímicos. El gobierno indio trata de evitar sanciones estadounidenses promoviendo esa ley.

Los países industrializados poseen 97 por ciento de todas las patentes del mundo, aunque las naciones en desarrollo son fuente de 90 por ciento de los recursos biológicos mundiales, señaló el Informe de Desarrollo Humano 1999 del PNUD.

Entre los principales cultivos modificados genéticamente se encuentran la soja, el maíz, el algodón, las semillas de rábano, la canela y el banano, todos fuente de divisas extranjeras en muchas naciones en desarrollo.

Hace cinco años Estados Unidos aprobó el primer alimento genéticamente modificado, un tomate. Luego le siguieron semillas herbicidas y resistentes a la sequía, algunas con genes adicionales obtenidos de bacterias y virus para lograr mejores cosechas.

Ahora hay 56 productos de granja transgénicos en el mercado doméstico estadounidense y expertos industriales pronostican que en cinco años todos los productos agrícolas del país serán transgénicos o mezclados con aquellos genéticamente modificados, aunque siguen en manos de unas pocas corporaciones que los desarrollaron.

Lillian Marovatsanga, del Instituto de Ciencias de la Nutrición, Alimentos y Familia de Zimbabwe, apuntó que los países en desarrollo no tienen la capacidad financiera o los recursos humanos para contrarrestar esa tecnología.

Organizaciones como la OMC y el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) deben rescatar a las pequeñas economías y fijar rápidamente normas y controles que eviten su eventual marginación, exhortó.

“Riesgo de contaminación biológica”

Gustavo González

Santiago de Chile, Septiembre de 1999

El gobierno de Chile está permitiendo un gran aumento de los cultivos transgénicos, así como la venta de alimentos de este origen sin los debidos resguardos, según denuncias de organizaciones de ecologistas y consumidores.

Un estudio divulgado por la Fundación Chile Sustentable afirma que “la superficie de plantaciones transgénicas aumentó cuatro veces entre 1997 y 1998, esto es desde 7.152 hectáreas a 28.541 hectáreas”.

Los alimentos transgénicos son producidos mediante procesos de manipulación genética en que parte de los genes de un organismo son insertados en otros usando como vehículo un virus o una bacteria para aumentar así su productividad.

En estas manipulaciones pueden combinarse genes animales con vegetales, o viceversa, para contar así con semillas, generalmente de maíz y soja, que posibiliten la modificación de alimentos derivados de estos dos productos.

Los transgénicos llegan al consumo humano a través de harinas, proteínas, aceites, almidones, lecitina, maltodextrina, dextrosa y jarabes de glucosa, empleados para elaborar alimentos como galletas, cereales, postres, helados, confituras y chocolates.

Los productos transgénicos, según sus detractores, pueden producir en las personas alergias, resistencia a antibióticos y bacterias ambientales e intestinales, infecciones por regeneración de virus de enfermedades e incluso cáncer.

Hasta ahora el gobierno de Chile defiende la comercialización de OGM basado en la defensa del libre comercio y argumenta que en este país no se venden alimentos transgénicos, sino que sólo se cultivan semillas que son luego exportadas al hemisferio Norte.

La utilización del territorio chileno para esos efectos queda en evidencia en el aumento de las empresas dedicadas a estos cultivos, de dos en 1994, a 13 en 1998, la mayoría de ellas extranjeras.

Organizaciones ambientalistas advirtieron que esta expansión de los cultivos manipulados genéticamente significa un serio riesgo para la biodiversidad y la agricultura chilena, en especial para recursos fitogenéticos del país, como la papa, el tomate y el maíz.

La Fundación Chile Sustentable sostuvo que esta amenaza se origina en que no se están aplicando cuarentenas a las semillas transgénicas importadas que son sembradas en el país, lo cual implica “un inminente riesgo de contaminación biológica a los cultivos y malezas cercanas (a las plantaciones)”.

“La desregulación de los cultivos transgénicos implica que Chile está transgrediendo su propia legislación, que exige cuarentena de bioseguridad”, e igualmente viola la Convención de la Diversidad Biológica, que es ley en este país, según la denuncia ecologista.

La Fundación Chile Sustentable y la Liga de Consumidores Conscientes denunciaron igualmente que “el maíz transgénico descartado para semilla está siendo usado como alimentos para cerdos y pollos”.

Esto representa un riesgo aún no determinado para los chilenos que están ingiriendo carne potencialmente contaminada con transgénicos, señaló Isabel Lincolao, dirigente de la Liga de Consumidores Conscientes.

Sara Larraín, candidata presidencial de grupos ecologistas para los comicios del 12 de diciembre, entregó en julio último a las autoridades una canasta de productos manipulados genéticamente que se venden en los supermercados chilenos.

Entre esos alimentos había galletas fabricadas en España, que fueron retiradas de los circuitos comerciales en ese país a raíz de las drásticas medidas de control de los alimentos transgénicos adoptadas por la Unión Europea.

Lincolao reclamó una inmediata rotulación de esos alimentos, en que se adviertan los casos en que contienen insumos derivados de cultivos transgénicos, al tenor de la Ley de Defensa del Consumidor vigente en Chile desde 1996.

También se plantea que el gobierno declare una moratoria a los permisos para la siembra de semillas manipuladas genéticamente y la destrucción de los actuales cultivos realizados sin cuarentena y otras medidas de seguridad.

La Fundación Chile Sustentable y la Liga de Consumidores Conscientes demandaron también una investigación para que se establezca la responsabilidad de los ministerios de Agricultura y de Salud en las situaciones denunciadas.

Un monopolio de cinco transnacionales

Danielle Knight

Washington, Septiembre de 1999

Los agricultores de Estados Unidos, enfrentados a bajos rendimientos y a la creciente oposición a sus cultivos genéticamente modificados o transgénicos, dudan si seguirán plantando este tipo de semillas más caras que las comunes.

Aproximadamente la mitad de la soja y del maíz plantado en este país procede de semillas genéticamente modificadas y un tercio de las cosechas son exportadas, sobre todo a Japón y Europa.

Pero las compañías alimentarias extranjeras evitan los productos agrícolas estadounidenses debido a la preocupación de los consumidores acerca de la salud y el ambiente.

En respuesta, numerosos comerciantes y exportadores de productos agrícolas, como Archer Daniels Midland (ADM), piden a los granjeros que separen los cultivos tradicionales de las variedades transgénicas.

Los precios de las cosechas alteradas se desplomaron y las existencias de las firmas biotécnicas están paralizadas o declinaron.

Por esa razón, se está desarrollando un sistema de producción en dos planos a medida que los granjeros, operadores de elevadores de granos y distribuidores optan por segregar los cultivos.

Los agricultores pagaron una cantidad adicional por simientes que las compañías biotecnológicas, Monsanto y Novartis, aseguraron que tendrían alto rendimiento, pero eso rara vez ocurrió y, en muchos casos, dieron cosechas más bajas que las tradicionales.

“Creemos que el año que viene habrá gran resistencia de los agricultores para comprar semillas genéticamente modificadas”, dijo Bill Christison, presidente de la Asociación Nacional de Granjas Familiares.

“Los organismos genéticamente modificados rinden menos y cuestan más, por más atractiva que sea la propaganda de Monsanto y Novartis”, añadió Christison, un granjero de Missouri que no utiliza las semillas transgénicas.

Christison dijo que recibió una carta de Monsanto diciéndole que no se preocupara de los consumidores en otros países y que la compañía encontraría un mercado para los organismos genéticamente alterados.

“Siguen tratando de vendernos sus semillas”, dijo. Debido a la falta de demanda exportadora del nuevo producto, la Asociación Estadounidense de Cultivadores de Maíz, que representa sobre todo a pequeñas granjas familiares, recomendó a sus miembros que planten sólo cosechas tradicionales.

Incluso si los granjeros piensan que los cultivos modificados son seguros, deben considerar las demandas del mercado, advirtió Gary Goldberg, funcionario ejecutivo de la asociación.

“Hay demasiadas incertidumbres en agricultura... no podemos cargar con las dudas adicionales de no saber si nuestras cosechas serán vendibles a compradores nacionales y extranjeros”, manifestó.

Algunos grupos de agricultores asociados financieramente con Monsanto y otras compañías, como la Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz, dejaron de recomendar a los granjeros que eviten la nueva tecnología.

Los granjeros pueden decidir por sí mismos si optan por plantar las semillas modificadas en la temporada de la primavera (boreal) del 2000, ahora que saben el costo de separar y probar los cultivos alterados.

“La separación de las cosechas significa una carga (financiera) para los granjeros”, declaró Dan McQuire, miembro del consejo directivo de la Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz, quien piensa que el Congreso debe responsabilizar a las compañías por las pérdidas financieras de los campesinos.

A pesar de la publicidad de Monsanto y de Pioneer Hi-Bred, otra firma de semillas transgénicas, los campesinos afirman que estas no rinden como las variedades tradicionales.

Charles Benbrook, un economista agrícola y ex director ejecutivo del Consejo de Agricultura de la Academia Nacional de Ciencias, dijo que después de analizar y comparar miles de cultivos de soja, se comprobó una disminución del siete por ciento en el rendimiento de las semillas alteradas de Monsanto.

Eso probablemente cueste a los granjeros entre 7,5 y 12,5 bushels por hectárea (cada bushel equivale a 35 litros). “Desde el punto de vista histórico, esto significó el mayor retroceso en la producción de soja”, apuntó.

“Cuando se combina el alto costo de la semilla modificada con la pérdida de esos bushels por hectárea, eso se transforma realmente en un gravamen sobre el ingreso para el granjero estadounidense”, agregó.

Desde que las semillas genéticamente modificadas salieron al mercado, la industria de simientes cambió drásticamente.

Las compañías químicas que apostaron al éxito de las semillas transgénicas invirtieron en la nueva tecnología y la programaron para trabajar con sus pesticidas, asociándose con multinacionales agrícolas en un intento de dominar el mercado.

Benbrook explicó que más de 10 compañías controlan cerca de 30 por ciento de los 23.000 millones de dólares anuales del comercio mundial de semillas, y cinco de esas firmas, Monsanto, Novartis, AstraZeneca, Aventis y Dupont, controlan casi todas las simientes genéticamente modificadas.

“El tema fundamental es saber quién controla los sistemas de alimentación”, dijo McQuire.

La Fundación de Tendencias Económicas, basada en Washington, y la Coalición Nacional de Granjas Familiares, integrada por agricultores de más de una docena de países, prevén demandar judicialmente por miles de millones de dólares a las grandes firmas agrícolas y biotecnológicas por sus prácticas monopólicas.

Los autores de la demanda están preocupados porque las compañías arriendan y no venden las semillas a los granjeros. Las corporacio-

nes que venden simientes en todo el mundo y adquieren patentes de propiedad sobre variedades de semillas impiden que los campesinos las usen en otras cosechas.

Muchos granjeros de países en desarrollo dependen de la práctica de ahorrar las semillas y temen que debido a las fusiones de las empresas agrícolas se vean obligados a comprar semillas transgénicas año tras año.

“Dentro de pocos años, ningún granjero en el mundo será dueño de sus semillas... Si eso no es motivo de una demanda contra el monopolio, no sé que puede ser”, dijo Jeremy Rifkin, titular de la Fundación de Tendencias Económicas.

Juicio mundial contra la utilización de semillas transgénicas

*Mario Osava
Gumisai Mutume*

Washington, Septiembre de 1999

Activistas de 30 países demandaron ante tribunales de todo el mundo a las principales productoras de semillas mediante manipulación genética, un paso que, afirman, liberará a la agricultura del control de unas pocas firmas.

“La acción refleja la preocupación de la humanidad por su futuro. Los transgénicos representan una amenaza económica a la agricultura y pone en riesgo la sobrevivencia de la humanidad”, señaló el profesor Sebastiao Pinheiro, de la Universidad Federal de Río Grande en Brasil.

El activista Jeremy Rifkin, líder de la Fundación de Tendencias Económicas, dirige la campaña para que los campesinos de Asia, Europa, América del Norte y América Latina desafíen el poder de los productores mundiales de alimentos genéticamente modificados.

“Compañías transnacionales como Monsanto o DuPont no están preocupadas por el hambre en el mundo o la calidad de vida de la humanidad. Quieren, sí, poder sobre la agricultura, dominar la política de alimentos, impulsadas por sus intereses comerciales”, dijo Pinheiro.

“Cuando el juicio esté en marcha tanto en Estados Unidos como en un tribunal extranjero, será la mayor acción antimonopólica del mundo, con excepción del caso Microsoft”, agregó.

Los activistas afirman que Monsanto, DuPont, Pioneer Hi-Breed y Novartis explotan la biotecnología con deslealtad, de modo de ganar gradualmente el control de los mercados agrícolas globales.

Los cultivos modificados se encuentran protegidos por patentes y contratos. Los campesinos que los plantan deben prometer que no conservarán las semillas para usos futuros.

Mediante el empleo de la biotecnología, las grandes corporaciones pretenden extender su control a 45 por ciento del mercado de productos biológicos. Su arma principal es un sistema de patentes concebido para proteger la creación de maquinaria y no para plantas y animales, dijeron los activistas.

Monsanto, junto con otras compañías agroquímicas, también está desarrollando métodos para alterar plantas para que no produzcan semillas utilizables.

Esto podría obligar a los campesinos a comprar semillas año tras año, y dar poder a las compañías para que dicten el futuro de las cosechas, dijeron los activistas.

“En el curso de la historia, los campesinos han sido capaces de producir alimentos y sembrar sus campos con sus propias semillas. Esas compañías están tratando de cambiar esto”, dijo Rich Lewis, uno de los abogados querrelante.

Firmas legales, contratadas sobre la base de que cobrarán sus honorarios sólo si ganan juicios, estudian las leyes antimonopolios que bloquee la querrela de Rifkin en tribunales estatales, federales o extranjeros.

Analistas agrícolas estiman que las grandes corporaciones poseen 30 por ciento del comercio global de semillas, evaluado en 23.000 millones de dólares, una cifra equivalente al producto interno bruto de Vietnam.

Cinco de esas compañías (Monsanto, Novartis, Astra-Zeneca, Aventis y DuPont) controlan, de hecho, todo el sector de cultivos genéticamente modificados, según los expertos.

Cuando Monsanto adquirió el año pasado las operaciones con semillas de Cargyll en Africa, Asia, América Latina y Europa por 1.400 millones de dólares, ganó el control sobre los centros de investigación y producción en 24 países y sus sistemas de distribución en otros 50.

El pleito se produce en momentos de creciente preocupación sobre las consecuencias de los cultivos genéticamente modificados y re-

sistencia de ciertos bloques económicos, como la Unión Europea, respecto del consumo e importación de esos cultivos.

En India, Vandana Shiva, conductora de la Fundación de Estudios para Ciencia, Tecnología y Ecología, expresó que la acción antimonopólica podría ser un agregado útil a campañas locales como la iniciativa “Fuera Monsanto de India”, que se inició un año atrás.

Sin embargo, por sí misma, su única consecuencia podría ser crear malestar entre los campesinos que son blanco de Monsanto y Cargyll, acotó.

La Fundación que lidera Shiva es uno de los tantos grupos que cuestionó ante la Corte Suprema de Justicia de India la nueva ley sobre patentes, que concede derechos monopólicos y de comercialización a trasnacionales de drogas y agroquímicos.

Cientos de granjeros de algodón en el mercado del estado meridional de Andhra Pradesh se suicidaron el año pasado tras el fracaso de sus cosechas. Habían adquirido costosos pesticidas, pero no pudieron pagar las nuevas semillas.

Brasil, una de las 10 mayores economías mundiales, se muestra contrario a la comercialización de estos productos. El Ministerio del Ambiente dijo que eran necesarios más estudios y que Brasil temía además la pérdida de estratégicos mercados europeos.

En la cumbre de la Organización Mundial de Comercio fijada para noviembre en Seattle, África cuestionará la posibilidad de patentar formas de vida, lo cual tendrá devastadores efectos en la agricultura, principal sector de sus economías.

En la actualidad, Rifkin está buscando una patente sobre el uso del ADN para crear híbridos humanos y animales, con la esperanza que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos prohíba la concesión de patentes sobre vida humana.

“La revolución biotecnológica obligará a cada uno de nosotros a poner un espejo a nuestros valores más profundos, haciéndonos formular la pregunta final sobre el propósito y significado de la existencia”, dijo.

En el pleito pendiente, Rifkin está asistido por 20 firmas legales, incluyendo Cohen, Milstein, Hausfeld y Toll, con sede en Washington,

el bufete que obligó a la banca de Suiza a pagar 1.250 millones de dólares a sobrevivientes del holocausto.

“La acción de esos 30 países puede ser beneficiosa para Brasil si estimula la creación de mecanismos para prevenir monopolios”, expresó Antonio Donizeti Beraldo, de la Confederación Nacional de la Agricultura, que representa los derechos de los campesinos.

La querrela resultará beneficiosa para todos los países en desarrollo si triunfa, según los activistas.

Cuando la firma W.R. Grace en Estados Unidos sacó una patente hace varios años sobre especies de semillas de soja, con ella obtuvo el derecho de controlar cultivos alimentarios en países en desarrollo valuados en 27.000 millones de dólares.

Dólares contra la sensibilidad

Daniel Gatti

Montevideo, Septiembre de 1999

Los países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) están lejos de armonizar sus posiciones respecto de los cultivos genéticamente manipulados.

Mientras en algunas naciones del Mercosur, que está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se ha limitado o incluso prohibido la producción de cultivos transgénicos, en otros se la alienta.

De acuerdo con la organización ambientalista británica GRAIN, América del Sur, cuyos gobiernos “reorientan sus economías hacia la exportación de productos transgénicos como llave para su crecimiento”, es “la nueva oportunidad para las transnacionales agroindustriales, que comienzan a encontrar escollos para su expansión en América del Norte y Europa”.

“La afluencia masiva de dólares ha provocado la insensibilidad de gobiernos (sudamericanos) a los obvios costos ambientales y sociales y, a largo plazo, los riesgos para la seguridad alimentaria” que representan los transgénicos, agrega.

En el Mercosur, la situación más contradictoria es la de Brasil, donde el gobierno federal autorizó la comercialización de varios tipos de semillas transgénicas, pero la justicia ratificó una resolución de validez nacional que impide la liberación de soja transgénica en el ambiente.

La medida judicial, tomada tras una denuncia del Instituto del Consumidor y de la filial brasileña de la asociación ecologista interna-

cional Greenpeace, afecta en particular los intereses de la empresa transnacional Monsanto.

El estado de Río Grande del Sur, de gran importancia económica por su producción agropecuaria, de la cual la soja es uno de los principales rubros, encabeza en Brasil la oposición a los transgénicos y ya en marzo de 1999 prohibió esos cultivos en su territorio.

El parlamento estadual estudia un proyecto de ley que propone declarar a Río Grande del Sur “zona libre de transgénicos” en forma permanente.

Un encuentro de organizaciones civiles del estado realizado en agosto en la capital regional, Porto Alegre, con participación de más de 2.000 personas, culminó con la adopción de la “Carta de Río Grande del Sur” y con la primera manifestación callejera contra los organismos genéticamente manipulados.

La Carta fue aprobada por grupos como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra y por sindicatos, asociaciones de profesionales, de ecologistas, de católicos, de agricultores, centros de estudio y movimientos de mujeres.

Citando “centenares de evidencias científicas y experimentales”, el texto sostiene que los transgénicos “son una amenaza y un riesgo para la salud humana y para la seguridad alimentaria, además de ser transgresores de los procesos armónicos de la naturaleza”.

Indica también que la producción y los negocios resultantes de las investigaciones relacionadas a la transgenia en la agricultura “están en manos de un grupo cada vez menor de empresas transnacionales”.

Esas compañías se fusionan y “pasan a controlar áreas fundamentales para la supervivencia de la humanidad y de las especies en general como las semillas, el procesamiento y distribución de los alimentos, la petroquímica y la química fina”, asegura.

Los firmantes exigen a los gobiernos federal, estadual y municipal, la suspensión inmediata de cualquier acción que legalice la producción y comercialización de alimentos transgénicos, nacionales o importados, así como liberar recursos para posibilitar el esclarecimiento de los riesgos de esta nueva matriz tecnológica.

Reclaman igualmente que se promueva la investigación pública y dentro de los principios de la ética, la sustentabilidad social, económica y ambiental, “orientada a la solución de las grandes mayorías, y no para generar mayor concentración y dependencia”.

En Paraguay, una Comisión de Bioseguridad de expertos, organizaciones civiles y parlamentarios, designada por el gobierno recomendó al Poder Ejecutivo que declarara al país “libre de organismos genéticamente modificados”.

Al ser la soja el principal producto agroindustrial de Paraguay, este pronunciamiento constituye un severo obstáculo a los planes de las trasnacionales de transgénicos, señalaron organizaciones civiles.

Desde que admitió la soja transgénica en 1996, Argentina es el segundo productor mundial de la semilla genéticamente modificada, con cuatro millones de hectáreas sembradas.

La Comisión de Bioseguridad, creada por el gobierno de Carlos Menem para estudiar el tema, es fuertemente criticada por grupos ambientalistas en razón del peso que tiene en su integración el sector industrial y la ausencia de ecologistas, asociaciones de consumidores y representantes de los agricultores.

En Uruguay fueron autorizadas numerosas plantaciones experimentales, fundamentalmente de maíz y soja transgénicos.

Una Comisión de Evaluación de Riesgos, que funciona a nivel gubernamental, cuenta con el asesoramiento de sólo cuatro expertos, y en ella no se permitió la participación de organizaciones civiles.

Japón se etiqueta

Suvendrini Kakuchi

Tokio, Octubre de 1999

El humilde frijol de soja, básico en la dieta de Japón, es ahora el centro de una feroz discusión sobre la seguridad de los alimentos transgénicos y está por convertirse en el catalizador de un cambio de actitud en este país.

Las compañías japonesas empiezan a dar más importancia a las necesidades del consumidor que a sus ganancias, señalan los activistas. Mientras, cada vez más personas se unen al movimiento contra los frijoles de soja genéticamente modificados, la mayoría importados de Estados Unidos.

Los supermercados separan los productos derivados de la soja, como el tofu (queso vegetal) y las salsas, y colocan los importados en una sección diferente que los fabricados a partir de materia prima nacional. La iniciativa no fue impuesta por el gobierno, y muestra un gran cambio de actitud en Japón.

Esa medida es importante para las organizaciones defensoras del consumidor que encabezan la oposición a la importación de alimentos modificados genéticamente y piden garantías de seguridad alimentaria, además de incrementar la autosuficiencia alimentaria en Japón.

Japón puede ser el segundo país más rico del mundo, pero la crisis de los frijoles de soja hizo que muchos japoneses se dieran cuenta de su dependencia de países extranjeros para obtener alimentos, indicó Yoko Tomiyama, presidenta del Sindicato de Consumidores de Japón, un fuerte opositor a los alimentos transgénicos.

“Nos alegra la crisis de los productos alimentarios genéticamente modificados. Ya era hora de que más japoneses pensarán en lo precaria que es ahora su situación”, explicó.

El Sindicato envió una carta la semana pasada a los agricultores estadounidenses, instándolos a separar los productos genéticamente alterados de los naturales cuando se exportan a Japón.

La carta cita datos científicos sobre los peligros que representan los alimentos genéticamente alterados para la salud y el ambiente. Los frijoles de soja de Estados Unidos, en su mayoría genéticamente modificados, representan más de 90 por ciento del consumo local.

Este es el motivo por el cual las organizaciones de defensa del consumidor no piden la prohibición inmediata de los frijoles transgénicos. “Si pedimos eso, los japoneses tendrían que renunciar a buena parte de su dieta habitual. Seríamos ricos económicamente, pero pasaríamos hambre”, explicó.

El Ministerio de Agricultura, Forestación y Pesca informó que la agricultura transgénica representa grandes ventajas para los productores, porque dicha tecnología sirve para que los cultivos se vuelvan resistentes a las condiciones climáticas y a los insectos.

Canadá y Estados Unidos son los líderes mundiales de los cultivos transgénicos, y este último le vende a Japón, el principal comprador, cerca de 11.000 millones de dólares anuales.

El gobierno de Tokio dispuso una subvención de 20.000 millones de dólares para desarrollar cultivos transgénicos durante los próximos cinco años, a fin de competir con Estados Unidos en el mercado biotecnológico.

Las principales firmas también están haciendo grandes inversiones en tecnología.

Hitachi Ltd. anunció el mes pasado que una de sus divisiones se está especializando en biotecnología para analizar alimentos y medicamentos, con el objetivo de que sus ventas lleguen a 25 billones de yenes (233.000 millones de dólares) para el 2010.

Las organizaciones de defensa del consumidor manifestaron temor al uso de fondos públicos para convencer a los agricultores, cuyas

ganancias ya son bastante bajas, de abandonar los cultivos intensivos tradicionales y comenzar con los transgénicos.

“Las ganancias financieras y la conveniencia podrían alentar a la comunidad agrícola de Japón a adherir a la biotecnología. La única manera de combatir consiste en aumentar la conciencia del consumidor para reducir el mercado de los productos transgénicos”, explicó Tomiyama.

Pero también comienzan a verse las victorias de la campaña de los activistas, indicó. Honda Motors anunció esta semana que construirá una planta en Estados Unidos y contratará agricultores para producir sólo frijoles de soja convencionales.

Además, Tokyo Grain Exchange informó que los precios de los frijoles de soja disminuyeron estrepitosamente en octubre, lo cual refleja la resistencia de los consumidores japoneses a los productos transgénicos.

El frijol de soja bajó a 17.500 yenes (163 dólares) la tonelada, casi la mitad de lo establecido en noviembre.

Pioneer Hybrid Japan, una importante firma de semillas, anunció que estableció un sistema para importar frijoles de soja convencionales encargando el producto a los granjeros estadounidenses, en respuesta a la demanda de los fabricantes de alimentos.

Por su parte, el gobierno decidió que a partir de abril del año 2000, 30 productos alimentarios, nacionales e importados, deberán portar una etiqueta que identifique a los fabricados a partir de cultivos transgénicos.

Japón también se propone notificar su plan a la Organización Mundial de la Salud. La lista de productos que portarán etiqueta incluye al maíz, el tofu y otros productos derivados de la soja y de consumo masivo.

Es probable que la decisión cause indignación entre los principales países exportadores de alimentos, que intentan convencer a Japón de no utilizar el sistema de etiquetas para evitar mayores preocupaciones a los consumidores.

Casi 90 por ciento de los encuestados este año por iniciativa del gobierno expresaron una profunda inquietud por la tendencia creciente de la biotecnología.

Las cooperativas de consumidores empezaron a etiquetar sus productos, para alejar temores. Pero incluso eso es cada vez más difícil porque ciertos cultivos transgénicos se mezclan con los convencionales, advirtieron.

No todo lo posible es deseable

Daniel Gatti

Montevideo, Octubre de 1999

La necesidad de un debate sobre las consecuencias del uso de los organismos genéticamente modificados en la salud humana y el ambiente, en el que participen gobiernos y sociedad civil, fue planteada por científicos de América Latina y Europa.

El tema fue tratado en el curso de un seminario sobre “Tecnología Genética”, organizado a fines de septiembre de 1999, en Montevideo por el Instituto Cultural Goethe, patrocinado por Alemania.

En ese marco se presentaron ponencias sobre distintas aplicaciones de la biogenética, así como reflexiones acerca de los vínculos entre la ética y la genética.

Las intervenciones referidas a los organismos genéticamente modificados y sus aplicaciones en la agricultura y la industria de la alimentación fueron las que generaron mayor debate.

También merecieron fuerte polémicas los planteos referidos a los aspectos legales del asunto, sobre todo con proyección a las negociaciones en curso sobre el Protocolo de Bioseguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

El argentino Alberto Díaz, director de la carrera de Biotecnología de la Universidad de Quilmes, afirmó que la genética “se ha convertido en una tecnología, más que en una ciencia”.

“Lo que se encuentra en discusión son las aplicaciones industriales de los organismos genéticamente modificados”, agregó.

Díaz estimó que esa tecnología “toca temas demasiado importantes para la humanidad, como por ejemplo nuevas tesis acerca del determinismo genético de ciertas características de las personas”.

“Hasta se podría llegar a utilizar la manipulación genética para modificar comportamientos humanos o, peor aún, para obtener respuestas previsibles a determinados estímulos”, subrayó.

Argentina “está jugada a los transgénicos, pues 80 por ciento de sus cultivos de soja, que abarcan cuatro millones de hectáreas, son con organismos genéticamente modificados”, aseveró.

La perspectiva de que Europa deje de comprar la producción de soja argentina precisamente por la presencia de organismos genéticamente modificados en ella “está provocando una gran conmoción en los productores” locales, informó Díaz.

Daniel Pagliano, de la Unidad de Biotecnología del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay, defendió, en cambio, el uso de esta tecnología.

Uruguay se está haciendo eco del “gran desarrollo que está teniendo en el mundo la biología vegetal”, y “la aplicación nacional de técnicas de combinación de genes es ya una rutina”, indicó.

Para Pagliano, el objetivo de estas investigaciones es “hacer llegar a los cultivadores mejores condiciones de producción”, y por ello se están “fabricando plantas que puedan resistir condiciones ambientales de estrés”.

Informó, además, que en Uruguay se está experimentando con distintas variedades de trébol para dotar de resistencia a un virus que ataca las cosechas de este forraje, así como a herbicidas.

La diputada Ulrike Höfken, del Partido Verde de Alemania, rebatió a Pagliano, a quien acusó de comparar de manera errónea “la tecnología transgénica con la convencional, pues en la primera se borran las barreras entre las especies”.

“No estoy contra la tecnología genética, pero pienso que existe un debate previo sobre la responsabilidad de quienes fabrican estos productos, porque no todo lo posible es necesariamente deseable”, resaltó.

Para la legisladora ecologista, “es necesario definir qué problemas puede solucionar esa tecnología y los riesgos que puede hacer correr a la salud humana y al ambiente, algo que quienes la defienden no parecen ser muy conscientes”.

Lo principal “es afianzar la seguridad alimentaria, porque si las resistencias artificiales de esos cultivos extendidos por todo el mundo llegaran a fallar, se generaría una hambruna planetaria”, enfatizó Höfken.

Con respecto a la salud humana, la diputada alemana dijo que “se ha constatado la creciente aparición de alergias como consecuencia del uso de esos organismos”.

“Esta manipulación tiene efecto en varias características de los vegetales. Por ejemplo, se ha probado que en chauchas transgénicas existía un exceso de estrógenos”, precisó.

Höfken agregó que el éxito económico de esta operación es muy cuestionable, “ya que no reduce costos, como alegan las empresas, sino que los aumenta”.

La diputada concluyó llamando a que se produzca “una discusión a nivel social, en todos los países, sobre la conveniencia de estos productos”.

El abogado alemán Dan Leskien, asesor de la asociación ambientalista Amigos de la Tierra, aseguró que en Europa “la legislación en materia de organismos genéticamente modificados es muy buena, pero cuando se observa la práctica las cosas dejan que desear”.

“Se deben intensificar los controles sobre la aplicación de las legislaciones vigentes en Europa, pero sobre todo responder a la pregunta de si estos productos son realmente necesarios para la humanidad”, observó.

El banco mundial defiende los transgénicos

Danielle Knight

Washington, Octubre de 1999

El Banco Mundial tomó parte en el debate sobre la biotecnología transgénica en la agricultura al pedir que se haga más investigación para duplicar la producción de alimentos necesaria para la creciente población mundial.

El pedido del Banco se opone al argumento de que la distribución más equitativa de la riqueza, y no la ingeniería genética, es la solución al hambre en el mundo.

El mundo se enfrenta a una nueva crisis alimentaria ahora que la población superó los 6.000 millones de habitantes y aumenta en 90 millones por año, advirtió un informe del Grupo Consultor de Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) de la institución multilateral.

Más de 840 millones de habitantes, más que la población combinada de Canadá, Estados Unidos, Europa y Japón, no tienen suficiente para comer, según el CGIAR. Aproximadamente 30 personas mueren de hambre en el Sur en desarrollo cada minuto, agregó.

“Los granjeros del mundo deberán aumentar 50 por ciento la producción de alimentos para alimentar a 2.000 millones más de personas para el 2020 y quizá 100 por ciento si sigue la tendencia actual de creciente consumo de carne, y la demanda de raciones de granos”, dijo CGIAR.

Aunque el informe divulgado reconoce que la solución al hambre “es más compleja que el aumento del consumo”, subraya cómo los des-

cubrimientos científicos, sobre todo en la ingeniería genética, pueden ayudar a que la producción de alimentos crezca al ritmo de la población.

Algunos agricultores del Sur en desarrollo ya se benefician de la biotecnología, asegura el informe.

“La inserción de un gen que produce betacaroteno, un precursor de la vitamina A, en la planta de canola es un ejemplo del éxito de la biotecnología”, según el CGIAR.

La deficiencia de vitamina A, común en el mundo en desarrollo, puede causar daño ocular irreversible. Como muchas familias cultivan canola para producir aceite comestible, la planta alterada genéticamente o transgénica ofrece una solución a ese problema de salud, señala el Banco Mundial.

También se logran avances con los genes que dan resistencia a las plantas a los insectos, las enfermedades, las sequías y las inundaciones. En India, por ejemplo, los científicos agregaron al arroz dos genes para ayudar a las plantas a sobrevivir cuando quedan sumergidas por largos períodos, algo común en Asia.

En China, un grupo de 650 pequeños cultivadores de algodón cultivaron una semilla resistente a un tipo de gusano. Pagaron un precio mayor por la semilla, pero a cambio tuvieron 90 por ciento de germinación, no el 40 por ciento habitual, señaló el CGIAR.

Tres años después, 1,3 millones de pequeños agricultores habían cultivado la semilla, y el número sigue en crecimiento, agregó el CGIAR.

Pero el informe agrega que las firmas trasnacionales de biotecnología revelaron poco interés en investigar plantas, plagas y enfermedades comunes a las zonas tropicales.

“Sus productos se adaptan mejor a la agricultura comercial de gran escala de los países industrializados que a los complejos sistemas de los agricultores en los países en desarrollo”, reconoce el CGIAR.

Incluso si las grandes firmas de biotecnología, como Monsanto y Novartis, prestan más atención a los problemas agrícolas de los países en desarrollo, muchos creen que la nueva tecnología no asegurará la seguridad alimentaria ni reducirá la pobreza.

“Las causas reales del hambre son la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a la tecnología”, dijeron Peter Rosset, del Instituto de Política Alimentaria y de Desarrollo, y Miguel Altieri, de la Universidad de California en Berkeley, ambos de Estados Unidos.

Los dos presentaron un trabajo en una conferencia sobre biotecnología celebrada en la sede del Banco Mundial en Washington.

“Demasiada gente es demasiado pobre para adquirir la comida existente, pero a menudo mal distribuida, o no tienen las tierras ni los recursos para cultivarla por su cuenta”, señalaron.

En la actualidad el mundo produce más alimentos por habitante que antes, según Rosset y Altieri. “Hay suficiente para darle a cada persona 1,6 kilos de alimentos por día: 0,9 kilos de granos, frijoles y nueces, 370 gramos de carne, leche y huevos, y lo mismo en frutas y verduras”, aseguraron.

Así mismo, Rosset y Altieri dijeron que las últimas investigaciones revelaron que las semillas alteradas genéticamente no aumentan la producción de los cultivos.

Un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos halló que las semillas de soja “Roundup Ready”, de Monsanto, producen menos medidas de frijoles que las variedades no alteradas genéticamente.

El uso de semillas transgénicas que fueron alteradas para contener un pesticida puede, como los pesticidas convencionales, contribuir a la resistencia de plagas y a desatar pestes de insectos, advirtieron Rosset y Altieri.

Ambos señalaron que hay una gran cantidad de cultivos transgénicos en el mercado que contienen el insecticida Bt, una toxina bacteriana natural utilizada durante años por agricultores que cultivan sin usar pesticidas industriales.

Las compañías de semillas, incluso Monsanto, Novartis y Pioneer Hi-Bred International, sostienen que la alteración de los cultivos para que contengan la toxina reducirá la necesidad de pesticidas químicos y por tanto, beneficiarán al ambiente.

Pero cuando el producto se introdujo en la planta, las plagas aumentaron de una cantidad “mínima y ocasional” a una “masiva y continua”, lo cual aceleró drásticamente la resistencia, aseguraron Rosset y Altieri.

Los peligros de la técnica exterminadora

Danielle Knight

Washington, Octubre de 1999

Activistas contra la biotecnología transgénica celebraron la decisión de la empresa Monsanto de no lanzar al mercado su técnica “exterminadora”, que impide la germinación de las semillas en una segunda generación y obliga así a los agricultores a comprar simientes para cada siembra.

La estadounidense Monsanto, que fabrica insumos agrícolas y pesticidas, está desde hace varios años en el centro del debate sobre los alimentos modificados genéticamente, en especial desde que anunció la nueva técnica, oficialmente denominada “sistema de protección de tecnología”.

A pesar de su anuncio de que no comercializará la tecnología “exterminadora”, la compañía multinacional advirtió que continuará investigando semillas estériles en el marco de un amplio programa de estudios sobre biotecnología.

No obstante, las organizaciones no gubernamentales que realizaron campañas contra el desarrollo de la tecnología exterminadora consideraron el vuelco de Monsanto como una victoria de la sociedad civil por la seguridad alimentaria.

“Se trata de un hecho muy significativo”, destacó Hope Shand, directora de estudios de la Fundación Internacional para el Progreso Rural, (RAFI) una organización canadiense que fue la primera en llamar la atención sobre la biotecnología.

“La tecnología exterminadora se convirtió en sinónimo de avaricia corporativa y ni siquiera Monsanto, con todo su equipo de relaciones

públicas, consiguió dar una imagen positiva sobre la esterilización de simientes”, señaló.

La organización ambientalista Greenpeace, una de las más férreas opositoras a los alimentos transgénicos, también elogió el anuncio, pero señaló que la empresa proseguirá estudiando los distintos aspectos y aplicaciones de las semillas estériles.

“Es un primer paso positivo, pero Monsanto todavía no comprendió el mensaje general”, observó Charles Margulis, un activista de Greenpeace experto en transgénicos.

Monsanto es el segundo “gigante genético” en dar marcha atrás con la tecnología exterminadora. En junio, la compañía AstraZeneca, con sede en Gran Bretaña, anunció que no comercializaría su tecnología de esterilización de semillas.

El anuncio de Monsanto se produjo a través de una carta de Robert Shapiro, presidente de la multinacional, a Gordon Conway, presidente de la Fundación Rockefeller, uno de los principales donantes para proyectos de estudios agrícolas en países en desarrollo.

Conway había instado al consejo directivo de Monsanto a abstenerse de aplicar la tecnología exterminadora, dado que la hostilidad hacia ella había aumentado significativamente.

Los gobiernos de India y Zimbabwe, por ejemplo, prohibieron el uso de esa técnica, al igual que el Grupo Consultivo del Banco Mundial sobre Estudios Agrícolas Internacionales.

En una conferencia internacional sobre biotecnología agrícola que tuvo lugar en Harare en 1998, Monsanto fue vapuleado por más de 350 delegados gubernamentales y de ONGs.

Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la seguridad alimentaria de 1.400 millones de pobres del Sur en desarrollo depende de la conservación de las semillas de un cultivo a otro.

“Si no pueden guardar semillas, tampoco pueden continuar adaptando sus cultivos a sus ambientes peculiares, y eso implica un desastre para la seguridad alimentaria mundial”, señaló Pat Mooney, director del grupo consultivo.

La tecnología exterminadora, llamada así por los activistas por la película homónima sobre un robot homicida, no pertenece en realidad a Monsanto, sino que fue desarrollada por el Departamento de Agricultura estadounidense y la Compañía Delta and Pine Land, una algodonera que Monsanto trata de adquirir.

Como Delta and Pine Land seguirá estudiando esa técnica en tanto permanezca independiente, algunos críticos cuestionaron el efecto del anuncio de Monsanto en la esfera biotecnológica.

Monsanto ha estado tratando desde abril de escabullirse de la controversia y mantuvo una serie de discusiones sobre tecnología exterminadora con usuarios, críticos, investigadores y reguladores de todo el mundo.

Jeff Bergau, vocero de Monsanto en Chicago, dijo que el anuncio fue el resultado directo de esas consultas.

“Pensamos que fue importante hacer ese anuncio antes de la fusión con Delta Pine, dado que existe un interés global de la gente en esa cuestión”, dijo.

Sin embargo, los críticos siguen preocupados porque en su carta a Conway, Shapiro no descartó el uso futuro de una técnica que “enciende o apaga” una particular característica genética insertada, como la resistencia a alguna plaga o el aumento del contenido vitamínico, tras una temporada.

Tales características se activan o desactivan mediante un “inductor” químico externo mezclado con pesticidas o fertilizantes producidos por la misma compañía.

Muchas firmas biotecnológicas, incluso Novartis y DuPont, continúan estudiando la esterilización de semillas como parte de una investigación más amplia sobre simientes transgénicas para suprimirles otras características. Muchas patentes sobre semillas manipuladas genéticamente mencionan ese tipo de esterilidad.

“La esterilidad instrumental de semillas no es un tema de estudio separado de otros”, advirtió Mooney, quien advirtió que toda gran empresa agroquímica está desarrollando su propia versión de semillas estériles.

A comienzos del nuevo siglo, por ejemplo, los agricultores podrían verse obligados a plantar semillas que sólo germinan si son rociadas mediante un procedimiento químico cuidadosamente prescrito, que incluye pesticidas, fertilizantes o herbicidas patentados, previno RAFI.

“Si las compañías pueden programar semillas transgénicas para que actúen sólo después de la aplicación de los pesticidas o fertilizantes que ellas fabrican, aumentarán notablemente las ventas de sus agroquímicos y otros insumos”, señaló Edward Hammond, otro investigador del grupo consultivo.

Mientras Monsanto aduce que los campesinos no están obligados a comprar semillas transgénicas, los estudiosos temen que los gobiernos obliguen a los agricultores a adquirir esa tecnología.

Camila Montecinos, una agrónoma del Centro para Educación y Tecnología con sede en Chile, declaró que, aunque los agricultores no compren las nuevas semillas, éstas pueden esterilizar a las semillas comunes por polinización cruzada si son plantadas en campos cercanos.

“Cuando los campesinos recojan sus semillas para sembrarlas en la próxima estación pueden descubrir, demasiado tarde, que algunas son estériles”, advirtió Montecinos.

Escalofríos

Ahn Mi-Young

Seul, Noviembre de 1999

Son Yoon-Hee ya no compra la pasta de frijol de soya que solía adquirir en el supermercado, aunque es barata y con ella podría hacer una deliciosa sopa para compartir con su esposo y su hijo de siete años.

Son, de 35 años, aprendió, al igual que otros consumidores de Corea del Sur, que los frijoles de soya utilizados en la pasta o “tubu” muy probablemente fueron producidos con semillas alteradas genéticamente.

La Federación Surcoreana para el Movimiento Ambiental, el principal grupo de consumidores financiado por el Estado, con más de 60.000 miembros, tomó muestras de decenas de marcas de tubu, las analizó y descubrió que 82 por ciento de ellas estaban hechas sobre la base de frijoles transgénicos.

Al día siguiente, las ventas de tubu cayeron entre 40 y 80 por ciento en todo el país.

“No creo que compre la pasta otra vez, a menos que esté segura de que está hecha con frijoles domésticos”, declaró Son.

“Sólo pensar que di de comer a mi hijo y mi esposo frijoles que podrían causar cáncer y debilitar el sistema inmunológico me da escalofríos”, agregó.

Al igual que los consumidores de Europa y el vecino Japón, los surcoreanos están dándose cuenta de que los organismos modificados genéticamente están mucho más presentes en su dieta diaria de lo que pensaban.

Por esta razón, las organizaciones de consumidores exigen que el gobierno establezca el etiquetado obligatorio de los productos elaborados sobre la base de material transgénico.

“En Corea del Sur, todavía es opcional el etiquetado de productos agrícolas modificados genéticamente. Debemos volverlo obligatorio”, urgió Lee So-Young, director del grupo ambientalista Cruz Verde.

Doce grupos cívicos realizaron el 30 de octubre un “festival callejero de alimentos libres de productos transgénicos” para recabar firmas en apoyo a la declaración “Estoy de acuerdo con la adopción del etiquetado obligatorio para los alimentos modificados genéticamente”.

La controversia por los productos transgénicos no se relaciona únicamente con la salud, sino también con el comercio.

Por eso, los activistas surcoreanos contrarios a una mayor apertura del mercado nacional de alimentos en la próxima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) también incluyeron en su agenda el tema de los productos transgénicos.

La conferencia tendrá lugar en Seattle, Estados Unidos, del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 1999.

“Lograr el etiquetado obligatorio de estos productos no es fácil, porque el gobierno teme recibir una gran presión de Estados Unidos, el mayor exportador de productos agrícolas modificados genéticamente”, dijo Lee.

Los partidarios del etiquetado obligatorio temen que sus esfuerzos sean interpretados como barreras al libre comercio por exportadores clave de los productos afectados.

Más de 50 por ciento de los frijoles de soja producidos en Estados Unidos son modificados genéticamente, y cerca de 30 por ciento del maíz se produce sobre la base de semillas transgénicas. Esto significa que una buena parte de sus exportaciones contienen ingredientes transgénicos.

Sólo en 1998, entraron a Corea del Sur 390.000 toneladas de frijoles de soja y 1,04 millones de toneladas de maíz manipulados genéticamente, procedentes de Estados Unidos.

La mayor parte de esos productos son utilizados en sopas, bocado de papa y cerveza, según un informe presentado por el gobierno al parlamento en julio.

Grupos de consumidores sostienen que 90 por ciento de los frijoles de soya y el maíz utilizados para sus platos favoritos son importados de Estados Unidos.

Mientras, la resistencia pública a los alimentos manipulados genéticamente preocupa también a los fabricantes de productos que contienen ingredientes transgénicos, como palomitas de maíz, aceite de maíz o pan.

Los fabricantes de tubu, por ejemplo, sostienen que ellos también son víctimas, porque no tienen otra opción que utilizar frijoles de soya importados, que son más baratos y de mayor disponibilidad que los domésticos.

Las dos caras de Japón

Suvendrini Kakuchi

Tokio, Noviembre de 1999

La fuerte oposición de los consumidores a la importación de alimentos genéticamente modificados complicará la posición de Japón en la III Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se celebrará la semana próxima en Seattle, Estados Unidos.

Hasta ahora el gobierno expresó su apoyo a que en Seattle se lance una nueva ronda de negociaciones comerciales para la liberalización de los servicios y la agricultura, llamada la “Ronda del Milenio”.

“En Seattle, Japón no puede dar un paso atrás en su posición de adalid del libre comercio”, observó Mitsushiro Kagami, investigador del Instituto de Economías en Desarrollo, de Tokio, aludiendo a la posición de Japón en la conferencia que comienza el martes 30 de noviembre y se extenderá hasta el sábado 3 de diciembre.

“Pero al mismo tiempo, el gobierno sabe que no puede ignorar la creciente demanda de los consumidores de restringir las importaciones agrícolas, una situación que no ayudará a Japón en las deliberaciones”, apuntó.

Al igual que los consumidores de Europa y de la vecina Corea del Sur, los japoneses están cada vez más preocupados por la cantidad de alimentos modificados genéticamente, o transgénicos, especialmente el maíz y la soja, y sus posibles efectos para el ambiente y la salud humana.

Japón, que es un gran importador de alimentos, adquiere casi todo su maíz y soja de Estados Unidos. Ambos productos son los que

contienen más comúnmente materiales transgénicos, especialmente los cultivados en ese país.

No obstante, Tokio vacila en adoptar medidas que se sumen a las críticas de sus políticas comerciales, consideradas demasiado protectoras del mercado local. La restricción al ingreso de alimentos con componentes transgénicos es considerada una traba comercial por las compañías agroindustriales.

En un intento de suavizar la complejidad del tema que afronta, el gobierno presiona para que las negociaciones sobre las normas del comercio agrícola contemplen la “multifuncionalidad”.

El concepto vincula el comercio agrícola con la protección del ambiente, y el papel de las comunidades campesinas en los países productores. La adopción de la multifuncionalidad responde a la creciente preocupación sobre la seguridad alimentaria en este país, dijo un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La fuente señaló que la agricultura no sólo produce alimentos, sino que forma paisajes naturales y mantiene ecosistemas. Por lo tanto, es más que un tema comercial, afirmó.

Para calmar al creciente movimiento contra el ingreso de productos transgénicos, el Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca exigirá que, a partir de 2001, los mismos tengan etiquetas que adviertan de su contenido.

Las etiquetas serán obligatorias cuando los ingredientes transgénicos sean uno de los tres principales del producto y cuando contribuyan al cinco por ciento de su peso.

Pero Australia y Estados Unidos, dos grandes exportadores de productos agrícolas, se oponen vehementemente a la clasificación, y sostienen que la liberalización de la agricultura debe estar incluida en las negociaciones de libre comercio y, por lo tanto, que la cuestión no se debe tratar por separado.

Granjeros japoneses y sudcoreanos presentaron una declaración pidiendo a sus ministros de comercio que respeten las políticas agrícolas de ambos países en las negociaciones en Seattle.

La Unión de Campesinos y Seguridad Alimentaria, una organización de consumidores, dijo que la OMC debe defender el principio de

libre comercio, pero con un profundo respeto por las ideas y preocupaciones de la gente común.

“Existe la opinión en Japón de que la OMC es una organización conservadora manejada por funcionarios presionados por ricas corporaciones. Mucha gente está desilusionada con la manera en que marchan las cosas y no confían en la entidad”, dijo la vocera Natsuko Kumasawa.

Kumasawa insistió que el debate sobre alimentos transgénicos demostró que los consumidores aún pueden hacer llegar su mensaje, rechazando los productos que no quieren y obligando a “funcionarios estrechos de miras” a reconsiderar sus políticas.

Como están las cosas, los funcionarios estadounidenses no están conformes con la idea de que las exportaciones de sus productos transgénicos a Japón declinen debido a la oposición de los consumidores.

La semana pasada, el secretario estadounidense de Agricultura, Dan Glickman, dijo en una reunión de prensa en Ginebra que mientras la protección de los agricultores es “un legítimo objetivo para cada país, lo que no es legítimo es el uso de ese propósito para mantener programas que distorsionan el comercio”.

Las asociaciones de consumidores japoneses, contrarias a la importación de alimentos transgénicos, declararon que el gobierno adoptó la posición correcta en materia de libre comercio.

“Es un paso adelante en nuestra campaña para hacer que la OMC adopte medidas de preservación ambientales y culturales en el debate sobre libre comercio”, explicó la activista Tomoko Sakuma, del Foro de Ciudadanos 2000, una organización no gubernamental que estará presente en Seattle.

“Lo que nos agrada sería que Japón sea sincero en sus negociaciones agrícolas y no trate de separar la cuestión sino que incluya al ambiente y la salud en el debate general sobre libre comercio”, agregó.

Con esa posición, los activistas pretenden que Tokio no invoque la inquietud sobre el ambiente y la salud sólo cuando sirve a sus propios intereses económicos o de consumo.

Sakuma y otros activistas piden que la OMC incluya la preservación de las comunidades, y la protección de los derechos laborales y

culturales en las negociaciones referidas a servicios y rubros industriales.

Sin embargo, eso será difícil para el gobierno, que intenta explicar sus superávits comerciales a sus socios, que lo acusan de poner trabas, como indicaron muchos economistas.

“El gobierno es débil cuando se trata de lograr un arreglo mejor para agricultores de muchos países debido a las exportaciones industriales del país, que siguen siendo altas”, dijo un activista, quien agregó que Tokio no quiere perjuicios para sus exportaciones industriales.

En junio, el superávit comercial con Estados Unidos aumentó 18,2 por ciento a 6.330 millones de dólares. Así mismo, Washington demandó a Japón por competencia desleal en sus exportaciones siderúrgicas.

David Aaron, un funcionario comercial de Estados Unidos, dijo que Japón es “el competidor más desleal del mundo”.

Otro factor importante que impide a Japón prohibir los alimentos transgénicos es el interés de sus empresas en formar parte de la billonaria industria biotecnológica, una acción respaldada con fondos oficiales.

Con el propósito de seguir el paso de la competencia estadounidense en el negocio de la biotecnología, el gobierno destinó con ese fin 20.000 millones de dólares en los próximos cinco años.

Contradicciones de la propiedad intelectual

Gumisai Mutume

Washington Noviembre de 1999

Los países en desarrollo deberán fortalecer su papel en el debate sobre alimentos transgénicos y concentrarse en el potencial de la biotecnología para aliviar la pobreza y promover la seguridad alimentaria, exhortaron activistas sociales.

La reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que se realizará en Seattle, Estados Unidos, entre el 30 de este mes y el 3 de diciembre, determinará en gran parte el futuro de la biotecnología, entre otros temas relacionados con el comercio.

Hasta ahora, la discusión sobre organismos manipulados genéticamente involucró principalmente a países industrializados, que tienen la mayor superficie de tierra cultivada y son los mayores consumidores de esos productos.

El debate se ha centrado en la seguridad alimentaria, el bienestar animal, la agricultura industrializada y el papel de las empresas privadas.

Pero el potencial de la biotecnología para aliviar la pobreza y promover la seguridad alimentaria en los países pobres ha recibido escasa atención, más allá de declaraciones de rechazo u oposición a los alimentos transgénicos.

“Se necesita con urgencia un debate basado en las mejores pruebas empíricas disponibles para los pobres de países en desarrollo”, instó Per Pinstrup-Andersen, director general del Instituto de Investigación sobre Políticas Alimentarias Internacionales.

Ese debate debe estar dirigido a “identificar los modos más apropiados en que la investigación sobre biología molecular podría contribuir a solucionar problemas de los pobres”, agregó.

La mayoría de los campesinos pobres dependen directa o indirectamente de la agricultura, y la baja productividad es una gran causa de pobreza, inseguridad alimentaria y desnutrición en las naciones de bajos ingresos.

Estos campesinos constituyen un porcentaje importante de los 1.200 millones de personas que viven en la pobreza absoluta y obtienen malas cosechas debido a enfermedades, plagas, hierbas, sequías, baja fertilidad del suelo y falta de acceso a nutrientes vegetales de precios razonables.

También forman parte, por ende, de los 800 millones de personas en todo el mundo que carecen de seguridad alimentaria.

La deficiencia de proteínas provoca anualmente la muerte de más de cinco millones de niños menores de cinco años.

Por lo tanto, consumidores, trabajadores y pequeños agricultores de países en desarrollo deben participar del debate y la planificación de políticas en la ronda multilateral de comercio de Seattle, instaron activistas sociales.

Las conversaciones sobre el futuro de los productos alterados genéticamente se enmarcarán en la discusión del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIP, por sus siglas en inglés), que obligaría a todos los países a respetar los derechos de invención, incluso de alimentos transgénicos.

Los países en desarrollo (excepto los menos desarrollados) deberían adecuarse a las normas del acuerdo a partir del próximo 1 de enero de 2000, y podrían expresar sus preocupaciones al respecto en la revisión que realizaría el Consejo sobre TRIP durante el año.

El Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional realizó en 1998 un estudio entre organizaciones nacionales de investigación agrícola de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México.

Ninguno de los centros estudiados tenía un marco jurídico ni institucional apropiado para asuntos relacionados con los derechos de propiedad intelectual.

Salvo dos instituciones de investigación, ninguno de los centros tenía una oficina o persona responsable para asistir a los investigadores en cuestiones de propiedad intelectual, acceso a tecnologías adaptadas, transferencia de tecnología o formas de proteger sus propias invenciones, señaló el Servicio.

Ya hubo importantes discusiones en el Consejo sobre TRIP acerca de varios temas que podrían causar cambios en el acuerdo, sobre temas como el manejo de cuestiones éticas y morales (si las formas de vida pueden patentarse), el conocimiento tradicional y los derechos de las comunidades donde se origina el material genético.

Algunos países en desarrollo desean asegurarse que el pacto sobre TRIP incluya disposiciones más específicas, por ejemplo para permitir que sus agricultores puedan guardar semillas de una temporada a otra o para impedir prácticas desleales que amenacen su “soberanía alimentaria”.

Otros pretenden un plazo mayor para poder instrumentar las reformas legislativas y administrativas que exige el cumplimiento del acuerdo.

Sin embargo, varios países ya adoptaron los productos transgénicos. El año pasado, 85 por ciento de toda la tierra cultivada con esos productos se encontraba en Australia, Canadá, Francia, España y Estados Unidos.

El restante 15 por ciento pertenecía a Argentina, China, México y Sudáfrica.

El TRIP abarca derechos de autor y otros derechos relacionados, marcas, diseños industriales y patentes. Incluye tanto productos como procesos, y cubre todos los campos de la tecnología y las variedades de plantas.

“El debate sobre la biotecnología para Africa debe considerarse en el contexto de la necesidad de alimentos y supervivencia de su gente”, resaltó Cyrus Ndiritu, director del Instituto de Investigación Agrícola de Kenia.

“Las soluciones derivadas de la biotecnología... podrían reducir la necesidad de agroquímicos caros y agua, así como los efectos de las enfermedades y las hierbas, para promover una agricultura sustentable en Africa”, señaló Ndiritu.

El crecimiento de la producción agrícola en Africa se entretendió considerablemente en las últimas dos décadas, de acuerdo con la FAO.

La tasa de crecimiento cayó de 2,3 por ciento al año en la década de 1970 a dos por ciento entre 1980 y 1992. En Africa subsahariana, una de las regiones más pobres del mundo, la producción de cereales por habitante está en disminución desde hace 30 años.

“El debate sobre la biotecnología en Africa no debe referirse a la necesidad que tiene o no el continente, sino a cómo puede promoverse, apoyarse y aplicarse para contribuir a la agricultura y el bienestar económico de los africanos”, observó Ndiritu.

“La necesidad de biotecnología en Africa es muy clara y no debe confundirse con las fuerzas orientadas al marketing y el superávit alimentario del mundo occidental”, agregó.

Sin embargo, los procesos utilizados en la biotecnología agrícola, en manos de empresas privadas, están cada vez más sujetos a la protección de la propiedad intelectual.

Esto significa que instituciones investigadoras del sector público podrían carecer de acceso a conocimientos básicos y procesos necesarios para la investigación, “incluso sobre los llamados cultivos huérfanos, como la mandioca y el mijo”, advirtió Pinstруп-Andersen.

Estos cereales “constituyen la dieta básica de muchos pobres, pero no ofrecen un retorno económico a la investigación y el desarrollo del sector privado, por lo tanto los esfuerzos para desarrollar mandioca resistente a las enfermedades o mijo resistente a la sequía, sea por modificación genética o cultivo convencional, deben proceder del sector público”, subrayó.

Los organismos modificados genéticamente, dados a conocer al mundo en 1973, experimentaron un notable crecimiento en Estados Unidos durante los últimos cuatro años, pero cayeron bajo la crítica de los consumidores europeos este año.

Algunos sectores de Estados Unidos consideran esas protestas como barreras no arancelarias, que han sido causa de discrepancias dentro de la OMC.

Ahora, Japón también anunció que exigirá el etiquetado de los alimentos transgénicos a partir del 2001. Corea del Sur anunció medidas similares, y Tailandia prohibió la importación de semillas y plantas modificadas genéticamente para uso local o con fines comerciales.

En otras partes de Asia, el debate está cobrando más y más vigor.

En México, la presión de grupos opuestos al lanzamiento del maíz transgénico por temor a riesgos sanitarios y ambientales hizo que el gobierno limitara las pruebas de campo de la nueva tecnología.

Un país transgénico

Marcela Valente

Buenos Aires, Noviembre de 1999

Argentina y Estados Unidos encabezan la lista de países que más expandieron la superficie sembrada con semillas genéticamente modificadas, una tecnología nueva que está en la mira de diversos grupos de interés.

En Argentina, 70 por ciento de la superficie sembrada con soja este año proviene de semillas transgénicas y lo mismo ocurre con un amplio porcentaje de la destinada al maíz.

En Estados Unidos, casi la mitad de la superficie sembrada con soja corresponde a la variedad modificada, y un tercio de la de maíz.

Entre los dos países suman más de 30 millones de hectáreas cultivadas con transgénicos. Hace sólo tres años, había en todo el mundo unas dos millones de hectáreas cultivadas con estas semillas, según estimaciones de organismos internacionales.

Expertos y ambientalistas, según los cuales los alimentos elaborados a partir de semillas manipuladas genéticamente podrían provocar alergia en personas sensibles o resistencia a los antibióticos a largo plazo, las llaman sin eufemismo “semillas Frankenstein”.

Emiliano Ezcurra, de la organización ambientalista internacional Greenpeace, dijo que la biotecnología está en etapa embrionaria y no se debería correr riesgos antes de estudiar sus efectos a largo plazo.

Por precaución, cada vez más empresas, como la de alimentos para niños Gerber y la cadena Mc Donald's, aclaran que no utilizan este tipo de productos, para ganar la confianza de los clientes.

Otros acusan de monopolio a las cinco grandes empresas transnacionales que manejan prácticamente todo el comercio de semillas

transgénicas, a través de las patentes: Monsanto, Novartis, Astra-Zeneca, Aventis y DuPont.

Por último, el debate sobre la biotecnología crece a medida que se acerca la fecha en que debería lanzarse la “Ronda del Milenio” durante la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, que se celebrará del 30 de este mes al 3 de diciembre en Seattle, Estados Unidos.

Estados Unidos y otros países con fuerte desarrollo de su sector agropecuario reunidos en el Grupo Cairns reclamarán que se ponga fin a los subsidios que representan una traba al comercio.

Estados Unidos, la Unión Europea y Japón gastan cada año más de 300.000 millones de dólares en subsidios, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y en materia de biotecnología, muchos sospechan que la resistencia de los consumidores tiene este asunto como telón de fondo.

El ingeniero Enrique Suárez, del área de Biotecnología Vegetal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, dijo que hay razones económicas, ambientales y políticas para justificar el rechazo a este tipo de desarrollo.

“Los europeos pueden alegar problemas de calidad para no comprar, y eso provoca en los consumidores una reacción genuina de temor, pero yo me pregunto: ¿saben esos mismos consumidores que los medicamentos que toman y dan a sus hijos provienen de organismos modificados sin que los estados se opongan?”, apuntó.

El experto consideró que todavía existe gran desconocimiento sobre estos temas y un fuerte manejo de la opinión pública por parte de grupos de interés. Pero si estos desarrollos son sometidos a los debidos controles, no hay por qué temer.

Sobre las acusaciones de monopolio a las empresas trasnacionales, Suárez aseguró que en el caso de las semillas de soja, las que obtiene el productor mediante la cosecha conservan sus cualidades, pero no ocurre así en el caso del maíz o el girasol, que son híbridos.

En relación con el impacto ambiental, admitió que podría haber algunos inconvenientes que aún deben tenerse en cuenta, como por

ejemplo el caso de variedades modificadas genéticamente para que resistan al herbicida, y contaminan a las malezas.

“Sería un efecto no buscado si las especies afines se cruzan en el terreno en forma natural, y la especie nativa -que debe morir- se vuelve resistente a los herbicidas”, admitió.

Sin embargo, el experto remarcó que en los años 80 se hizo extensivo el uso de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas que no son inocuos para el ambiente o el consumo humano, y con la biotecnología se redujo su uso porque las nuevas variedades no los requieren.

Desde el punto de vista alimenticio, Suárez sostuvo que con los correspondientes controles en cada país, no debería haber riesgos, aunque también señaló que hay algunos comportamientos irresponsables por parte de las empresas.

Un ejemplo de esto es el caso de una proteína brasileña de nuez, que se introdujo en una variedad de soja para hacerla más interesante desde el punto de vista nutritivo. Esa variedad provocaba alergia en consumidores vulnerables, reconoció.

Esta polémica, a la que los consumidores argentinos permanecen en gran medida al margen, podría trasladarse a la Ronda del Milenio y exigirá a los gobiernos de países agrícolas a desarrollar una estrategia comercial diferenciada para la venta de sus productos.

El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Dan Glickman, y el responsable argentino del sector, Ricardo Novo, coinciden con Suárez en que los europeos se quejan por los alimentos y no por los medicamentos, y están decididos a defender esta tecnología.

Receta para el desastre

Mark Bourrie

Ottawa, Noviembre de 1999

Expertos en salud de Canadá rechazaron un plan del gobierno para traspasar gran parte de las tareas de control alimentario a un organismo estatal que defiende intereses de los productores de alimentos y a la propia industria privada.

Las autoridades anunciaron su intención de aprobar antes de fin de año una ley que permitiría a las empresas privadas controlarse a sí mismas y otorgaría mayores poderes para aprobar nuevos productos al Ministerio de Agricultura, que ha actuado durante muchos años como defensor de la industria alimentaria.

Esa norma exigiría, además, que la peligrosidad de los productos que emplean ingeniería genética y aditivos alimentarios sea demostrada por quienes realizan denuncias.

La ley actual de Alimentos y Drogas requiere que las compañías prueben que sus productos son seguros antes de que el gobierno permita su venta.

Científicos que trabajan en los laboratorios del Ministerio de Salud canadiense sostienen que los inspectores de alimentos no serán capaces de resistir presiones políticas e industriales si la supervisión queda en manos del Departamento de Agricultura y de los fabricantes de alimentos.

Según la Coalición Canadiense de Salud (CHC), que agrupa a sindicatos y ambientalistas, la nueva ley debilitaría los poderes de los inspectores gubernamentales, restringiría el derecho público de conocer informes críticos sobre el tema y permitiría la venta incontrolada de productos transgénicos.

La norma sustituiría disposiciones incluidas en 14 leyes vigentes, incluyendo parte de la Ley de Alimentos y Drogas y la que creó en 1997 la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA), el principal organismo de contralor alimentario, dependiente del Ministerio de Agricultura.

Las críticas de científicos y activistas hicieron que el ministro de Agricultura, Lyle Vanclief, anunciara que postergará el envío al parlamento del nuevo proyecto para realizar más consultas.

“Hay una cantidad de personas y organizaciones que expresaron preocupación porque no comprenden con claridad lo que la ley quiere decir, de modo que pensamos que sería apropiado realizar más consultas con ellos”, declaró Vanclief.

“La CFIA y el Ministerio de Agricultura tienen importantes papeles que cumplir pero la inspección de alimentos no es una de ellas”, afirmó Cindy Wiggins, de la CHC.

Los temores de científicos y activistas canadienses fueron compartidos por expertos internacionales que participaron hace dos semanas en una conferencia realizada en Ottawa.

John Verral, un químico farmacéutico que trabaja en el Consejo Británico de Ética de la Alimentación, una agencia independiente de contralor, declaró que los canadienses deberán temer por su seguridad alimentaria si el gobierno sigue adelante con sus planes para dejar que la industria se autorregule.

Encomendar al mismo departamento estatal las tareas conflictivas de promover la industria alimentaria y proteger la salud sería un gran error, similar al que causó la difusión de la enfermedad “de las vacas locas” en Gran Bretaña, añadió el experto.

El personal de la CFIA provino de siete ministerios y departamentos que eran responsables de la seguridad de los alimentos de origen animal y vegetal. Antes de la creación de la CFIA, el Ministerio de Salud compartía las tareas de contralor.

“El Ministerio de Salud establece las reglas y los inspectores de la CFIA aseguran que se cumplan, pero el Ministerio de Salud realiza también la auditoría y el monitoreo de la CFIA. Esto es mucho mejor

que tener una sola agencia que fije las normas y obligue a respetarlas”, aseguró Vanclief.

Verral sostuvo, sin embargo, que la experiencia británica demostró que un departamento gubernamental que promueve los intereses económicos de la agricultura y de la industria procesadora de alimentos no puede regular en forma apropiada la seguridad del abastecimiento de víveres en el país.

Los productores de alimentos británicos no fueron capaces de prevenir por sí mismos los problemas sanitarios en su actividad, y eso llevó a que se extendiera la contaminación de la carne.

Ahora Gran Bretaña está considerando la posibilidad crear un organismo independiente de contralor alimentario que dependa directamente del parlamento.

“No acepten el sistema que demostró ser tan inadecuado para nosotros, porque es una receta para el desastre. ¡Aprendan de nuestros errores!”, dijo Verral a sus colegas canadienses.

El símbolo de McDonald's

Danielle Knight

Seattle, Diciembre de 1999

La Unión Europea (UE) rechazó en la III Conferencia Ministerial de la OMC la propuesta de Canadá y Estados Unidos de designar un grupo de trabajo sobre biotecnología para decidir sobre el comercio de productos genéticamente modificados o transgénicos.

“Rechazamos los pedidos para tratar la biotecnología exclusivamente en el ámbito comercial... y rechazamos la negociación del acceso al mercado para los organismos” transgénicos, dijo David Byrne, Comisionado de Salud y Protección del Consumidor de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE.

Canadá y Estados Unidos, que junto con Argentina, Australia, Chile y Uruguay forman el Grupo de Miami de países exportadores de productos agrícolas, son contrarios a restringir el comercio de los transgénicos, y pretenden que se discuta en la conferencia de la OMC (Organización Mundial del Comercio) que se celebra en Seattle, Estados Unidos.

Byrne dijo a los delegados de 135 gobiernos reunidos en Seattle que Europa está comprometida a continuar las negociaciones sobre el Protocolo de Bioseguridad de la Convención de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, que busca regular el comercio de los productos transgénicos.

“Nuestra prioridad sigue siendo terminar rápidamente y con éxito la negociación del Protocolo de Bioseguridad”, declaró Byrne.

Pero aún habría lugar para la discusión del tema en la OMC si el Grupo de Miami se compromete a “trabajar con tesón y constructiva-

mente para concluir en forma anticipada las negociaciones de la Bioseguridad”, dijo.

La mayoría de los países de Asia y Africa, junto con Bolivia, Noruega, Perú y Suiza, prefieren discutir el tema de la biotecnología en foros ajenos a la OMC.

Los detractores de esta tecnología sostienen que no se sabe lo suficiente sobre sus posibles efectos adversos para el ambiente y la salud, y que por eso el comercio de este tipo de productos se debe limitar o cesar.

Tewolde Berhan Gebre Egziabher, director de la Autoridad de Protección Ambiental de Etiopía, dijo que plantear el tema de los organismos transgénicos en la OMC permitiría a Estados Unidos luchar contra Europa en un foro donde el poder de Washington es “supremo”.

“Las dimensiones de la seguridad se pueden reducir para referirlas sólo a las condiciones que agradan a quienes están en control de la riqueza y el poder del mundo”, declaró.

Gebre Egziabher lidera un grupo de países africanos contrario a que se patenten las formas de vida, incluso las “plantas, los animales, microorganismos y sus partes”.

“El esfuerzo del Sur (en desarrollo) y aquellos del Norte (industrializado) que valoran la paz para disfrutar de su riqueza, y aquellos que valoran la justicia y desean una vida mejor para todos debe ser mantener a los organismos genéticamente modificados fuera de Seattle”, dijo.

En una carta dirigida el mes pasado a la representante de Comercio del gobierno estadounidense Charlene Barshefsky, un conjunto de organizaciones no gubernamentales (ONG) expresó su profunda preocupación por la propuesta de Washington para crear un grupo de trabajo sobre productos transgénicos en la OMC.

Las ONG, incluso la Unión de Científicos Preocupados, el Centro de Ley Ambiental Internacional y el Consejo de Opción del Consumidor, dijeron que la propuesta “podría limitar en exceso el derecho de los gobiernos a legislar, obstaculizando su capacidad para responder a amenazas científicamente inseguras sobre la base del principio de precaución”.

Introducir la biotecnología en la OMC podría socavar el Protocolo de Bioseguridad y “llevar a más restricciones al derecho de los gobiernos de exigir etiquetas de advertencia (en los productos transgénicos) para promover el derecho a la información de los consumidores”, agregaron.

La biotecnología ha sido un tema polémico desde que comenzaron las protestas de los activistas contra la OMC fuera del Centro de Convenciones de Seattle donde se celebra la conferencia.

José Bove, el agricultor francés que fue a la cárcel en Francia por destruir un restaurante McDonald's con su tractor, se manifestó fuera de un local de la cadena de comida rápida en Seattle para protestar contra los productos transgénicos.

Seguidores de Bove, que criticaron a la firma por vender carne tratada con hormonas y papas genéticamente alteradas, entregaban fuera del McDonald's queso roquefort, que tiene altos impuestos en Estados Unidos en respuesta a la prohibición europea a la carne tratada con hormonas.

“McDonald's es sólo un símbolo”, dijo Bove a la multitud reunida.

La protesta no es un “acto contra el pueblo estadounidense, sino contra la ideología del libre comercio que obliga a todos a comer alimentos insalubres e inseguros”, aseguró Bove.

La inquietud por los alimentos genéticamente alterados crece en Estados Unidos donde 20 legisladores del Congreso propusieron un proyecto de ley para que este tipo de productos tengan etiquetas de advertencia sobre su contenido.

Este tipo de etiquetas son obligatorias en Europa y Japón, pero la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos aún no las impuso porque sostiene que este tipo de productos son “sustancialmente equivalentes” a los no transgénicos.

Monsanto en el banquillo

Danielle Knight

Washington, Diciembre de 1999

Un grupo de abogados de Estados Unidos entabló una multimillonaria demanda judicial contra Monsanto, la compañía trasnacional de la biotecnología, acusándola de dañar la salud pública y violar las leyes antimonopólicas de este país.

La demanda plantea que Monsanto inunda el mercado con semillas genéticamente modificadas, o transgénicas, sin someterlas a las pruebas suficientes, y de formar un cartel internacional para controlar el mercado mundial de maíz y soja.

El juicio, entablado en un tribunal federal de Washington en nombre de seis agricultores de Estados Unidos y de Francia, tomó como blanco a Monsanto, pero incluye a otras nueve compañías, entre ellas DuPont, Novartis y Pioneer Hi-Bred, bajo el cargo de “complicidad conspiratoria”.

“Este es el comienzo de la resistencia contra los alimentos transgénicos”, declaró Jeremy Rifkin, director de la Fundación de Tendencias Económicas, de Washington, y un viejo enemigo de la biotecnología.

La acción legal concentrará la atención sobre las compañías que manipulan organismos vivos y planteará el interrogante del futuro de la agricultura, apuntó.

“La demanda judicial reorientará la discusión mundial sobre el asunto. Ya no se trata sólo de una cuestión comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE)”, argumentó.

La demanda es conducida por la firma legal Cohen, Milstein, Hausfeld y Toll, en nombre de un consorcio de otras compañías que

han tomado el caso sobre la base de que, si no ganan, no pagarán a los abogados.

El líder del equipo legal es Michael Hausfeld, un abogado de Washington conocido por su trabajo contra la compañía petrolera Exxon cuando el buque cisterna Valdez encalló y derramó toneladas de crudo en las costas de Alaska.

Hausfeld señaló que desde 1996 Monsanto ha usado los mercados rurales para controlar el comercio global de maíz y soja. La demanda sostiene que la firma conspiró para eliminar competidores a través de acuerdos de licencias y el abuso de derechos de patentes.

Según Hausfeld, la compañía adquirió grandes firmas de semillas y conspiró con otras corporaciones para “inflar” los precios y obligar a los pequeños campesinos a aceptar, mediante acuerdos previos, sus productos.

La demanda afirma que aún existen dudas sobre la seguridad de las semillas transgénicas.

Monsanto, por ejemplo, debió someter a más pruebas sus en otros países su producto Maíz BT para determinar si el cultivo plantea riesgos distintos en climas y tipos de suelos diferentes, dijo Rifkin.

Un estudio de la Universidad Cornell comprobó que el polen del maíz BT perjudicó a la larva de la mariposa monarca.

“¿Cuáles son las consecuencias para las aves, insectos y otros animales cuando digieren plantas que actúan como fábricas farmacéuticas? No lo sabemos”, advirtió Rifkin.

La demanda también pretende millones de dólares en daños para los agricultores estadounidenses y extranjeros que, según Hausfeld, están incapacitados de vender sus cultivos genéticamente modificados.

Casi la mitad de la soja y un tercio del maíz plantado en Estados Unidos en 1999 eran variedades transgénicas.

Monsanto afirmó que las acusaciones carecen de fundamento. David Snively, abogado de la firma, insistió que los productos biotecnológicos son seguros y que fueron aprobados por funcionarios estadounidenses.

Negó que Monsanto estuviera comprometida en una conspiración para controlar el mercado mundial de semillas.

“Este juicio forma parte de otros intentos fracasados... para bloquear una tecnología que podría mejorar nuestro ambiente, aumentar la producción de alimentos y ayudar a la salud”, dijo Snively. “Antes de entrar en el mercado, las semillas de Monsanto superan años de pruebas rigurosas”, afirmó.

Snively manifestó que la biotecnología aporta herramientas críticas a la lucha contra las deficiencias nutritivas y las enfermedades.

La semana pasada, Monsanto anunció que había desarrollado semillas transgénicas de nabo que podrían ayudar a cientos de millones de personas en países en desarrollo que sufren de ceguera y otras enfermedades causadas por la falta de vitamina A.

“Monsanto está comprometida con el derecho de los agricultores de tener acceso a semillas optativas de alta calidad”, agregó.

La demanda judicial refleja el aumento de la preocupación en Estados Unidos sobre el impacto que tendrá la biotecnología para la salud pública y el ambiente.

En audiencias públicas de la Administración de Alimentos y Fármacos, que aprueba los productos genéticamente modificados, ambientalistas y grupos de consumidores cuestionaron el sistema regulador del país.

El mes pasado, un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley que exigirá adherir etiquetas de advertencia a los alimentos transgénicos. Cientos de manifestantes en California protestaron contra los alimentos genéticamente modificados.

Financieramente, Monsanto, que invirtió miles de millones de dólares en la tecnología, está comenzando a sentir la presión de la campaña contra sus productos. El precio de sus acciones en la bolsa cayó 25 centavos, aparentemente como resultado del anuncio de la demanda judicial.

La empresa cuenta con 20 días de plazo para responder a la demanda. El caso se encuentra técnicamente en el proceso legal conocido como “descubrimiento”, en que los testigos son interrogados y se acumulan pruebas.

Hausfeld declaró que se presentarán demandas paralelas contra Monsanto fuera de Estados Unidos. Abogados en América Central y del

Sur, Australia, Europa, India y partes del sudeste de Asia investigan la posibilidad de acciones legales contra la compañía.

Grupos ambientalistas, opuestos a la tecnología dijeron que la demanda obligará a compañías de semillas a reflexionar seriamente sobre cuánto invertirán en biotecnología.

“No puedo imaginar que no tenga un efecto sobre la investigación y desarrollo de alimentos transgénicos”, declaró Peter Roderick, consejero legal de Amigos de la Tierra.

¿Una vía para erradicar el hambre?

Gumisai Mutume

Washington, Diciembre de 1999

Científicos y activistas advierten sobre el peligro de los alimentos genéticamente modificados o transgénicos, pero la producción de esos alimentos también es defendida como una vía para erradicar el hambre y la pobreza.

El Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), patrocinado por el Banco Mundial, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa Ambiental de la ONU, defiende el uso de la tecnología genética para enfrentar una inminente crisis alimentaria mundial.

En el libro “Alimentación y ciencia en el siglo XX: Ciencia para la agricultura sustentable”, editado por el CGIAR, se prevé la necesidad de una nueva revolución agrícola, más potente que la llamada “Revolución Verde” de los años 60, que debería aprovechar los progresos científicos y tecnológicos.

El empleo de modificaciones genéticas en la producción de alimentos fue objeto de protestas durante la fracasada Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio que se realizó la semana pasada en la ciudad noroccidental estadounidense de Seattle, y es muy discutido en el mundo.

El debate en torno a los organismos genéticamente modificados, que se ha desarrollado con especial intensidad en Europa, se ha dedicado más a sus posibles riesgos que a sus eventuales ventajas.

Los críticos advierten sobre inminentes epidemias de cáncer, malformaciones en recién nacidos, esterilidad e incontrolables plantas similares al monstruo de Frankenstein, mientras defienden la llamada “agricultura orgánica”, en la cual no se emplean productos químicos como fertilizantes y pesticidas.

Las primeras plantas transgénicas fueron desarrolladas en forma experimental en 1982. Desde entonces se han examinado diferentes combinaciones y variedades, y las primeras cosechas con fines comerciales estuvieron disponibles en 1996.

El CGIAR señaló que “ningún incidente en ingeniería genética o biotecnología sugiere que los riesgos sean diferentes, mayores o estructuralmente distintos de los asociados con la clásica investigación mendeliana” (desarrollada por el austríaco Johann Mendel, padre de la genética, en la segunda mitad del siglo XIX).

“Los instrumentos biotecnológicos pueden introducir genes que contrarresten la toxicidad del suelo, resistir plagas de insectos e incrementar el contenido nutritivo de las cosechas”, apuntó.

“En algunas regiones, el rendimiento puede haber alcanzado el tope, muchas de las tierras más prometedoras ya se cultivan en forma intensiva, la erosión aumenta, la escasez de agua afecta a muchas áreas y la mayoría de las pesquerías en el mundo son superexplotadas”, añadió.

El CGIAR desarrolla una campaña por “el uso seguro y responsable” de las modificaciones genéticas, alegando que el mundo deberá aumentar 50 por ciento su producción alimentaria para nutrir a sus habitantes en el 2020.

El promedio de incremento de las cosechas ha descendido a cerca de 1,3 por ciento por año, y hace tres décadas era casi el doble.

“Esa caída podría indicar que la irrigación y la fertilización han alcanzado su límite de eficacia, o incluso que la habilidad de los cultivadores para desarrollar variedades de alto rendimiento ha llegado al máximo, al menos para las cosechas cerealeras”, observó el CGIAR.

En los últimos 50 años se ha degradado un cuarto de las 8.700 millones de hectáreas cultivables en el mundo, tierras de pastoreo, selvas y superficies arboladas, por mal uso o explotación excesiva.

El Instituto de Administración Internacional del Agua, con sede en Sri Lanka, dijo que a eso debe agregarse el hecho que en 25 años “un cuarto de la humanidad sufrirá severa escasez de agua. Esa crisis representará la mayor amenaza para la seguridad alimentaria, la salud humana y el ambiente”.

La agricultura ya consume 70 por ciento de la existencia mundial de agua potable, y cerca de 90 por ciento en países asiáticos como China e India, que dependen de la irrigación intensiva.

La Comisión Mundial sobre Agua informó que 31 países, casi todos en el mundo en desarrollo, afrontan escasez de agua. Para el 2050 la cantidad aumentará previsiblemente a 55.

Ante semejante panorama, al cual se agrega que alrededor de 500 millones de personas viven sobre terrenos montañosos difíciles de cultivar y otros 850 millones en áreas amenazadas por la desertificación, “el camino a seguir requiere la incorporación de la ingeniería genética”, subrayó el CGIAR.

“Para progresar necesitamos dissociarnos de la absurda noción de que toda la biotecnología es como la de Monsanto” (una firma trasnacional que desarrolló semillas para producir plantas estériles), señaló la estudiosa brasileña María José Amstalden Sampaio.

La experta afirmó que es necesario ampliar los horizontes para comprobar que las innovaciones de las ciencias biológicas “siempre han surgido, y lo seguirán haciendo, del conocimiento genético”.

“La agrobiotecnología mantiene la promesa de aumentar los rendimientos y los valores del mercado para los campesinos. Asegura producir plantas que crecerán en ambientes hostiles con menor necesidad de insumos químicos, protegiendo el ambiente”, apuntó Sampaio.

Los nuevos cultivos tendrán “mayor composición nutritiva” y reducirán la pérdida de semillas tras las cosechas, añadió.

Sampaio cree que el mayor desafío es transferir esas nuevas características a cultivos sociales y alimentos básicos para nutrir a los más pobres y hambrientos.

En México, investigadores financiados por la Fundación Rockefeller han agregado dos genes a los cultivos básicos de arroz y maíz que,

al parecer, aumentan su tolerancia al aluminio y contrarrestan la toxicidad del suelo que es común en muchas áreas tropicales.

Los científicos también están trabajando para hacer que los genes aumenten el contenido de hierro del arroz y ayuden a prevenir la anemia humana.

“Los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado deben brindar los medios para movilizar la ciencia y la investigación con miras a una alimentación y una agricultura sustentables”, declaró Mahendra Shah, secretaria ejecutiva del sistema de revisión del CGIAR.

“Los países industrializados aportan mil veces más dinero para subsidiar su agricultura que para financiar estudios agrícolas internacionales sobre productos alimentarios básicos para los pobres”, agregó.

En defensa de la soberanía genética

Pilar Franco

Ciudad de Mexico, Diciembre de 1999.

Las protestas de activistas de Greenpeace continuaron esta semana en México, después de haber impedido el tránsito de maíz transgénico importado de Estados Unidos encadenándose a las vías del tren.

En el punto que parte del oriental puerto de Veracruz hacia la ciudad de México, miembros del grupo ambientalista lograron detener el paso de la carga.

La sobrevivencia de decenas de especies del cereal, que era ya producido por los indígenas mesoamericanos hace 6.000 años, está amenazada por la introducción a México de plantas genéticamente modificadas, sostuvo Greenpeace.

La organización ambientalista pretende que las autoridades mexicanas obliguen a Estados Unidos a impedir la exportación de semillas transgénicas a este país, explicó la portavoz de Greenpeace Cecilia Navarro.

Greenpeace considera que la importación de cereal desde Estados Unidos es ilegal y atenta contra la salud pública, en virtud de que ese país no separa el material transgénico.

La organización actuó luego de enterarse de que una embarcación había transportado días atrás de Estados Unidos a México unas 40.000 toneladas de maíz orgánico mezclado con transgénico.

La compra de maíz estadounidense es ilegal debido a que México importó cinco millones de toneladas de ese cereal el año pasado, a pesar de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firma-

do por estos dos países y Canadá, permitía la venta de apenas 2,5 millones de toneladas, señaló Navarro.

Tras mantenerse encadenados a los rieles durante diez horas los activistas impidieron la salida del tren que transportaba el maíz procedente de Estados Unidos.

Con singulares acciones, Greenpeace ha llamado la atención en México sobre los riesgos contra la pureza de las variedades mexicanas del grano al ser contaminadas por especies producidas mediante ingeniería genética.

El triunfo logrado en Veracruz es sólo un paso en el movimiento de “defensa de la soberanía” genética nacional, afirmó Navarro.

La organización ambientalista se aprestaba a proseguir con la denuncia iniciada días atrás contra la Secretaría (ministerio) de Agricultura, explicó el portavoz.

Greenpeace acusa a esa dependencia de incumplir con su responsabilidad legal de proteger el maíz mexicano, al no haberse encargado hasta ahora de reglamentar o impedir el ingreso al país de cereal transgénico.

En relación con los criterios para el manejo del maíz genéticamente modificado, la Secretaría de Agricultura sostuvo que el producto que ingresa al país es destinado para consumo humano y no para el cultivo.

Sin embargo, Greenpeace asegura que una vez que el grano ingresa en México, las autoridades no ejercen “ningún control” sobre el producto.

El grupo ambientalista protesta también contra la Secretaría de Salud, la cual se desentiende del problema aduciendo que se trata de una responsabilidad de la Secretaría de Agricultura.

A la ausencia de una política oficial y de un marco legal adecuados se suma la resistencia de las industrias a participar en la tarea de investigación y capacitación, destacó Navarro.

Greenpeace exige que el gobierno mexicano efectúe investigaciones para determinar si el maíz transgénico representa posibles daños a la salud, así como para determinar el comportamiento del mismo en relación con el ambiente.

La organización exige al gobierno mexicano aplicar el principio de precaución contemplado en el Protocolo de Bioseguridad, que será ratificado por decenas de países en enero en Montreal, Canadá, declaró Navarro.

Dicho principio considera que el criterio precautorio debe ser la base para todas las decisiones, en virtud de que el daño debe ser anticipado y prevenido antes de que se desarrolle.

En ese sentido, las operaciones de compra-venta de maíz transgénico entre las naciones deben ceñirse a las reglas del Protocolo de Bioseguridad y no a las de la Organización Mundial de Comercio, destacó Navarro.

Los activistas de Greenpeace afirman que ante la moratoria decretada por la Unión Europea, Estados Unidos se ha visto obligado a buscar otros mercados, como el de México.

Doce por ciento de los 190 millones de hectáreas de México son cultivables. En 1998, 8,4 millones de hectáreas se destinaron a la siembra de este grano, elemento básico en la dieta de los mexicanos.

Quince por ciento de la superficie destinada al maíz fue sembrada con semillas mejoradas, híbridos de la misma especie cuyo reforzamiento genético se alcanzó por la vía convencional, según informes oficiales.

Los transgénicos en la balanza

Danielle Knight

Washington, Enero de 2000

Un grupo de expertos en cuestiones ambientales y agrícolas lanzaron una ofensiva ante legisladores y periodistas de Estados Unidos para abrir un debate sobre los riesgos y beneficios de la biotecnología en países en desarrollo.

Mientras representantes de más de 130 gobiernos reanudaban a fines de mes en Montreal, Canadá, conversaciones sobre el comercio de organismos genéticamente modificados, los expertos se preguntaron en la capital estadounidense si esa tecnología dañaría el ambiente y la salud, o daría seguridad alimentaria.

La reunión tuvo el objetivo de encaminar un acuerdo en materia de normas sobre comercio internacional de organismos transgénicos.

A través de conversaciones anteriores, el llamado Like Minded Group (“grupo de países que piensan parecido”), compuesto por más de 100 países en desarrollo y China, han exigido la rigurosa reglamentación del comercio de productos transgénicos.

Las negociaciones en febrero del año pasado se paralizaron cuando ese grupo chocó con el grupo de Miami (liderado por Estados Unidos y que incluye a Argentina, Canadá, Chile y Uruguay) de exportadores agrícolas que desean normas limitadas sobre el comercio de transgénicos.

Calestous Juma, consejero especial del Centro para Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, dijo en Washington que las negociaciones sobre bioseguridad no reflejaron de manera adecuada los intereses de los países en desarrollo.

“Los asuntos están enmarcados en el contexto de las preocupaciones de países industrializados”, declaró a miembros del Congreso legislativo estadounidense.

La alarma suscitada por el impacto de la tecnología sobre la salud y el ambiente y los esfuerzos para adoptar un protocolo basado en los riesgos han ofuscado las discusiones sobre los beneficios de la biotecnología, dijo.

“Si bien la biotecnología no puede resolver todos los problemas asociados con la producción agrícola, cuenta con medios para corregir aspectos específicos”, señaló Juma.

Las cosechas se malogran en muchos lugares del mundo en desarrollo, especialmente en África, dijo. Las mejoras biotecnológicas pueden contrarrestar los suelos empobrecidos, lluvias escasas, altas temperaturas y muchas plagas que siguen afectando la seguridad alimentaria en ese continente.

Una manera de asegurar la seguridad alimentaria es ampliar el tipo de cosechas cultivadas, apuntó.

La mayor parte de las investigaciones agrícolas en los países en desarrollo están enfocadas sobre una estrecha gama de cultivos, y muchas de las sementeras usadas por las comunidades locales no se han beneficiado con las investigaciones biotecnológicas, agregó.

“La moderna biotecnología ofrece las mejores opciones disponibles para diversificar la producción agrícola acelerando el desarrollo de nuevas variedades, incluyendo aquellos cultivos mal utilizados”, dijo.

El factor principal que limita las posibilidades de los países en desarrollo de beneficiarse con los avances de la moderna biotecnología es que la mayoría de ellos carece de capacidad científica y tecnológica, observó Juma.

Para asegurar que las poblaciones más pobres del mundo no sigan pasando hambre en el siglo XXI, los avances biotecnológicos deben ser desplegados en su beneficio mediante un sólido esfuerzo de investigación agrícola por el sector público, dijo Gordon Conway, presidente de la Fundación Rockefeller.

Si bien reconoció los riesgos para la salud y el ambiente, Conway dijo que la biotecnología puede ser una de las claves para reducir el hambre.

El experto señaló un hallazgo científico anunciado este mes por el Instituto Científico de Plantas del Instituto Federal Suizo de Tecnología, en Zurich, que desarrolló con éxito un tipo de arroz transgénico capaz de eliminar la falta de vitamina A.

La carencia de este nutriente mata a dos millones de niños por año y es la principal causa mundial de ceguera. Conway también expresó que los países en desarrollo sufrían una fuerte dependencia de los pesticidas químicos en aerosol.

En China, por ejemplo, algodón genéticamente modificado que contiene el pesticida conocido como Bt permitió mayores cosechas y menos envenenamientos de otros pesticidas.

“Los posibles beneficios de la biotecnología en vegetales son considerables, pero es improbable que se materialicen a menos que se distribuyan semillas gratis, o al menos a costos nominales. Eso requerirá fuertes inversiones públicas por gobiernos nacionales y donantes”, dijo Conway.

Las mayores empresas mundiales de biotecnología no invierten en investigaciones agrícolas que beneficien a las poblaciones de países en desarrollo.

Los 100 millones de dólares que gastó la Fundación Rockefeller en los últimos 10 años para investigaciones biotecnológicas sobre el arroz, por ejemplo, fueron una gota en el océano comparados con los 13.000 millones de dólares que las compañías invirtieron para estudiar plantas resistentes en países industrializados.

Conway dijo que los programas alimentarios deben incluir los productos específicos de muchos países en desarrollo como casabe, arroz, maíz africano, sorgo y mijo. Añadió que también estaba preocupado por el uso de patentes en la investigación biotecnológica.

“Están creando graves problemas y, potencialmente, gastos adicionales significativos para programas del sector público que ya padecen de dificultades financieras y están destinados a producir semillas para campesinos pobres”, explicó Conway.

Sin embargo, Patrick Holden, director de la Asociación del Suelo, radicado en Gran Bretaña, previno que no se conoce lo suficiente acerca de la tecnología, la cual podría ocasionar graves daños sobre la salud pública y el ambiente en países en desarrollo.

Haciéndose eco de las duras críticas a la tecnología que han surgido en toda Europa y ya se están haciendo sentir en Estados Unidos, Holden dijo que las difusas plantaciones de semillas genéticamente alteradas podrían afectar la biodiversidad tanto en las áreas cultivadas como salvajes.

Describió la amenaza tóxica de cultivos transgénicos a la flora y fauna, incluyendo la mariposa monarca, y dijo que los genes de las cosechas alteradas podrían propagarse a través de la polinización cruzada y dar como resultado cizaña extremadamente resistente.

“No vemos justificación en perseguir una tecnología que no es confiable y tiene tantos efectos colaterales negativos y riesgos asociados”, manifestó Holden a los legisladores.

¿Un caballo de Troya comercial?

Mario Osava

Porto Alegre, Enero de 2000

Los agricultores del sur de Brasil que promueven o aprovechan el contrabando de semillas de soja transgénica desde Argentina actúan en contra de sus propios intereses, señalaron ambientalistas.

Las dudas sobre la capacidad brasileña de asegurar que sus granos son naturales favorecen los competidores estadounidenses, advirtió el agrónomo Sebastiao Pinheiro, de la Universidad Federal de Río Grande del Sur.

En Estados Unidos se generalizó la siembra de productos transgénicos, pero la mitad de su cosecha sigue siendo de soja convencional, en una cantidad suficiente para abastecer los mercados que rechazan el grano genéticamente modificado, por temor a sus daños aún desconocidos, recordó Pinheiro.

La ventaja de Estados Unidos consiste en que cuenta con un sistema de certificación más confiable, observó Mariana Paoli, activista de la campaña sobre ingeniería genética de la organización ambientalista internacional Greenpeace en Brasil.

El hecho de que la soja transgénica ingresara a Brasil por vía ilegal agrava la imagen negativa, de falta de control sobre el tipo producido y exportado.

Brasil es el segundo mayor productor de soja del mundo, con cerca de 30 millones de toneladas al año, y hasta ahora no autorizó la siembra comercial de la modificada genéticamente, ya producida en gran escala en Argentina y Estados Unidos.

La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), un órgano interdisciplinario del Ministerio de Ciencia y Tecnología, emitió una opinión favorable. Pero una sentencia judicial, por iniciativa del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor y Greenpeace, impide la liberación de la siembra.

El argumento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), acogido por la justicia y el Ministerio de Medio Ambiente, es que no se realizó el estudio de impacto ambiental, legalmente indispensable para ciertas actividades y proyectos en Brasil.

Hay dudas también, en el Ministerio de Agricultura, sobre las ventajas de la soja transgénica, ante la resistencia que aún enfrenta en los principales mercados importadores, de Europa y Asia. Su mayor productividad podría no compensar los mejores precios y demanda del grano convencional.

Pero la siembra clandestina y la omisión del gobierno central crean una situación de hecho, indicó Pinheiro, quien acusó de estimular ese movimiento a Monsanto, la empresa estadounidense que desarrolló la variedad de soja modificada resistente a un herbicida de su propia producción.

El contrabando de semillas argentinas ocurre desde hace dos años, según José Hermetto Hoffmann, secretario de Agricultura de Río Grande del Sur, un estado que declaró guerra a la soja transgénica.

En los dos últimos meses, una ofensiva del gobierno estadual intensificó el control en las fronteras, sometió a exámenes 700 muestras de soja y comprobó que 3,5 por ciento eran transgénicas, permitiendo el enjuiciamiento de 24 agricultores, señaló Paoli.

Un diputado del estado, Adao Preto, propuso en el Congreso Nacional una ley imponiendo a las propiedades con siembras de organismos genéticamente modificados el mismo tratamiento concedido a las tierras usadas para producir drogas ilícitas: la expropiación para fines de reforma agraria.

Hoffmann sospecha que las semillas que ingresaron de contrabando a Brasil llegaron a otros estados del sur y centro-oeste, en tanto Pinheiro cree que alcanzaron hasta Bahía, un estado tropical del noreste, donde la soja llegó más recientemente.

“El consentimiento silencioso” del gobierno central al contrabando es más grave por una cuestión sanitaria, porque puede contaminar la agricultura brasileña con enfermedades traídas de Argentina, añadió Pinheiro.

No hay información de siembras clandestinas en Paraná, otro estado del sur fronterizo con Argentina, afirmó Ivo Carraro, dirigente de la Cooperativa Central de Investigaciones estadual.

“Es poco probable” porque las variedades argentinas no se adaptan a las temperaturas más elevadas, ciclos e incluso la cultura agrícola de Paraná, indicó Carraro, quien precisó que la baja productividad no compensaría su uso.

Por eso sostuvo que el problema se limita a Río Grande del Sur, de condiciones similares a Argentina, y donde tampoco continúa el contrabando. La expansión del área sembrada con soja transgénica, estimada entre 700.000 y un millón de hectáreas, se debió a la reproducción de semillas traídas hace tres años.

Los agricultores de Río Grande del Sur tienen la costumbre de producir y usar semillas propias, en 45 a 50 por ciento, contra sólo 20 por ciento en Paraná, argumentó.

José Neumar Francelino, coordinador técnico del Servicio Nacional de Protección a Cultivares (variedades vegetales mejoradas), del Ministerio de Agricultura, tampoco cree en la extensión de siembras ilegales fuera del extremo sur de Brasil, debido a condiciones naturales desfavorables.

En el centrooccidental estado de Mato Grosso del Sur, preocupan las más de 40 áreas de siembras experimentales autorizadas, sin una legislación que reglamenten la producción, comercio y uso de productos transgénicos, según ambientalistas locales.

La CTNBio aprobó más de 600 proyectos experimentales con organismos genéticamente modificados en todo Brasil.

La soja transgénica viaja en barco

Kintto Lucas

Quito, Enero de 2000

Activistas y agricultores ecuatorianos interceptaron un barco estadounidense antes de su arribo al puerto de Guayaquil, para impedir el desembarco de una carga de 30.000 toneladas de soja transgénica.

Cincuenta activistas de la organización ambientalista Acción Ecológica y miembros de la Coordinadora Nacional Campesina utilizaron dos pequeñas embarcaciones para interceptar el martes la nave “Frina”, abordarla e impedir que siguiera su marcha rumbo al puerto.

Otros ambientalistas se introdujeron en la comandancia del puerto, junto al Defensor del Pueblo, Hernán Ulloa, y a un juez del fuero civil, para exigir a las autoridades portuarias que no permitieran ingresar al barco, a lo que éstas accedieron.

El juez pidió a los investigadores del Instituto Biológico Izquieta Pérez que analizaran muestras del producto para determinar si es posible permitir el ingreso de la soja, importada para elaborar alimento para animales.

Los ambientalistas aseguran que la carne de animales alimentados con productos transgénicos representa riesgos para la salud de los consumidores.

Acción Ecológica había sido informada por organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos de la alteración genética de la soja transportada por el Frina. Ahora confía en que, una vez realizados los análisis, la carga del barco sea incinerada o devuelta a su punto de origen. “Esperamos que no haya corrupción y se cumpla la ley, que prohíba la entrada de alimentos transgénicos en el país”, declaró Jorge Loor, dirigente de la Coordinadora Nacional Campesina.

La predicción de Loor parecería haberse cumplido ya que meses después un gerente de la empresa avícola importadora de la soja transgénica informó a Inter Press Service que los granos retenidos ya habían sido retirados del puerto en camionetas para que nadie se diera cuenta porque habían llegado a un arreglo judicial.

La manipulación genética de la composición de productos de origen animal o vegetal busca aumentar el poder nutricional de éstos, su rendimiento y su resistencia a plagas y al almacenamiento prolongado.

La bióloga Elizabeth Bravo, de Acción Ecológica, comentó que los productos transgénicos son nuevos y que nadie, ni siquiera las empresas que los crean, pueden predecir sus efectos. “Las posibles alteraciones en la salud humana y ambiental son impredecibles”, aseguró Bravo. También advirtió las consecuencias socioeconómicas de estos productos. “Los campesinos se ven obligados a adquirir las semillas” manipuladas genéticamente “so pena de perder la carrera en la competencia comercial”, explicó. “¿Quién asegura la bondad de las nuevas semillas?”, se preguntó.

La mayoría de los productos transgénicos comercializados son alimentos, semillas e insumos agrícolas y fármacos desarrollados por empresas multinacionales encabezadas por la estadounidense Monsanto y la suiza Novartis.

La revista *Tribuna del Consumidor* advirtió hace algunos meses que podrían estar ingresando en Ecuador productos transgénicos sin que su presencia se notara, pues no tienen etiqueta que los identifique como tales. Bravo dijo que también existe posibilidad de que soja importada de Argentina sea transgénica. “Aunque Ecuador importa poca soja, 80 por ciento de la que viene del exterior es Argentina y nadie puede asegurar hasta el momento que no sea transgénica, como gran parte de la que se produce en ese país”, señaló Bravo.

Según Acción Ecológica, las papas importadas desde Estados Unidos por restaurantes de comida rápida de origen estadounidense podrían ser genéticamente modificadas, al igual que aceites comestibles y algunas materias primas para la alimentación de pollos.

La Constitución ecuatoriana aprobada en noviembre de 1997 encomendó a la ley la regulación del ingreso de productos transgénicos. La norma constitucional sólo puede ponerse en práctica mediante la aprobación de una ley complementaria en el Congreso o por decreto ejecutivo.

PELIGRA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Niccolo Sarno

Roma, Febrero de 2000

Europa debe garantizar que la alimentación y la protección de la biodiversidad predomine sobre los intereses comerciales que impulsan los cultivos transgénicos, advirtió una coalición internacional de organizaciones católicas.

Las patentes de cultivos transgénicos, estimulados por la liberalización comercial y sus partidarios como la Unión Europea (UE), beneficia a grandes corporaciones a expensas de los campesinos en países pobres, según el grupo Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Seguridad (CIDSE).

El último informe de CIDSE, "Biopatentes y amenazas a la seguridad alimentaria: una perspectiva cristiana y de desarrollo", será enviado a funcionarios clave de la Dirección de Comercio y Desarrollo de la Comisión Europea, a los miembros del Parlamento Europeo y a los gobiernos de sus 15 países.

La UE apoya las reglas de comercio mundial en materia de patentes, que podrían permitir a grandes compañías controlar los recursos genéticos de la Tierra, advirtió Jef Félix, secretario general de CIDSE, alianza de 15 organizaciones católicas de Europa, América del Norte y Nueva Zelanda.

"Esas reglas resultan en la marginación y empobrecimiento de campesinos y comunidades de países en desarrollo. Eso contradice y afecta la política de desarrollo de la UE, que está dirigida a la erradicación de la pobreza y la promoción de la seguridad alimentaria", expresó.

“Europa debe asegurar que los compromisos internacionales de desarrollo, formulados en varias conferencias de la ONU en la década pasada, incluso en materia de seguridad alimentaria y protección de la biodiversidad, tengan prioridad sobre los intereses comerciales”, agregó.

También urgió a la comunidad internacional a revisar las normas multilaterales de comercio con el fin de prohibir las patentes de organismos vivos, como postulan numerosos países en desarrollo en África, Asia y América Latina, y muchas organizaciones no gubernamentales.

La oposición a la propuesta de prohibición ha surgido, entre otros, de la Comisión Europea y estados miembros de la UE”, apuntó CIDSE, agregando que existe una desigualdad fundamental en la formulación y revisión de las normas de comercio internacional.

CIDSE señaló que el actual sistema de patentes no compensa a pueblos indígenas por el conocimiento acumulado y la experiencia ancestral que hicieron posible esas supuestas invenciones.

El informe cuestiona el registro de sustancias basadas sobre el conocimiento tradicional, tendencia que impide a las comunidades indígenas que desarrollaron esos productos comercializarlos en los países donde fue otorgada la patente.

También expresa que la comercialización de variedades tradicionales de productos de granja es arrastrada a posiciones marginales del mercado, por lo cual los campesinos caen en la dependencia de variedades comercialmente uniformes.

Eso perjudica los cultivos de subsistencia de pequeña escala y los sistemas de producción basados en mercados locales.

“Esa es una seria amenaza a la agricultura en pequeña escala, con sus múltiples funciones, que podría afectar la seguridad alimentaria de millones de personas pobres”, sostiene el informe.

Importantes protagonistas, como los campesinos pobres, la mayoría de los cuales son mujeres, son sistemáticamente excluidos de las negociaciones sobre comercio multilateral, a las cuales las grandes corporaciones tienen acceso ilimitado, agregó CIDSE.

“Por el momento, las corporaciones transnacionales tienen los medios para fijar precios, solicitar patentes en cualquier parte que

quieran (cuyos costos serían demasiado altos para campesinos pobres), entablar batallas legales y patrocinar estudios privados de desarrollo basados en su estrategia comercial”, dijo.

Según CIDSE, 80 por ciento de las patentes de alimentos genéticamente modificados pertenecen a solo 13 corporaciones transnacionales, y las cinco primeras compañías agroquímicas controlan casi “la totalidad del mercado global de semillas”.

“Lo que es inaceptable es la creciente concentración del abastecimiento mundial de alimentos cada vez en menos corporaciones”, opinaron Jef Félix y Justin Kilcullen, presidente de CIDSE, en el prefacio del informe.

Bajo el Acuerdo de Propiedad Intelectual Relacionado con el Comercio (TRIPS), Estados Unidos y algunos países europeos han ejercido presión para una protección más estricta de la propiedad intelectual, incluyendo cultivos transgénicos.

TRIPS es uno de los convenios básicos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) negociados en la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales y firmado por más de 130 países en Marrakesh, Marruecos, en 1994.

En los últimos años, numerosos países en desarrollo han manifestado su creciente preocupación de que las poderosas corporaciones del Norte estén “robando” y patentando sus recursos genéticos, y algunos de ellos pretenden que el patentamiento de organismos vivos sea quitado del acuerdo.

Pero los países pobres del Sur representan solo una pequeña fracción del comercio mundial y a duras penas pueden comprometerse eficazmente en negociaciones multilaterales sobre intercambio porque a menudo carecen de recursos.

Igualmente, la asistencia está condicionada a cambios en sus políticas comerciales.

“Algunos países no tienen representación en Ginebra (sede de la OMC, en Suiza) y dependen de la cooperación internacional para asistir a las reuniones”, indicó CIDSE.

Numerosas organizaciones no gubernamentales impugnaron secciones del TRIPS, en conflicto, según ellas, con otros pactos interna-

cionales, entre ellas la Convención sobre Biodiversidad, que garantiza el derecho de las comunidades a administrar sus recursos y materiales genéticos, como cultivos y sementeras.

Bajo el TRIPS, los países deben conceder patentes a cualquier invención por un lapso mínimo de 20 años, incluyendo cultivos genéticamente modificados, y otras manufacturas pueden obtener licencias para reproducir el producto patentado.

TRIPS da un plazo de 10 años, hasta el 2005, a los países en desarrollo para enmendar sus legislaciones sobre patentes, y podrán ser denunciados ante la OMC en caso contrario.

El polen contra los insectos

Mithre J. Sandrasagra

Washington, Febrero de 2000

La plantación de semillas genéticamente modificadas disminuirá hasta 25 por ciento este año como consecuencia de la reducción de la demanda de los productos transgénicos, predijo el Worldwatch Institute.

Se trata de un hecho asombroso dado que en las últimas cuatro temporadas la plantación de cultivos alterados genéticamente se multiplicó por 20, señala el informe de la organización ambientalista con sede en Washington.

Sin embargo, la resistencia del público a consumir alimentos que contienen ingredientes transgénicos provocó una caída de las acciones de las empresas de biotecnología y de las exportaciones de esos productos.

Además, los agricultores que invirtieron en semillas manipuladas genéticamente y los insumos agroquímicos necesarios no podrán hacer frente a sus deudas si la demanda de los productos transgénicos continúa disminuyendo.

Las exportaciones estadounidenses de frijoles de soja transgénicos a la Unión Europea cayeron de 11 millones de toneladas en 1998 a seis millones de toneladas en 1999, y las de maíz se redujeron de dos millones a 137.000 toneladas en el mismo período.

Esto representa “una pérdida combinada de casi 1.000 millones de dólares” para los agricultores estadounidenses, según el informe, titulado “Retrato de una industria en problemas”.

El Norte industrial advierte lentamente que la rápida expansión de los cultivos transgénicos se asemeja a la de la energía nuclear o productos tóxicos como el DDT.

Los efectos ambientales de esas innovaciones tecnológicas anteriores resultaron ser más complejos y duraderos que las promesas relacionadas con su rápida comercialización.

Mientras, el Sur en desarrollo teme que productos transgénicos no probados y potencialmente dañinos sean vertidos en sus mercados a bajo costo.

El Deutsche Bank afirmó en un informe que “los organismos modificados genéticamente están muertos” y predijo que a corto plazo los cultivos no transgénicos serán más caros que los transgénicos.

En consecuencia, dos gigantescas empresas intermediarias, Archer Daniels Midland y A.E. Stanley, “ya comenzaron a rebajar los cultivos genéticamente manipulados debido a este riesgo financiero”, observó Worldwatch.

Treinta asociaciones agrícolas advirtieron el pasado noviembre a los agricultores estadounidenses que “las pruebas inadecuadas de semillas transgénicas podrían ser causa de demandas a los agricultores por la propagación de polen biológicamente modificado y otros daños ambientales”.

Investigaciones científicas concluyeron que el polen procedente de cultivos manipulados genéticamente es dañino para algunos insectos beneficiosos en un ecosistema.

Además, “el insecticida producido por una difundida variedad de maíz transgénico puede acumularse -en su forma activa- en el suelo durante períodos prolongados”, previno un artículo publicado por la revista científica *Nature* en diciembre de 1999.

Las consecuencias sobre los organismos del suelo y la fertilidad son potencialmente enormes, advirtieron los autores.

Otro factor que contribuyó a la reducción de la demanda en Occidente es el creciente número de fabricantes de alimentos y cadenas de supermercados que retiraron los productos transgénicos de sus góndolas para precaverse de posibles riesgos para la salud de los consumidores.

“La mayoría de las compañías de alimentos anunciaron que evitarán los ingredientes transgénicos en sus productos para el mercado europeo”, sostiene el informe de Worldwatch Institute.

Mientras, “Gerber, Frito-Lay y distribuidores de alimentos naturales como Wild Oats y Whole Foods declararon que evitarán los ingredientes transgénicos en los productos que venden en Estados Unidos, el mayor consumidor de esos productos en la actualidad”, agrega.

El 30 de enero de 2000, en Montreal, 130 países suscribieron el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, que exhorta a la precaución respecto de los organismos manipulados genéticamente.

Según este acuerdo, los gobiernos signatarios harán saber a la comunidad internacional si están dispuestos a aceptar importaciones de productos agrícolas transgénicos.

Además, el protocolo establece que los embarques que contengan organismos transgénicos vivos, como semillas y peces, deberán estar claramente identificados, y los exportadores deberá ofrecer información detallada sobre ellos.

“Aunque la biotecnología moderna representa un enorme beneficio potencial para el bienestar humano, siempre que se tomen las medidas de seguridad apropiadas, ...la introducción de organismos transgénicos no debería ser más rápida que los avances en su comprensión científica”, aconsejó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

PARADOJAS DEL DEBATE

Marcela Valente

Buenos Aires, Febrero de 2000

El tema de la biotecnología y su aplicación en el mejoramiento de la agricultura puso en evidencia las dificultades para alinearse en este debate, en el que intervienen gobiernos de 130 países, agricultores, industriales, científicos, ecologistas y consumidores.

No obstante, representantes de todos estos sectores coincidieron a fines de enero en Montreal, Canadá, en un Protocolo de Bioseguridad que deberá regular la manipulación, el transporte y la comercialización de organismos vivos, modificados en laboratorios por medio de la ingeniería genética.

El sólo hecho de que 130 países se reúnan para discutir normas de bioseguridad para estos organismos da la pauta de que su liberación al ambiente no es un asunto del todo inocuo, o al menos, nadie asegura que no tienen o tendrán un impacto negativo en el ambiente o la salud humana.

El Protocolo se abre a la firma en mayo en Nairobi y luego comenzará un proceso de ratificación en cada país que llevará al menos dos años. Para que la nueva norma internacional entre en vigencia se requiere la confirmación de al menos 50 países, pero entretanto el debate continúa.

Si bien hay decenas de cultivos manipulados para resistir herbicidas, plagas, insectos o para mejorar su apariencia, uno es la estrella en este nuevo fenómeno de la biotecnología aplicada al campo, la soja resistente al glifosato.

Para cultivar soja convencional, una vez que se preparó el suelo y se sembró, el productor debe asesorarse sobre el herbicida que debe

utilizar y en qué cantidad, para controlar las primeras malezas que le quitan fuerza a la planta.

Una vez que se las controla, surgen nuevas pero de hojas anchas, más tarde aparece el gramón, otra maleza, que requiere otro químico específico. Estas etapas de un proceso disciplinado se simplifican en gran medida con la manipulación genética.

La semilla de soja modificada -a la que se le introdujo el gen de una bacteria, el de un virus y el de otra planta-, se siembra, y a la primera maleza que aparece se le aplica un herbicida total cuyo principio activo es el glifosato, que mata todo lo verde. Como esta semilla es resistente al glifosato, la planta no muere.

Si la maleza reaparece, se vuelve a rociar con glifosato sin necesidad de llamar a un experto, un hecho que si bien reduce los costos de la explotación, podría tener efectos dañinos si alguna vez se comprueba que el glifosato tiene un impacto negativo en la salud humana o animal.

La empresa multinacional Monsanto, que desarrolló la soja transgénica resistente y vende esa semilla, es la misma que produce y vende el herbicida "Roundup", nombre comercial del glifosato.

Una paradoja de esta discusión se presenta cuando los ecologistas se oponen a la soja transgénica, que requiere menos variedad de productos químicos, y los laboratorios la ofrecen como la solución para limitar los herbicidas a uno solo, bajando costos y "beneficiando" el ambiente.

Si es menos perjudicial para el ambiente y más barato para el productor, se podría decir que es la tecnología ideal para los países más pobres.

Pero aquí surge una segunda paradoja de esta discusión sobre beneficios y riesgos del uso de semillas modificadas: la industria defiende el potencial de esta tecnología para superar el hambre en el mundo y considera necesario transferirla a los países del Sur en desarrollo.

Sin embargo Etiopía, uno de los países más pobres de Africa, la rechaza.

Tewelde, de Etiopía, fue nombrado en Montreal portavoz del Grupo de Espíritus Afines, que reunía a 74 países en desarrollo para reclamar un severo control precautorio para el uso de esta tecnología, por sus eventuales riesgos para el ambiente y la salud humana.

Su principal rival en la reunión fue el Grupo de Miami, formado por Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos y Uruguay, que avalan esas prácticas y alegan que sus opositores favorecen a los países que subsidian la producción y la exportación agrícola.

En Argentina, un país agroexportador, las contradicciones son muy marcadas. En los últimos años se hizo una enorme apuesta por los cultivos transgénicos y ahora no queda mucho margen para volver atrás si se comprueba que la tecnología es nociva.

Un observador apresurado podría suscribir enseguida al argumento de que la Unión Europea y los demás países que aplican subsidios se toman de estos riesgos potenciales de la biotecnología para rechazar los productos de países eficientes levantando una suerte de barrera paraarancelaria.

Pero el asunto parece más complejo. Organizaciones de defensa de los consumidores reclaman el etiquetado de los productos transgénicos y algunas empresas alimenticias ya están optando por la oferta de cultivos no manipulados en laboratorio, en nombre de estos consumidores cautelosos.

El temor radica en estar consumiendo como alimentos productos hechos a base de cultivos que contienen bacterias, virus o genes de otras plantas o animales, que indirectamente desarrollen en el organismo alergias o defensa ante los antibióticos.

Argentina quedó en una posición “muy vulnerable” en el mercado. En esta calificación coincidieron tanto la jefa de la delegación oficial a Montreal, Elsa Kelly, como el experto argentino de Greenpeace Emiliano Ezcurra.

“Nosotros podemos atender la opinión de Greenpeace, pero su visión es sectorial y nuestra responsabilidad es la de velar por los intereses del sector público”, dijo Kelly, quien reconoció que 50 por ciento de las exportaciones argentinas son de productos transgénicos.

Argentina, uno de los tres principales productores de soja del mundo, junto con Brasil y Estados Unidos, es el país que utiliza mayor proporción de semillas modificadas. “Los productores la adoptaron masivamente porque les permite bajar hasta 20 por ciento los costos”, aseguró.

Así, mientras Estados Unidos, que defiende esta tecnología, se reservó 45 por ciento de su superficie sembrada para soja no modificada y Brasil se mantiene casi “incontaminado”, con sólo 10 por ciento de su superficie sembrada, Argentina tienen 80 por ciento de cultivos transgénicos.

Ezcurra advirtió que los países competidores tienen capacidad de segregar y ofrecer las dos variedades de soja. “¿Qué vamos a hacer si aparecen datos más contundentes acerca de riesgos de estos usos para la salud?”, se interrogó el ambientalista y concluyó que el país “está atado de pies y manos”.

Los científicos están divididos en torno a los riesgos de la biotecnología aplicada a la agricultura. Para algunos, los controles para la aprobación de cada variedad modificada son suficientes y para otros todavía es temprano para asegurar que no habrá impacto ambiental o en la salud a largo plazo.

El experto de Greenpeace aclaró que no se trata de atacar a la biotecnología en sí misma, sino algunos usos masivos. “Nosotros no estamos en contra de los avances en medicina nuclear sino de la existencia de centrales atómicas”, ejemplificó.

A los optimistas que creen que Argentina está en la avanzada por haber extendido más que otros su superficie sembrada con transgénicos, Ezcurra les advirtió que cuando se desarrolló la tecnología nuclear también hubo euforia y ahora muchos países intentan sin éxito sacarse de encima a esas centrales.

Y respecto de las promesas de terminar con el hambre en el mundo, recordó que también la llamada “revolución verde”, cuando se hizo masivo el uso de pesticidas y fertilizantes desarrollados por los mismos laboratorios que hoy manipulan semillas, auguraba poner fin a ese flagelo.

“No estamos en contra de los controles al manipuleo y transporte, y creemos necesario informar al consumidor y al país que compra, pero cuando brindemos más información, estoy segura de que el mercado se va a calmar”, afirmó Kelly.

En este sentido, opinó que “el temor de algunos consumidores es alentado por países que quisieran levantar barreras a los productos argentinos, pero a largo plazo, los beneficios de la biotecnología se van a imponer sobre las ideas y temores de sus detractores”, sostuvo.

También organismos de defensa de los consumidores alertan sobre la concentración creciente de las empresas que comercializan estas semillas: Du Pont, Monsanto, Novartis y Limagrain. Las diez principales empresas de este sector controlan 91 por ciento del mercado mundial.

Los agricultores, en general, compran la semilla de soja una vez, y aunque no está permitido, con el producido vuelven a sembrar dos o tres veces. Pero si quisieran hacer acopio de esa semilla para venderla, podrían ir presos, ya que en esa área los controles de las empresas multinacionales son muy severos.

Por el momento, la discusión continúa. El protocolo aprobó el principio precautorio y Argentina garantizó que pondrá a disposición de sus compradores toda la información sobre el desarrollo de sus cultivos y aportará la información adicional que le sea requerida.

“Ahora, si una vez brindada toda la información, en forma injustificada o no fundamentada científicamente, el potencial cliente se niega a comprar, entonces la operación quedará sujeta a las leyes que rigen el comercio internacional de productos agrícolas”, advirtió Kelly.

Los gobiernos ignoran a la sociedad civil

Gustavo González

Santiago de Chile, Febrero de 2000

El movimiento mundial de consumidores enfrenta desafíos y tareas diversas en los países industrializados y en las regiones en desarrollo, pero en uno y otro caso sus activistas se quejan de la falta de conciencia de los gobiernos sobre el papel de la sociedad civil.

Sheila McKechnie, directora de Consumers' Association, de Gran Bretaña, dijo en Santiago de Chile que existe una crisis de liderazgo en los países de la Unión Europea (UE) y criticó también la baja calidad de la función política en ese continente.

McKechnie se reunió con dirigentes de organizaciones sociales, académicos, ecologistas y expertos gubernamentales en temas de ambiente y salud en un encuentro organizado por la oficina latinoamericana de Consumers Internacional (CI).

Con más de 40 años de existencia, tres millones de adherentes, un equipo ejecutivo y administrativo de 500 personas y un presupuesto anual de 80 millones de dólares, Consumers' Association es una de las principales entidades de su tipo en el mundo.

CI, una organización no gubernamental (ONG) internacional, es a su vez la mayor federación de grupos de consumidores en el planeta, con presencia a través de asociaciones locales en más de 150 países.

El chileno José Vargas, director de la oficina de CI para América Latina, apuntó que en esta región los gobiernos también discriminan a las organizaciones representativas de la sociedad civil en la planificación de políticas y la toma de decisiones.

“En Latinoamérica no existe comprensión del aporte que pueden hacer los consumidores para mejorar el mercado. Los gobiernos hablan de participación ciudadana pero no la hacen posible”, señaló Vargas.

En Chile, el parlamento rechazó la propuesta de incorporar a la Ley de Defensa del Consumidor un artículo para que el estado subsidiara a las organizaciones de consumidores que, al contrario de las de países ricos, no pueden generar recursos propios.

Pese a las diferencias entre naciones industrializadas y en desarrollo, el proceso de globalización genera preocupaciones comunes para los consumidores de una y otra parte, de acuerdo con lo que expuso McKechnie ante los activistas chilenos.

Uno de los rasgos generalizados es la incomprensión de los gobiernos del hito que la sociedad civil marcó en noviembre, con sus protestas en Seattle durante la tercera conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

“Seattle representó un cambio en muchos aspectos. Mostró las fallas de los gobiernos ante el movimiento social, así como la repulsa de las ONG a una globalización basada exclusivamente en criterios económicos”, dijo la dirigente británica.

La reunión en Montreal de fines de enero acerca del Protocolo de Bioseguridad fue, a juicio de McKechnie, la demostración de que los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile y otros países continúan menospreciando a los movimientos sociales.

Esos países, reunidos en el llamado Grupo de Miami, impidieron que se adoptara en Montreal el protocolo acerca de los alimentos transgénicos, producidos mediante la manipulación genética de semillas.

La directora de Consumers' Association afirmó que la transnacional Monsanto, principal productora de transgénicos, tiene también el virtual apoyo de las autoridades británicas, que califican de “grupos de histéricos” a las organizaciones de consumidores que rechazan la soja manipulada genéticamente.

Descalificaciones similares se hicieron hace 10 años, cuando esas mismas organizaciones comenzaron a denunciar los peligros de la alimentación con transgénicos del ganado, que se materializaron más tarde en la enfermedad de las “vacas locas”.

Pese a la incomprensión de los gobiernos, los consumidores tienen hoy más medios para hacer valer sus posiciones a través de campañas de información, cuyo alcance se multiplicó con la creación de Internet, destacó la activista británica.

Las acciones coordinadas contra determinados productos o las demandas simultáneas de exigencias de calidad muestran una lucha que, en las actuales condiciones, debe darse necesariamente en el interior del mercado.

McKechnie advirtió que esto representa desafíos para la democracia. “Si el poder político de los consumidores entra en el mercado, ¿qué pasa con los pobres que no pueden entrar al mercado, con los que no pueden acceder a la revolución informática?”, se preguntó.

La ciencia no va a solucionar problemas que son fundamentalmente políticos. El movimiento de consumidores puede contribuir a democratizar los gobiernos y sobre todo a organismos multilaterales como la OMC, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, dijo McKechnie.

Sergio Zorrilla, un académico chileno especializado en bioética, apuntó que en las condiciones de impotencia de los liderazgos y baja calidad de la política, señaladas por la propia dirigente británica, los planteamientos de democratizar la OMC o el FMI “parecen un gran chiste”.

Zorrilla comparó la lucha contra los alimentos transgénicos con las movilizaciones llevadas a cabo desde los años 50 ante la amenaza de la bomba atómica y abogó por un efectivo ejercicio democrático internacional.

La dependencia científica

Danielle Knight

Washington, Abril de 2000

Un equipo de científicos de Estados Unidos criticado por sus vínculos con la industria pidió más investigación sobre el impacto en la salud y el ambiente de cultivos y alimentos genéticamente manipulados.

El informe de las Academias Nacionales de Ciencias (NAS), preparado por un grupo de reconocidos científicos, dijo que las agencias reguladoras estadounidenses debería coordinar mejor sus tareas y dar al público más acceso a los procesos de modificación genética de cultivos, una práctica en aumento.

“Dada la actual preocupación pública, y a raíz de nuestra revisión de los datos, la comisión considera que las agencias deben impulsar mecanismos para proteger la salud humana y el ambiente”, dijo el presidente del equipo, Perry Adkisson, profesor de la Universidad A y M de Texas.

El grupo de científicos había recibido impugnaciones por incluir expertos que reciben fondos de la industria biotecnológica.

A pesar de eso, exhortaron a la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Departamento de Agricultura (USDA) y la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) a acordar con rapidez el papel de cada uno en la regulación de vegetales cuya genética fue modificada para resistir plagas.

“Cultivos genéticamente alterados pueden acarrear una cantidad de riesgos ambientales y sanitarios”, apuntó Rebeca Goldberg, única integrante del panel precedente de un grupo de acción ecológica, Defensa Ambiental.

La preocupación acerca de los riesgos ecológicos de ese tipo de cultivos se acrecentó cuando los estudios indicaron que el polen del maíz genéticamente manipulado para producir toxinas del insecticida Bt podría matar a las mariposas monarca.

El informe de las NAS dejó en claro que esos riesgos merecen una cuidadosa evaluación por parte de los reguladores del gobierno. En algunos casos, urgió a las agencias federales de profundizar más su tarea.

En el informe de 261 páginas titulado “Plantas genéticamente modificadas y protegidas contra plagas”, el equipo científico aseguró no tener constancia de evidencias de que los alimentos en venta hoy en el mercado sean poco seguros como resultado de su modificación genética.

Sin embargo, el informe estuvo de acuerdo con organizaciones de consumidores que reclaman mejorar los métodos empleados para comprobar si los alimentos transgénicos producen alergias a seres humanos.

Hasta la fecha, los transgénicos causaron problemas de salud o ambientales evidentes solo en circunstancias muy raras, dijo Adkisson.

Jamás se había documentado una reacción alérgica humana a causa de transgénicos de venta pública, pero ocurrió un incidente en la fase de investigación.

Personas alérgicas a las nueces de Brasil experimentaron una reacción cuando su piel entró en contacto con una solución de semillas de soja que contenían un gene de ese fruto.

“Debería darse la máxima prioridad al mejoramiento de los métodos usados en la identificación de alergénicos, especialmente enfocados sobre nuevos análisis relevantes para el sistema inmunológico humano”, dijo Adkisson.

A pesar de las conclusiones del equipo de científicos, ambientalistas, grupos de consumidores y legisladores que pidieron etiquetas en los alimentos transgénicos, cuestionaron la credibilidad del estudio y exigieron su interrupción.

“Un grupo con miembros que figuran en la lista de pagos de la industria biotecnológica no puede producir un informe independiente

con una conclusión objetiva”, declaró el diputado demócrata Dennis Kucinich, que, junto con grupos de activistas, pide una moratoria a la producción de transgénicos.

El Fondo Nacional del Ambiente, Amigos de la Tierra, el Grupo de Estudios de Interés Público y otras organizaciones señalaron que siete miembros del panel reciben dinero de la industria biotecnológica o trabajan para ella.

Michael Phillips, primer encargado del informe, dejó las NAS en la mitad del estudio. Ahora trabaja para la Organización de la Industria Biotecnológica, que acaba de lanzar una campaña publicitaria de 52 millones de dólares para persuadir al público que cualquier temor en torno de los transgénicos es infundado.

Mientras estuvo en las NAS, Phillips guió la preparación del informe y ayudó a seleccionar a la mayoría de los miembros del equipo.

“Las NAS debería mantener los más altos niveles de información científica independiente, pero este estudio no cumple con esos requerimientos”, dijo Andrew Kimbrell, director ejecutivo del Centro para la Seguridad Alimentaria.

El grupo de Kimbrell integró una coalición que reclamó a la FDA la realización de análisis obligatorios de seguridad antes de la venta al público de alimentos transgénicos, así como el etiquetado obligatorio que los identificara como tales.

El actual miembro del equipo Stanley Abramson, es un abogado experto en asuntos científicos del bufete Arendt, Fox, Kintner, Plotkin y Kahn, que defiende a empresas productoras de alimentos transgénicos ante la justicia, según grupos ambientalistas.

Otro miembro del panel, Fred Gould, admitió que había recibido fondos de investigación del gigante biotecnológico Monsanto y Mycogen.

“Es incuestionable que hay una puerta giratoria entre la industria biotecnológica y las NAS”, apuntó Philip Clapp, titular del Fondo Nacional del Ambiente.

Sin embargo, William Colglazier, funcionario ejecutivo de las NAS, afirmó que el estudio era creíble y no reflejaba ninguna

ambigüedad. Solo tres miembros del panel tienen conflictos de intereses, pero su experiencia científica supera esas consideraciones, agregó.

Colglazier dijo que el equipo nucleó a científicos de diferentes disciplinas y antecedentes. Una de los tres con conflicto de intereses fue la propia Goldburg, por sus acciones ambientalistas.

Si bien Goldburg dijo que concordaba con el informe final, aprobado por consenso, escribió una carta expresando “su honda preocupación” que el conflicto de intereses de Phillips afecte la integridad del estudio.

“La gente deberá decidir por sí misma si existe alguna contradicción en el informe”, dijo.

Un hongo amenaza la Amazonía

Kintto Lucas

San Vicente del Caguán (Colombia), Julio de 2000

La aplicación del hongo transgénico *Fusarium oxysporum* para destruir las plantaciones de coca en Colombia puede acabar con el ecosistema amazónico, según un informe científico reservado.

Los expertos Jeremy Bigwood y Sharon Stevenson detallaron la aparición del hongo, su uso posterior, sus efectos en distintos países y el daño que podría causar liberado en el ambiente amazónico, en una investigación a la que tuvo acceso Inter Press Service.

El *Fusarium oxysporum* ya demostró su poder destructor en Perú, según el informe difundido en este poblado desmilitarizado, donde se concentra el diálogo entre el gobierno de Andrés Pastrana y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Zonas de Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela podrían sufrir esos efectos en los próximos meses, agregaron los expertos.

Conjuntamente con el informe, los campesinos de la zona de la intendencia de Putumayo y del departamento de Caquetá presentaron fotos de plantaciones de plátano, yuca y arvejas totalmente quemadas por la utilización del hongo en algunos lugares de esa región.

El gobierno colombiano aseguró que no permitirá la utilización del hongo dentro de su territorio, pero no desmintió las denuncias de los campesinos.

Los campesinos colombianos pidieron que la coca sea eliminada manualmente y sin utilizar el *Fusarium oxysporum*.

“Si utilizan el hongo, más de 500.000 cocaleros tendremos que irnos a otro lugar porque ya no podremos ni siquiera realizar otra cose-

chas. Eso ya lo vemos en el Putumayo”, dijo Pedro, un campesino cocacero.

El hongo transgénico, creado en laboratorio, fue liberado por primera vez en Hawái, en la década del 60, donde investigadores estadounidenses estudiaron sus efectos sobre matas de coca que se marchitaban y morían sin un motivo aparente.

Las investigaciones determinaron que el *Fusarium oxysporum* se transmitía por suelo y agua, y se empeñaron en aislar los agentes químicos de la plaga y en desarrollar su reproducción masiva, con el fin de emplearla contra plantas de coca y otras como la adormidera (amapola), materia prima de la heroína.

A comienzos de los años 90, 25 años después del brote del primer hongo en Hawái, la epidemia de *Fusarium oxysporum* llegó a Alto Huallaga, en el oriente de Perú. Los pobladores llamaron a la plaga “seca-seca”, porque marchitaba todos los cultivos.

Para los científicos que elaboraron el informe fue mucha coincidencia que uno de los epicentros de la plaga se encontrara cerca de la Base Antidrogas de Estados Unidos en Santa Lucía.

“Los campesinos de la zona se quejaron de que se estaba fumigando sus cultivos desde helicópteros”, asegura el informe.

En 1991, en un viaje realizado al Valle del Huallaga, los miembros de la gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú se sorprendieron de la devastación provocada por la plaga de hongos que marchitaba los cultivos de coca y distintas especies vegetales.

“En casi cada sitio que visitaron tuvieron que enfrentar muchas versiones de aviones de la DEA diseminando hongos por encima de los campos de coca”, señala el informe.

Según el documento, en la última década la plaga se extendió hasta Yurimaguas, límite norte de los cultivos de coca en Perú, y más allá de Pucalpa hacia el este.

“Durante este período, revelaciones inquietantes acerca de las características del hongo fueron documentadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos por medio de la Embajada en Lima en los informes que presentaba a Washington”, argumentan Bigwood y Steven-son.

La Embajada informó que la plaga del *Fusarium oxysporum* no solo marchitaba específicamente la coca sino a casi todos los cultivos.

“Tres mil campesinos de la zona de Tingo María y Leoncio Prado tuvieron que buscar otros medios de subsistencia a duras penas, incluso lavar oro, cuando la seca-seca atacó cultivos alternativos sembrados en antiguos viveros de coca”, según el informe.

La plaga también provocó la emigración de la población selva adentro y hacia otras regiones, en un intento por evitarla.

El gobierno estadounidense contrató investigadores que constataron en sus ensayos que el *Fusarium oxysporum* mataba también al tomate, ají y papaya.

El proyecto de convenio entre Estados Unidos y Colombia para la utilización del *Fusarium oxysporum* dice que el hongo “causa una plaga debilitante y persiste en el suelo durante varios años”.

David Strughs, del Departamento de Protección Ambiental del estado de Florida donde se lo quiso aplicar pero fue prohibido, aseguró que “el hongo puede persistir en el suelo durante 40 años”.

Strughs aseguró en abril de 1999 que las especies de *Fusarium oxysporum* son capaces de evolucionar rápidamente.

Las mutaciones genéticas permanentes constituyen el factor más preocupante en la utilización de alguna especie de *Fusarium oxysporum* como bioherbicida.

“Es difícil, sino imposible, controlar la diseminación de las especies de *Fusarium oxysporum*. Los hongos mutados pueden provocar plagas en un gran número de cultivos, entre ellos tomate, pimentón y flores”, argumento Strughs.

Los cambios genéticos pueden referirse “a las características físicas, toxicidad y la especificidad del huésped, entre otras”, señaló el experto estadounidense.

La mutagenicidad ha sido el tema central de estudio en las investigaciones sobre el *Fusarium oxysporum* y llevó a que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos prohibiera liberar los hongos mutados en ese país.

El Centro de Investigación y Estudios Populares (CINEP) denunció que en la provincia amazónica de Sucumbíos, en la frontera de

Ecuador con Colombia, se están liberando los hongos como a principios de la década del 90 en el peruano Valle del Huallaga.

Según la denuncia difundida por el diario Nuevo Herald de Miami, Washington ya está desarrollando experimentos científicos con el peligroso hongo *Fusarium oxysporum* en territorio ecuatoriano.

Fuentes militares ecuatorianas, citadas por el diario Expreso de Guayaquil, confirmaron la información. Los experimentos se han cumplido sin la autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y fueron detectados con radar, aseguraron.

Sin embargo, el ministro de Medio Ambiente de Ecuador, Rodolfo Rendón, aseguró que su país no permitirá experiencias con el hongo.

Diego Pérez, investigador del CINEP, aseguró tras recorrer la provincia de Sucumbíos que los experimentos se estaban cumpliendo a cinco kilómetros de la capital provincial, Lago Agrio.

Según el informe de Bigwood y Stevenson existen amplias pruebas de la toxicidad de compuestos producidos por las especies de *Fusarium oxysporum* en animales y seres humanos.

Las toxina Fumonisina B1 producida por el *Fusarium oxysporum* causa edema pulmonar en los cerdos, cáncer de esófago en los seres humanos y cáncer generalizado en las ratas. Pero algunas especies del *Fusarium oxysporum* contienen toxinas mucho más peligrosas.

“Se sabe que contienen nivalenola, causa de vómitos, diarrea, sangrado y lesiones en la piel. También contienen desoxinivalenola o vomitoxina que se ha utilizado como agente de guerra química”, asegura la investigación.

La fusariotoxina posee niveles de toxicidad todavía mayores, porque el contacto directo puede causar inflamaciones y ha provocado la muerte de todos los animales utilizados en experimentos.

Según los investigadores la fusariotoxina es también considerada un agente de la guerra biológica y puede ir cambiando su toxicidad de acuerdo al huésped que albergue al hongo.

“Es demasiado riesgoso utilizar en una zona cuyo ecosistema suministra gran parte del oxígeno del planeta, infusiones masivas de un hongo que puede mutar cientos de veces, habitar en los suelos varias décadas y producir cantidades indeterminadas de toxinas que afectan la vida y matan gran cantidad de especies”, finaliza el informe.

El maíz, cercado por los transgénicos

Diego Cevallos

Ciudad de México, Agosto de 2000

Los organismos transgénicos podrían ser la desgracia del planeta o su preciado bálsamo, nadie lo sabe con certeza. Hasta que la respuesta se aclare, el gobierno de México se cura en salud y toma precauciones, aunque de forma tibia y tardía, en opinión de los ecologistas.

Sobre la materia, la preocupación central de los mexicanos es cómo defender el milenario maíz, su principal aporte alimentario al mundo. La supuesta presencia amenazante de los transgénicos, organismos que contienen genes de otras especies, podría alterar y hasta acabar con la rica variedad del maíz nacional, advierten los expertos.

El gobierno de Ernesto Zedillo prohibió experimentos y también el ingreso a este país de maíz transgénico, pero los ecologistas documentan que ya ha llegado. Greenpeace asegura que 25 por ciento de los cinco millones de toneladas de maíz que México importa cada año es transgénico y viene mezclado con el natural.

En México “no hay maíz transgénico” y mientras no haya evidencias científicas para descartar toda amenaza de esos productos a la salud y la biodiversidad, la prohibición de su cultivo se mantendrá, dijo Víctor Villalobos, miembro de la Comisión Intersecretarial de Biodiversidad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).

Las empresas que gastan millones de dólares en investigar y vender los transgénicos, organismos desarrollados con genes de especies vegetales o animales para combatir plagas o garantizar cultivos en condiciones difíciles, aseguran que sus creaciones salvarán del hambre a millones de personas y permitirán fáciles y rápidas cosechas.

Son un bálsamo para la pobreza, afirman. Papas con sabor a tocinno o tomates gigantes con colores del arcoiris que crecen en escaso tiempo, son apenas algunas de las posibilidades que tienen en sus manos los investigadores de la biotecnología, ciencia cuyo progreso se aceleró a partir de los años 70.

Pero los transgénicos también podrían ser vehículo de enfermedades desconocidas y multiplicar otras, y aportar nuevas plagas. Y quizás, especies vegetales heredadas del pasado se alterarán para siempre, sostienen los ambientalistas y algunos gobiernos.

La preocupación es tal que algunos estados, entre ellos México, se movilizan desde hace cerca de una década para que la comunidad internacional imponga controles a los transgénicos a través del Protocolo de Biodiversidad, firmado ya por más de 60 países.

Sin embargo, el esfuerzo enfrenta la resistencia de empresas de gran poder económico que defienden sus experimentos y argumentan que no hay datos concluyentes para demostrar que lo suyo entraña peligro.

En Europa se estudia una moratoria de tres años para esos productos, Grecia y Austria ya prohibieron su comercialización y Suiza camina en esa dirección, lo mismo que Gran Bretaña.

Para México, donde los transgénicos se consumen desde hace varios años, como cereales, chocolate y otros alimentos, incluso para niños, o con la apariencia atractiva de rebosantes papas y sabrosa soja, el debate sobre el tema es intenso.

Productos inéditos, con información genética que no existía antes en su especie, los transgénicos de maíz podrían ser o no liberados de las prohibiciones dentro de cuatro y seis años, cuando se tenga un marco jurídico adecuado e investigaciones concluyentes, indica el gobierno de Zedillo.

Una asociación de vecinos del central estado de Hidalgo presentó un recurso de amparo contra la importación, cultivo y comercialización de semillas y productos transgénicos, por considerarlos un potencial riesgo para la salud.

La jueza que conoció el caso les dio la razón y decretó la suspensión temporal de esas compras hasta que las autoridades federales le informen sobre los riesgos.

México actúa con tardanza y tibieza frente al peligro potencial que representan los transgénicos, también conocidos como productos “Frankenstein”, según Héctor Magallón, coordinador de la “campana de consumidores” de Greenpeace.

El maíz transgénico, así como la papa, el tomate y la soja genéticamente manipulados, ya circulan en México y en el futuro podrían representar un problema, advirtió Magallón.

Pero, además, los experimentos con varios de esos productos y con otros, como calabaza, tabaco, trigo, arroz, melón, papaya, chile (ají), piña y banano, están autorizados bajo condiciones controladas.

El gobierno sigue el asunto con preocupación y lo está enfrentando por medio de la CIBIOGEM, responde Villalobos.

El objetivo es lograr una regulación adecuada e informada que permita, si es el caso, que los cultivos transgénicos apoyen a la agricultura sin poner en riesgo la biodiversidad y la salud humana, manifiesta el gobierno. En México, los consumidores no tienen claro si los productos procesados que adquieren contienen elementos transgénicos.

Para mejorar esa situación, el Senado aprobó en abril un proyecto de ley que impone una etiqueta que identifique a los alimentos genéticamente modificados. Sin embargo, en la cámara de Diputados, donde debía darse forma definitiva a la ley, no se logró acuerdo.

En diversas acciones de protesta, Greenpeace denunció que Nestlé, Bestfoods y Procter and Gamble venden en México alimentos procesados con organismos transgénicos.

Pero la principal preocupación de los ambientalistas y del gobierno sigue siendo el ingreso de maíz transgénico procedente de Estados Unidos.

Considerada por algunas culturas indígenas como un “regalo de los dioses” y sembrada en medio de ritos, la gramínea, originaria de Mesoamérica, es fuente primordial de alimento de millones de personas en el mundo. Es un patrimonio de la humanidad, dicen los expertos.

El Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y Trigo, radicado en México, conserva cerca de 13.000 colecciones diferentes de maíz, muchas de las cuales fueron desarrolladas por las culturas vernáculas durante cientos de años.

Pero ese patrimonio, logrado mediante el cruzamiento de variedades y de otros experimentos que no implicaron la introducción de genes ajenos a la especie, estaría amenazado si se mezclara con maíz genéticamente modificado, coinciden en señalar los científicos.

La mezcla del maíz transgénico con alguna especie tradicional no sería difícil, pues la mayoría de variedades locales son de polinización abierta y 80 por ciento de los agricultores mexicanos guardan semilla luego de la cosecha para plantarla al año siguiente.

El maíz transgénico, que al parecer llega de Estados Unidos, amparado en la falta de regulaciones específicas sobre el tema, no incluye semillas, pero Greenpeace no descarta la eventualidad de alguna polinización excepcional.

INTER PRESS SERVICE (IPS)

Es la principal fuente mundial de información sobre los temas globales de seguridad humana, cuenta con el respaldo de una red de periodistas en más de cien países, y enlaces con 1.200 medios de comunicación en todo el planeta. Fundada en 1964, en Roma, como un puente comunicacional entre los países del Norte y el Sur, IPS se expandió rápidamente, primero en América Latina, y luego en Norteamérica, el Caribe, África, Asia, Europa y el Medio Oriente.

Es una organización no gubernamental, estructurada como Asociación Internacional de Periodistas sin fines de lucro. En las Naciones Unidas, tiene status consultivo Categoría I como ONG. Presidente de la Asociación es Oscar Arias, ex Presidente de Costa Rica y ganador del Premio Nobel de la Paz 1987.

IPS brinda con independencia, noticias internacionales, y un servicio especializado de análisis de los procesos globales y sus consecuencias en el desarrollo de los países del Sur. Su Red de Noticias en la actualidad cubre alrededor de 100 países.

El servicio de IPS es distribuido diariamente en numerosos idiomas entre los que se destacan: alemán, inglés, kiwahili, noruego, español, sueco, finlandés, holandés y portugués.

Ofrece además semanalmente o mensualmente Newsletter sobre inversión, ambiente, energía, población, integración, mujer, cultura, defensa del consumidor, derechos humanos y ciudades. También elabora el suplemento Tierramérica, especializado en medio ambiente, que se distribuye con más de quince periódicos de América Latina.

IPS tiene una destacada especialización en noticias contextualizadas, focalizadas en procesos más que en eventos específicos identificando las tendencias para, que estos hechos sean comprensibles a los lectores. IPS realiza a su vez una cobertura diaria desde el Sur, siguiendo

los procesos en desarrollo, concentrando su atención en los actores no tradicionales.

Es además el primer servicio en publicar diariamente información sobre las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), en especial, en las conferencias más importantes de las Naciones Unidas, a través del suplemento “Terraviva” publicado en las Cumbres mundiales de Río de Janeiro, Viena, el Cairo, Copenhague y Beijing. De acuerdo a recientes estudios de la Association for Progressive Communication (APC), IPS cuenta con el principal resumen global de noticias para activistas de ONG’s en todo el mundo.

Para Suscribirse al servicio de IPS se puede enviar un e-mail a ips@tips.org.uy o latam@ips.org Existen distintas categorías de suscriptores y las tarifas se adaptan al suscriptor, dependiendo, por ejemplo, si la información será utilizada para ser reproducida o simplemente leída, si se es estudiante, una institución, un medio y qué tipo de medio. El suscriptor recibe un Username & Password para bajarlo directamente del web; o enviamos el servicio por e-mail y desde ese momento tiene libre acceso a la información.